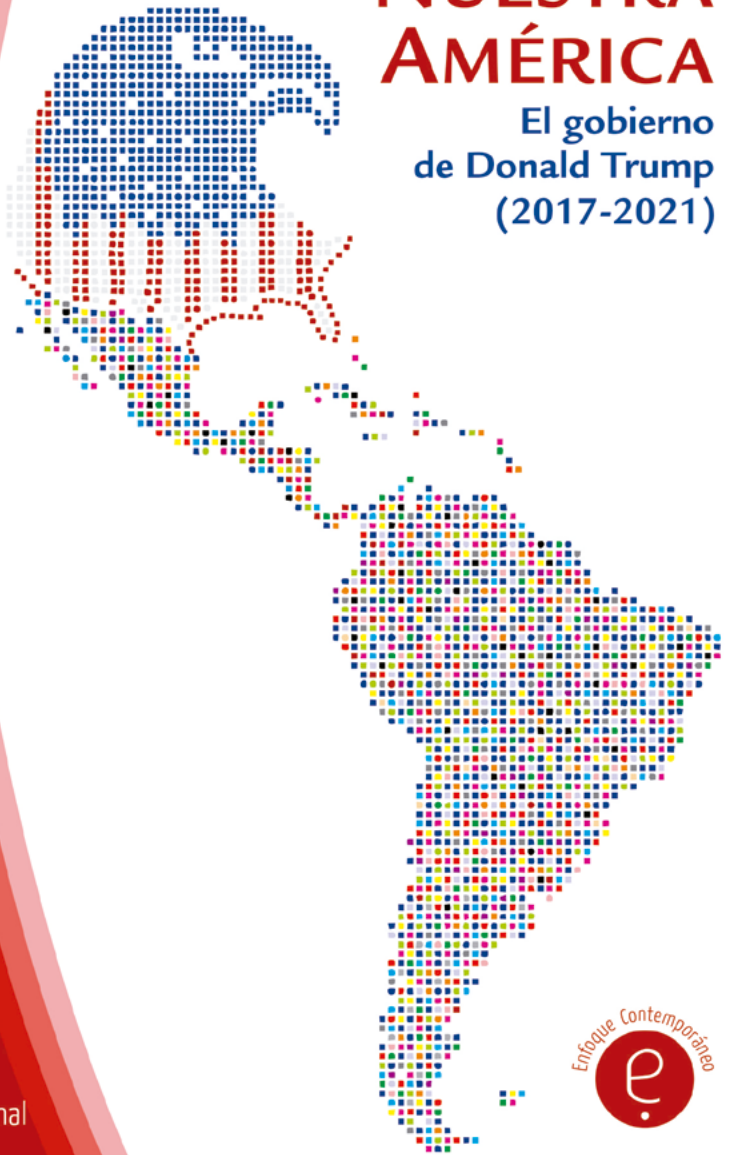


Luis Suárez Salazar

ESTADOS UNIDOS VS. NUESTRA AMÉRICA

El gobierno
de Donald Trump
(2017-2021)



Ediciones
Política Internacional





ESTADOS UNIDOS VS. NUESTRA AMÉRICA
EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP
(2017-2021)

LUIS SUÁREZ SALAZAR



Edición, corrección y coordinación: Ana Molina González
Diseño y maquetación: Yadyra Rodríguez Gómez

© Luis Suárez Salazar, 2021

© Sobre la presente edición:
Ediciones Política Internacional, 2022

ISBN: 978-959-7267-10-2

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación
sin permiso previo por escrito de los titulares del *copyright*.

Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”
Ediciones Política Internacional
Calle Calzada 308, entre H e I, Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
isri-vrext03@isri.minrex.gob.cu

ÍNDICE

PREFACIO / 8

EL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP: UNA REDOBLADA AMENAZA PARA NUESTRA AMÉRICA / 12

Introducción / 12

Objetivos hemisféricos
de las dos administraciones de Barack Obama / 15

Una mirada a algunos enunciados de la PPR / 24

El escenario más probable de las políticas hacia
América Latina de la administración de Donald Trump / 32

A modo de conclusión / 48

LAS POLÍTICAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP: UNA APROXIMACIÓN A SUS PRIMEROS 155 DÍAS / 52

Introducción / 52

Fortalecer su dominación neocolonial sobre México / 54

Bajar las fronteras de seguridad
de los Estados Unidos hasta el sur de México / 61

Fortalecer “la alianza estratégica”
entre Colombia y los Estados Unidos / 68

Derrocar al Gobierno constitucional venezolano / 73

Reformar y revitalizar la OEA
y el Sistema Interamericano de Defensa / 78

Debilitar a la UNASUR y a la CELAC / 82

Dividir la Caricom y fracturar
sus interrelaciones con Venezuela / 87
Las relaciones oficiales de los Estados Unidos
con Cuba: continuidades y cambios / 93
Tres párrafos de cierre y una advertencia de José Martí / 97

**LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO TEMPORAL
DE DONALD TRUMP CONTRA NUESTRA AMÉRICA:
UNA MIRADA RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA / 100**

Introducción / 100
Acciones más relevantes de la administración Trump
contra Nuestra América / 101
A modo de conclusión: una rápida mirada al porvenir / 128

**LAS ESTRATEGIAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP HASTA 2020:
ALGUNAS ANTICIPACIONES / 137**

Introducción / 137
Una mirada a los próximos 21 meses / 138
A modo de conclusión: ocho párrafos y una exhortación / 169

**LAS POLÍTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE DESPUÉS DE LOS COMICIOS DE 2020: UNA PRIMERA
APROXIMACIÓN AL ESCENARIO MÁS PROBABLE / 172**

Introducción / 172
Los análisis prospectivos se deben hacer
con la memoria y no con la amnesia / 174
Escenario más probable de la política
de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe / 177
Reflexiones finales / 187

**EL “GOBIERNO TEMPORAL” DE DONALD TRUMP: ¿CRISIS
O FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN DE ESTADOS
UNIDOS SOBRE EL SUR DEL CONTINENTE AMERICANO? / 189**

Introducción / 189

Una mirada retrospectiva al sistema interamericano / 190

Una mirada a los fracasos de la política
hemisférica de la “era de Trump” / 194

Una aproximación a los éxitos de la política hemisférica
del único gobierno de Donald Trump / 200

A modo de conclusión: cuatro párrafos,
incluidas dos metáforas / 214

**LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO TEMPORAL DE JOE BIDEN
HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN ANÁLISIS
INCOMPLETO DE SUS PRIMEROS CIEN DÍAS / 216**

Introducción / 216

Algunas de las acciones contra América Latina
y el Caribe del gobierno de Biden / 217

A modo de conclusión / 223

BIBLIOGRAFÍA / 224

DEL AUTOR / 241

En un análisis pormenorizado, tomando el pulso a la evolución de los acontecimientos, el destacado y acucioso investigador cubano Luis Suárez Salazar ofrece a los lectores una obra imprescindible para entender las lógicas imperiales presentes en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región de América Latina y el Caribe durante el gobierno temporal de Donald Trump (2017-2021), caracterizada, en esencia, por la continuidad de una fuerte contraofensiva imperial plutocrática, con el objetivo deliberado de preservar o recomponer el sistema de dominación de ese país en las Américas.

Los textos reunidos en este volumen —artículos, ponencias, ensayos— develan con total nitidez la historia más reciente de las pugnas geopolíticas de los grandes poderes, así como las luchas de los pueblos de Nuestra América y los obstáculos principales que estos continúan enfrentado en la defensa de su soberanía y en sus aspiraciones de unidad e integración. Esos enemigos, abiertos y encubiertos, no han sido otros, desde la centuria decimonónica hasta nuestros días, que los gobiernos permanentes y temporales en los Estados Unidos, las oligarquías, los poderes fácticos regionales y la propia desunión de nuestros países y pueblos.

Al leer estás páginas se refuerza aún más la vigencia de las palabras de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, cuando, desde fecha tan temprana como el año 1891, señalaba: “¡Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes”.

PREFACIO

Dándole continuidad a los estudios e investigaciones que he venido realizando y a los libros que he venido publicando desde hace poco más de dos décadas sobre las estrategias y las tácticas empleadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos con vistas a preservar o a recomponer su sistema de dominación (hegemonía, acorazada por la fuerza) sobre los Estados y los territorios no independientes ubicados en el espacio geográfico, humano y cultural que José Martí denominó Nuestra América (Suárez 2000, 2003, 2006, 2010 y 2017), este volumen incluirá seis de los ensayos o artículos que he escrito en los cuatro años más recientes sobre las políticas emprendidas hacia esa región durante el período del gobierno temporal de Donald Trump (2017-2021).¹

- 1 En la literatura marxista, siempre se han diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socioclasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina “la maquinaria burocrática-militar” y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente, la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a los que en ese texto llamaban “grupos de poder y poderes fácticos”, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no

Estos trabajos habían sido incluidos, previamente, en algunos libros, revistas o boletines electrónicos publicados en diferentes países de América Latina y el Caribe; en particular, en Argentina, Bolivia, Cuba y México. Habían sido coordinados, en su mayoría, por diferentes colegas integrantes del Grupo de Trabajo (GT) *Estudios sobre Estados Unidos*, fundando en 2004 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Entre estos colegas, creo un deber destacar al prestigioso científico social nuestro americano, nacido en Panamá, Marcos Gandásegui, Jr. (quien desapareció físicamente el 24 de abril de 2020), a Dídimo Castillo, a Leandro Morgenfeld y Mariana Aparicio Ramírez.

Sin sus fecundos esfuerzos, tal vez, la mayor parte de los escritos que componen este libro nunca se hubieran publicado en soporte papel por la prestigiosa editorial Siglo XXI de México, en coedición con el laborioso y eficaz equipo editorial de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Comoquiera que tengo conciencia de que un buen número de lectores cubanos interesados en estos temas (y, en particular, los jóvenes y estudiantes) no siempre tienen posibilidades de acceder a esas publicaciones separadas unas de otras en el tiempo y en el espacio real o virtual, tomé la decisión de sugerirle al recién fundado sello editorial del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI), Ediciones Política Internacional, la publicación de este volumen.

democráticos que se producen en distintos países del mundo. De ahí la validez de emplear el término “gobierno temporal” para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en los Estados Unidos y a otros gobiernos del continente americano [Todas las notas son del autor (*N. de la E.*)].

En cuanto su director, el experimentado editor y prestigioso intelectual cubano Omar González, me comunicó la aceptación de mi propuesta, me impliqué en la selección, organización y revisión de los textos que lo componen. En una nota colocada a pie de la primera página de cada uno de ellos, se indicarán las publicaciones periódicas o los libros en que estos fueron publicados total o parcialmente por primera vez. No obstante, para evitar, en la medida de lo posible, repeticiones innecesarias en la actual edición se harán algunos cambios.

A su vez, en sus correspondientes páginas finales dejaré consignada la fecha en que culminé los originales de cada uno de esos escritos. Y esto se hará para que se pueda seguir el orden lógico y cronológico de mis pensamientos y conclusiones.

Por otra parte, siguiendo el orden alfabético del primer apellido de sus correspondientes autores y las fechas ascendentes en que sus trabajos se publicaron, todas las referencias indicadas entre paréntesis que sean pertinentes aparecerán consignadas en la Bibliografía, al final de este volumen.

Pero antes de esta, decidí incluir, a modo de epílogo, el análisis expresamente incompleto que realicé sobre los primeros cien días de la administración demócrata presidida, desde finales de enero de este año [2021], por Joe Biden.² En esas pocas páginas plasmé mis valoraciones con relación a las marcadas continuidades y a los pocos cambios que, hasta las dos primeras semanas de mayo de 2021, se habían producido entre sus políticas hacia el ahora llamado “sur político del continente americano” en comparación con las que, en los cuatro años precedentes, había emprendido su archirreaccionario, megalómano y corrupto antecesor republicano.

2 Me refiero al artículo incluido en este volumen con el título: “Las políticas del gobierno temporal de Joe Biden hacia América latina y el Caribe: un análisis incompleto de sus primeros cien días”.

Debo reconocer que lo indicado respecto a algunas de ellas y, en especial, las relativas a las relaciones oficiales de los Estados Unidos con Cuba tomaron un rumbo distinto al que en el artículo que terminé de escribir el 14 de mayo de 2020 había calificado como “el escenario más probable”.

Por fortuna, en las conclusiones de ese escrito reiteraré lo que he expresado en otras muchas ocasiones: “el futuro no está predeterminado. Es un campo de batalla entre los sujetos sociales y políticos [estatales y no estatales] que constantemente pugnarán entre sí (muchas veces, de manera violenta) para defender sus intereses y preservar sus correspondientes cuotas de poder económico, político, social e ideológico-cultural”. Y enseguida agregué:

(...) la historia nos demuestra que los cambios positivos que ocasionalmente se han producido en las relaciones interamericanas desde fines del siglo XIX hasta la actualidad siempre han sido frutos de las victorias obtenidas por los movimientos sociales, políticos e ideológico-culturales de los pueblos, así como por algunos Gobiernos latinoamericanos y caribeños en sus luchas, armadas o desarmadas, por obtener la que en 1890 José Martí denominó su “segunda independencia” frente a la República imperial todavía institucionalizada en los Estados Unidos.

EL AUTOR

La Habana, 11 de diciembre de 2021

EL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP: UNA REDOBLADA AMENAZA PARA NUESTRA AMÉRICA

Introducción

Como se indica en su título, este ensayo va dirigido a realizar una primera y seguramente incompleta aproximación a las redobladas amenazas que le planteará la recién inaugurada administración de Donald Trump a los pueblos, las naciones y a ciertos gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales ubicados al sur del Río Bravo y de la península de Florida. Asimismo, a los pueblos de algunos de los territorios de esa región aún sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda.

Para cumplir ese propósito, las páginas que siguen se dividirán en tres acápites. En el primero me referiré a los que he denominado objetivos estratégicos, generales y, en determinados casos, específicos que guiaron las “estrategias inteligentes” hacia el sur político del continente americano desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. En el segundo, realizaré varias referencias a los enunciados sobre “la familia de las Américas” plasmados en la reaccionaria Plataforma del Partido Republicano (PPR), aprobada en la Convención efectuada en Cleveland a finales de julio de 2016.

Y, en el tercero, presentaré mis consideraciones preliminares sobre *el escenario más probable* de las políticas hacia América

Latina y el Caribe que desplegarán los grupos de poder y los poderes fácticos de los Estados Unidos, al menos, en los dos primeros años del gobierno temporal del controvertido, racista, misógino, homofóbico y xenofóbico magnate inmobiliario y “miembro de la clase capitalista transnacional” Donald Trump (Robinson, 2016).

Este, siguiendo sus peores prácticas empresariales y a causa de los “conflictos de intereses” que se crearán entre estas y sus altas responsabilidades estatales, parece determinado a llevar “la corrupción” a un “nuevo nivel” en los “círculos altos del poder estadounidense”, incluidos algunos de los integrantes de su gabinete previamente caracterizados por “la falta de preocupación ética en sus propios negocios” (Baker, 2017).

Como en otros de mis ensayos, ese escenario se elaborará desde los principales conceptos teóricos y metodológicos de la prospectiva crítica. Esta parte del criterio de que el futuro es “más construible que previsible”. Por tanto, “no es único, ni lineal”. Al contrario, pueden vislumbrarse varios escenarios alternos. Ninguno está predeterminado, ya que dependen de los resultados de las acciones reactivas, preactivas y proactivas del “hombre colectivo”. En consecuencia, el porvenir es un *campo de batalla* (muchas veces violento) entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que “pugnan por imponer su poder y para defender sus intereses” (Mojica, 2000: 112).

Sin negar la impronta y los márgenes de decisión de cualquier mandatario, la utilización de esos conceptos es necesaria; ya que en la mayor parte de las aproximaciones que he podido leer sobre la que será la proyección externa de los Estados Unidos durante la actual administración de la denominada “derecha alternativa” (*al right*) republicana se olvida que, con independencia de las posiciones personales de

cualquier presidente (por muy “atípico”, “imprevisible”, “errático”, “volátil”, “egocéntrico” o “megalómano” que sea),³ la política interna y externa que desarrollará esa potencia imperialista durante el gobierno temporal de Donald Trump será *la resultante* de los consensos previamente existentes o reelaborados entre los representantes políticos, militares, intelectuales e ideológico-culturales de los diferentes sectores de las clases y los grupos dominantes que participan en las diferentes instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Igualmente, de las percepciones que estos tengan con relación a los resultados (positivos o negativos) de las políticas desplegadas por la administración precedente, tanto para sus propios intereses y cuotas de poder, como para la preservación de la que he denominado “seguridad imperial” de los Estados Unidos.

Como he tratado de demostrar en diferentes publicaciones ya referenciadas, lo antes dicho contribuye a explicar las continuidades de los objetivos estratégicos, generales y, en ciertos casos, específicos, al igual que de muchas de las estratagemas desplegadas y las herramientas utilizadas por las diferentes administraciones estadounidenses, aun cuando estas hayan sido controladas por diferentes sectores de los partidos demócrata o republicano. Asimismo, los cambios de conceptos, estrategias o en el empleo de ciertas herramientas que se han producido entre una y otra administración e, incluso, durante los sucesivos mandatos de algunas de ellas.

Esas continuidades y esos cambios (en ocasiones rupturistas con las políticas precedentes) también han estado influidos y,

3 Esos y otros calificativos (algunos de ellos, más fuertes) han sido empleados por diferentes autores para caracterizar los comportamientos de Donald Trump, antes y después de su elección como presidente de los Estados Unidos.

en algunos casos, determinados por las consideraciones de cada una de esas administraciones acerca de la correlación internacional de fuerzas existente en cada momento, así como, en menor medida, por las reacciones de las clases y los grupos subalternos estadounidenses frente a las políticas internas o externas desplegadas por cada uno de esos gobiernos temporales. Asimismo, por la magnitud y la calidad de las resistencias que les hayan ofrecido a estas últimas otros actores sociales y políticos, gubernamentales y no gubernamentales, de otros Estados del mundo.

Objetivos hemisféricos de las dos administraciones de Barack Obama

Como indiqué en una ponencia que presenté en un evento internacional efectuado en noviembre del pasado año en la Universidad Nacional de Colombia (Suárez, [2014] 2016), entre 2009 y 2016, la maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad imperial estadounidense, al igual que sus aparatos económico-financieros, propagandísticos e ideológico-culturales, emprendieron diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas dirigidas —según indicó Barack Obama durante su primera campaña electoral y reiteró en otros documentos posteriores— a “renovar” y a “prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas” (Obama, 2008).

Con tal fin, durante sus dos administraciones, de manera unilateral o concertada con sus “amigos”, “socios” o “aliados”, estatales y no estatales de dentro y fuera del continente americano, la poderosa maquinaria burocrático-militar estadounidense (generalmente con el apoyo bipartidista del poder legislativo y, en las ocasiones necesarias, del poder judicial) emprendió diversas

acciones orientadas a cumplir, al menos, los siguientes objetivos generales o específicos vinculados entre sí:

1. Desestabilizar y, donde y cuando le resultó posible, derrocar por medios predominantemente “institucionales” a aquellos Gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como “antiestadounidenses”.⁴ En particular, aunque no solo (como se demostró en Paraguay), a los que eran (como fue el caso de Honduras hasta mediados de 2009) o todavía son miembros plenos u observadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.

Contra los gobiernos de este último país, presididos por el comandante Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, se

- 4 Como ha demostrado el historiador estadounidense Max Paul Friedman en su obra *Repensando el antiamericanismo: la historia de un concepto excepcional en las relaciones internacionales estadounidenses* (Antonio Machado Libros, Madrid, 2015), ese mito siempre ha estado presente en la narrativa de diversos gobiernos y de los intelectuales orgánicos a las clases dominantes estadounidenses orientadas a estigmatizar a aquellos gobiernos de otros países que defienden sus propios intereses nacionales o que expresan disensos con algunas de las políticas internas o externas impulsadas por uno u otro gobierno estadounidense. Siguiendo esa tradición, ese antojadizo calificativo fue empleado públicamente por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, por el exasesor del Consejo Nacional de Seguridad de la segunda administración de Barack Obama, Benjamin (Ben) Rhodes, y también, en algunas ocasiones, por ese mandatario estadounidense para caracterizar a algunos de los gobiernos revolucionarios, reformadores e incluso reformistas instalados en América Latina y el Caribe.

desplegaron y se siguen desplegando diversas acciones contrarrevolucionarias bajo el supuesto que su derrocamiento produciría un negativo “efecto dominó” sobre los Gobiernos de los demás Estados integrantes del ALBA-TCP (incluido el de Cuba) y para las interrelaciones que estos habían elaborado y continúan elaborando con otros Gobiernos centroamericanos y caribeños en los marcos de Petrocaribe y del fondo ALBA-Caribe, al igual que de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

2. Restaurar o fortalecer, según el caso, su multifacética dominación neocolonial sobre México, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) con vistas a preservar su control sobre los recursos naturales y los bienes públicos (como el agua y la biodiversidad), lo mismo que sobre los diversos espacios geoestratégicos existentes en el gran Caribe: el golfo de México, los estrechos de la Florida y Yucatán, el paso de los Vientos, el canal de Panamá, el canal de la Mona y las diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que sirven para transitar entre el Sur y el Norte del continente americano, así como entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Para el cumplimiento de esos propósitos, a la administración de Barack Obama le resultó de mucha utilidad la continuidad de sus estrechos vínculos político-militares con los gobiernos europeos integrantes de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) que mantienen diversas posiciones coloniales en el Caribe insular y continental, además del fortalecimiento de la dominación colonial estadounidense sobre Puerto Rico. Esta registró un nuevo salto de

calidad con la aprobación de la Ley PROMESA, signada en 2016 por Barack Obama. Dicha ley estableció una Junta Fiscal orientada a garantizar, ante todo, que en los próximos años los gobiernos de ese mal llamado Estado Libre Asociado (cualquiera que sea su adscripción política) paguen la multimillonaria deuda contraída con diversas instituciones financieras estadounidenses, incluidos algunos “fondos buitres” (Torres, 2016).

3. Lograr una solución político-militar favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los Estados Unidos de la prolongada guerra civil —con contenidos de liberación nacional y social— que hasta mediados de 2016 se estaba desarrollando en Colombia. Sin importar los inmensos costos humanos, sociales y ecológico-ambientales provocados por la voluminosa ayuda económica y militar que le ofrecieron diversas administraciones demócratas y republicanas estadounidenses, los “éxitos” de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, y por las represivas Fuerzas Militares de Colombia en su cruenta guerra “contra la insurgencia y el narcoterrorismo”, fueron presentados por la administración de Barack Obama y por el Pentágono como “el modelo” que debían seguir los Gobiernos y las fuerzas armadas y policiales de otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental enfrentados a semejantes amenazas; en particular, por México, por los Estados del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como por Perú y Paraguay (Tickner, 2014; Kinosian *et al.*, 2015).
4. Subordinar a los intereses geoestratégicos estadounidenses a los Gobiernos de todos los Estados nacionales del

hemisferio occidental ubicados en el “arco del Pacífico”: Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Funcional a ese propósito fueron las exitosas negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP) impulsadas por la administración de Barack Obama como parte de su llamado “pilar asiático” (orientado a contener la creciente proyección externa de la República Popular China), al igual que su constante respaldo a la Alianza para el Pacífico (ALPA), institucionalizada en 2011 entre los Gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, presididos por Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Allan García y Sebastián Piñera, respectivamente.

En los años previos, sus antecesores habían firmado asimétricos tratados bilaterales de libre comercio con los Estados Unidos y ellos, o sus sucesores (como fue el caso del mandatario peruano Ollanta Humala y de la presidenta chilena Michelle Bachelet), firmaron diversos tratados en el campo de la defensa y la seguridad con las dos administraciones de Barack Obama, orientados a “compartir responsabilidades y costos” con la maquinaria militar estadounidense en la “defensa del hemisferio occidental”.

5. Contrarrestar las amenazas que le plantearon a la hegemonía estadounidense en el continente americano, y en particular en Suramérica, la paulatina e inconclusa transformación de la República Federativa de Brasil en una “potencia global”, al igual que aquellas posturas “populistas radicales” o desfavorables a los intereses de los Estados Unidos asumidas por algunos de los partidos (o sectores de ellos) integrantes de las heterogéneas coaliciones políticas que, hasta 2012, apoyaron al Gobierno paraguayo

presidido por Fernando Lugo. Igualmente, a las que, hasta 2015 y 2016, habían sustentado los Gobiernos de Argentina y Brasil, presididos por Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, respectivamente. Asimismo, por algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio-Encuentro Progresista que sustentaron y todavía sustentan a los Gobiernos uruguayos presididos por José Mujica y Tabaré Vázquez.

Lo antes dicho y otros elementos que veremos en el punto siguiente contribuyen a explicar el rápido respaldo que le ofreció la administración de Barack Obama al golpe de Estado institucional que se produjo en Paraguay en 2012 y, más tarde, al Gobierno argentino presidido por el multimillonario neoliberal Mauricio Macri. Asimismo, aun antes de que se consumara por completo, al “golpe de Estado parlamentario-mediático y judicial” que en 2016 se produjo en Brasil contra la presidenta constitucional brasileña Dilma Rousseff. Esta fue sustituida por su corrupto vicepresidente Michel Temer, quien —como hicieron y continúan haciendo los actuales Gobiernos de Argentina y Paraguay— de inmediato comenzó a subordinar sus políticas internas y externas a algunos de los objetivos de la política global y hemisférica estadounidense.

6. Dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) impulsada por los derrocados Gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay antes mencionados, al igual que por sucesivos Gobiernos uruguayos, así como la profundización de los acuerdos en los campos políticos y de la defensa adoptados por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). En especial, aquellos que cuestionaron los intereses geopolíticos, geoeconómicos

(incluidos el control de los recursos naturales estratégicos y los bienes públicos) y geoestratégicos apetecidos por los grupos dominantes en los Estados Unidos, como son las estratégicas cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de la Plata, el portentoso acuífero Guaraní y los archipiélagos ubicados en el Atlántico sur (entre ellos, las islas Malvinas) y los estrechos y las aguas que lo conectan con el Pacífico sur y con la Antártida (Boron, 2012).

7. Entorpecer las acciones de los diversos Gobiernos de América Latina y el Caribe que, entre finales de 2008 y de 2011, condujeron a la fundación de la CELAC y, como no lo lograron, evitar que sus resoluciones y prácticas obstaculizaran el adecuado cumplimiento de los diversos acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) celebradas entre 1994 y 2015, al igual que por los principales órganos político-militares, financieros y político-jurídicos del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diversas Comisiones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Funcional a ese último propósito fueron la acérrima defensa por parte de los representantes de los Estados Unidos de las parcializadas labores desplegadas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y por la CIDH (Aportes, 2014); el apoyo que —modificando sus posturas anteriores y sobre la base de la ley al respecto firmada por Barack Obama a finales de 2013— el departamento de Estado comenzó a ofrecerle a “la reforma” de esa organización propuesta por su exsecretario general, José Miguel Insulza, y reimpulsada por su controvertido y propanamericanista sustituto: el excanciller uruguayo Luis Almagro.

Paralelamente, en correspondencia con “la nueva etapa” de sus relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014, así como con sus perdurables propósitos de producir cambios del (o en el) “régimen cubano”, la administración de Barack Obama al fin aceptó que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro, participara, por primera vez en la historia de esos eventos, en la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá en abril de 2015.

Según el reiterado criterio de ese presidente estadounidense, con tal acción y con el restablecimiento posterior de sus relaciones diplomáticas con Cuba (julio de 2015) se eliminó un factor irritante en el desenvolvimiento de las relaciones de su administración con la mayor parte de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños y se fortaleció “el liderazgo de los Estados Unidos en el hemisferio occidental” (Obama, 2016).

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que la decisión de admitir la participación del presidente cubano en la antes mencionada Cumbre de las Américas tuvo como uno de sus propósitos superar las grandes dificultades que sufrió el desenvolvimiento de ese cónclave durante su VI Cumbre, efectuada en 2012 en Cartagena, Colombia.

Asimismo, relegitimar a la OEA, en su conjunción con el BID, como “la entidad diplomática multilateral primordial” en la supervisión y gestión de los acuerdos de esas cumbres destinados al “fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de conflictos regionales, el fomento del crecimiento económico y la cooperación al desarrollo, la facilitación del comercio, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen transnacional y el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos” (Congress of The United of America, 2013).

Esos propósitos coincidieron con el interés del Pentágono, expresado en *La política de defensa para el hemisferio occidental hasta 2023* difundida en octubre de 2012 por el entonces secretario de Defensa Leon Panetta, en la que, entre otras cosas, se indicó: “Los Estados Unidos, mediante su participación en la OEA y mediante cada uno de nuestros compromisos intermilitares, *promoverán un férreo sistema de cooperación en materia de defensa* que procure hacer frente a los desafíos complejos del siglo XXI. [...] Nos esmeraremos *por reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad de propósitos para abordar esta problemática que afecta a todos los países del hemisferio*” (Panetta, 2012, énfasis propio).

Con esos y otros fines, a partir de 2014, la diplomacia político-militar estadounidense, de consuno con la Secretaría de la JID, comenzó a impulsar (hasta ahora infructuosamente) la elaboración de un nuevo instrumento hemisférico que sustituya al obsoleto e inoperante Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), así como la institucionalización de una Comisión Interamericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las labores de las Conferencias de Ministro de Defensa de las Américas, de Jefes de Ejércitos, Marina y Aviación, al igual que los subsistemas regionales de defensa existentes en el hemisferio occidental (JID, 2014).

Entre ellos, el subsistema de Norteamérica, sustentado en las estrechas relaciones establecidas entre las fuerzas militares de Canadá con el Comando Norte de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) y con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTHCOM), cuya área de responsabilidad abarca el territorio, las costas y el espacio aéreo de Canadá, de los Estados Unidos (incluida Alaska), de México y del archipiélago de las Bahamas, ubicado en la entrada atlántica del estratégico estrecho de la Florida.

En el criterio del entonces jefe de esos dos comandos, almirante William Gortney, sus cada vez más estrechas intervinculaciones con las Fuerzas Armadas bahamesa, canadiense y mexicana están orientadas a enfrentar las “amenazas tradicionales” y “no tradicionales” que le plantea a la seguridad de los Estados Unidos la proyección militar, política y económica de Rusia y de la República Popular China en el norte del hemisferio occidental, incluido el océano Glacial Ártico. Asimismo, las acciones ciberespaciales, las pruebas nucleares y el continuo desarrollo de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Igualmente, las actividades diplomáticas y las capacidades de misiles balísticos de largo alcance y el programa espacial que han venido desarrollando sucesivos gobiernos de la República Islámica de Irán y los eventuales ataques terroristas contra el territorio estadounidense que, en el futuro, pudieran emprender el Estado Islámico y Al-Qa’ida (Gortney, 2016).

Una mirada a algunos enunciados de la PPR

No tengo espacio aquí para plasmar mis consideraciones acerca de los logros para la seguridad imperial de los Estados Unidos obtenidos durante las dos administraciones de Barack Obama (y, en particular, durante su segundo mandato) en el cumplimiento total o parcial de cada uno de los objetivos generales y específicos señalados en el acápite anterior. Tampoco para referirme a los que no pudo cumplir.

No obstante, en mi apreciación, unos y otros serán retomados por la administración de Donald Trump; ya que este se comprometió, entre otras cosas que veremos después, a defender el presunto “excepcionalísimo” de su país y a “hacerlo grandioso otra vez”. Asimismo, a mantener su “posición natural como líder del mundo libre”, a fortalecer la supremacía de sus

Fuerzas Armadas en todo el mundo, a “restablecer la ley y el orden”, al igual que a superar “la crisis que está atravesando la seguridad nacional estadounidense” (PPR, 2016: 3)

De ahí que, a pesar de la acritud de los tres debates que se produjeron entre la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el ahora presidente Donald Trump, los cambios que ambos se proponían introducir en las políticas hacia América Latina y el Caribe, previamente desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama, no estuvieron en el centro de la campaña electoral.

Esto me indujo a pensar que ambos candidatos estaban decididos a mantener esos objetivos, así como a continuar la mayor parte de las estrategias elaboradas e implementadas por la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos durante los ocho años de la administración de Obama.

Entre otras razones, porque casi todas esas estratagemas contaron con el mayoritario respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Como veremos después, una de las pocas excepciones que confirman esa regla fue el rechazo que encontraron en el Senado o en la Cámara de Representantes las diferentes enmiendas a las llamadas “leyes del embargo” contra Cuba que presentaron diversos senadores o representantes de ambos partidos políticos después del 17 de diciembre de 2014.

Entre ellos, un proyecto de ley dirigido a restituirle el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar y a gastar su dinero en la mayor de las Antillas sin que mediara ninguna licencia de la Oficina de la Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Por consiguiente, los dos únicos problemas vinculados directamente a las políticas hacia el hemisferio occidental que se

abordaron en los diferentes discursos del entonces candidato republicano fueron los relacionados con los negativos efectos que, según sus reiteradas opiniones xenófobas, racistas y “proteccionistas”, estaban produciendo en la sociedad, en la cultura y en la economía estadounidense (en especial, en la industria manufacturera y en los niveles de empleo de los trabajadores blancos con bajos índices educacionales) algunas de las políticas migratorias (como su supuesta tolerancia frente a los inmigrantes ilegales) y comerciales (orientadas a la extensión del “libre comercio”) previamente desplegadas por la administración de Barack Obama. Y, dentro de estas últimas, la aprobación del TPP (negociado, entre otros, por los Gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Chile, México y Perú) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, desde 1994, había sido respaldado por todas las administraciones demócratas y republicanas.

Tal vez por ello, en la reaccionaria PPR, se acentuó la importancia de darle continuidad, con escasos cambios, a todas las estrategias en los campos comercial, energético, de la defensa y la seguridad que durante la administración de Barack Obama se habían venido desplegando de consuno con los grupos de poder, los poderes fácticos y los sucesivos gobiernos temporales de Canadá y México, respectivamente encabezados por sus primeros ministros Stephen Harper y Justin Trudeau, así como por los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A pesar de los degradantes ataques verbales contra los mexicanos emprendidos por Donald Trump, de sus reiteradas exigencias de renegociar el TLCAN como condición necesaria para permanecer en él y de su amenaza de que, si ganaba las elecciones, el Gobierno mexicano tendría que financiar el muro que desde hace más de veinte años se viene construyendo en

la extensa frontera terrestre entre ambos países, en la antes mencionada PPR se indicó:

Nuestra atención a los temas del comercio y del medioambiente contribuirá a un fuerte crecimiento económico y a la prosperidad de las Américas. Agradecemos a nuestros vecinos en México y Canadá que hayan sido nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y en la guerra contra las drogas. El pueblo mexicano merece nuestra asistencia por su brava resistencia a los carteles de las drogas que trafican con la muerte a ambos lados de nuestras fronteras. Su rica herencia cultural y religiosa, presente en millones de nuestros ciudadanos, deberá contribuir a un mayor entendimiento y cooperación entre nuestros países. Nuestros vecinos canadienses pueden contar con nuestra cooperación y respeto. Para avanzar en la independencia energética de América del Norte, intentaremos revertir el bloqueo de la actual administración [estadounidense] al oleoducto Keystone XL. Además de su valor económico, ese proyecto ha devenido un símbolo de la contradicción entre el deseo público al desarrollo económico y la hostilidad gubernamental al crecimiento. Nosotros estamos con el pueblo (PPR, 2016: 50).

Por otra parte, con el lenguaje antediluviano empleado en muchas de sus páginas, en esa plataforma se indicó: “Un presidente republicano nunca abrazará a un dictador marxista, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. El actual presidente del poder ejecutivo ha permitido que ese país se haya convertido en un Estado narco-terrorista y que una avanzada iraní amanece a América Central, así como que Venezuela sea un cielo seguro para los agentes de Hezbollah”. Y añadió: “Hoy con su país arruinado por el socialismo y en la senda del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia

y recuperar sus derechos. Cuando triunfen, como seguramente ocurrirá, los Estados Unidos estarán listos para ayudarlos a retornar a la familia de las Américas” (PPR, 2016: 50).

Sin dudas, tales sintagmas expresaron el tajante rechazo de los redactores de esa plataforma (algunos de los cuales ocuparán prominentes posiciones en la administración de Donald Trump) a las conversaciones de alto nivel entre los actuales gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela que comenzaron a desarrollarse durante y después de la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá, en abril de 2015.

Sin embargo, como se indicó en el primer acápite de este escrito, el contenido de esos enunciados de la PPR se corresponde con las multifacéticas acciones contra la Revolución Bolivariana desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. Y, en particular, con los agresivos planes (las llamadas Venezuela Freedom 1 y 2 Operations) que, desde los primeros meses de 2015, ha venido organizando el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) después que Obama diera a conocer su Orden Ejecutiva de marzo de 2015, en la que calificó al actual Gobierno venezolano como “una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional estadounidense” (Weisbrot, 2015).

En esa misma tónica y en correspondencia con las estrategias hacia Colombia desplegadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y la seguridad de los Estados Unidos, así como rechazando de manera implícita el respaldo que la administración de Barack Obama le había ofrecido a los Acuerdos de Paz que en julio de 2016 todavía se estaban negociando en La Habana entre los representantes de la Comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Gobierno de ese país, la PPR señaló:

Reafirmamos nuestra amistad y admiración por el pueblo colombiano y llamamos a los congresistas republicanos a expresar su solidaridad con sus largas décadas de lucha contra las terroristas FARC. Los sacrificios y sufrimientos del pueblo colombiano no deben ser traicionados por el ascenso al poder de los asesinos y señores de las drogas (PPR, 2016: 50).

Llama la atención que ese último enunciado formó parte de los pretextos empleados por el reaccionario expresidente y ahora senador colombiano y líder del mal llamado Centro Democrático, Álvaro Uribe (estrechamente vinculado a algunos de los congresistas cubano-estadounidenses que apoyaron la candidatura de Donald Trump, como es el caso del representante Mario Díaz Balart), con el fin de movilizar votos contra los Acuerdos de Paz —para tratar de “blindarlos”— firmados en La Habana, en el desfavorable plebiscito que se efectuó en Colombia el 2 de octubre de 2016.

Más tarde, durante la ratificación de esos acuerdos aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes colombiana en diciembre de ese año, los parlamentarios del Centro Democrático también se opusieron a la segunda versión de esos acuerdos firmada en Bogotá a finales de noviembre entre el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Como han reconocido ambas partes, la firma de tales acuerdos fue posible gracias, entre otras cosas, a las múltiples facilidades ofrecidas, desde finales de 2012, por el Gobierno cubano presidido por Raúl Castro.

Pero antes de que se protocolizaran esos acuerdos entre las FARC y el Gobierno colombiano, Donald Trump, como es su

costumbre, comenzó a modificar las declaraciones anuentes y moderadamente críticas que antes había realizado acerca de las políticas hacia Cuba desarrolladas por la administración de Barack Obama después del 17 diciembre de 2014.

En efecto, buscando captar el apoyo de los electores opuestos a las órdenes ejecutivas y a la Directiva Presidencial de Barack Obama del 14 de octubre de 2016, el entonces candidato presidencial republicano comenzó a resaltar sus desacuerdos con esas políticas y, en la misma medida que los fue acentuando, fue asumiendo el lenguaje ultraconservador en el que está redactada la PPR. Al respecto, en esta se indicó:

Queremos darle la bienvenida al pueblo de Cuba en nuestra familia hemisférica, después que sus corruptos gobernantes sean sacados del poder y rindan cuentas por sus crímenes contra la Humanidad. Estamos con las Damas de Blanco y con todas las víctimas del asqueroso régimen que está aferrado al poder en La Habana. Nosotros decimos claramente: ellas han sido traicionadas por aquellos que actualmente controlan la política exterior estadounidense. La “apertura hacia Cuba” de la actual administración fue un vergonzoso acomodo a las demandas de los tiranos. Solo fortalecerán a esa dictadura militar. Llamamos al Congreso a defender las leyes estadounidenses que plantean las condiciones para eliminar las sanciones contra la isla: la legalización de los partidos políticos, prensa independiente y elecciones libres con supervisión internacional. Reclamamos una plataforma [aérea] para las transmisiones de Radio y TV Martí y la promoción de acceso a Internet como herramienta tecnológica para fortalecer el movimiento prodemocracia en Cuba. Nosotros apoyamos el trabajo de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre [institucionalizada por la administración de George

W. Bush y disuelta por la de Barack Obama] y afirmamos los principios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, reconociendo el derecho de los cubanos a escaparse del comunismo (PPR, 2016: 50).

Es imprescindible resaltar que ese ofensivo y rancio lenguaje fue el empleado por Donald Trump en el tuit que difundió inmediatamente después de que, en la noche del 25 de noviembre de 2016, conoció la noticia de la desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

El irrespetuoso contenido de ese mensaje llevó al historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo, a preguntarse si, al menos en lo correspondiente a Cuba, el próximo mandatario republicano había decidido sustituir las herramientas del “poder inteligente” (*smart power*) empleadas por Barack Obama, por las del “poder estúpido” (*stupid power*) previamente empleadas por otros mandatarios demócratas y republicanos estadounidenses. Acto seguido, agregó:

Si Obama se propuso con inteligencia captar simpatías en el pueblo cubano, ya Trump se ganó para siempre la animadversión de la gran mayoría del pueblo cubano con sus declaraciones sobre Fidel. Trump debió estar mejor asesorado y haber sabido que este pueblo es profundamente fidelista y que meterse con Fidel es como meterse con quien es considerado el padre de millones de cubanos, una de las raíces más sensibles de nuestra espiritualidad, del orgullo y la dignidad que significa ser cubano. El pueblo de Cuba no olvida jamás esas ofensas, sobre todo si vienen en horas de dolor y tristeza. Ojalá el recién electo presidente de los Estados Unidos rectificara su conducta, pero de cualquier manera ya ha sembrado un precedente nefasto (Ramírez, 2016).

El escenario más probable de las políticas hacia América Latina de la administración de Donald Trump

Cualesquiera que sean las consideraciones que merezcan esas y otras opiniones expresadas por el autor de esa cita, todo lo dicho en el acápite anterior dejan planteadas varias interrogantes que trascienden con mucho, aunque incluyen, las políticas hacia Cuba que emprenderá el actual gobierno temporal estadounidense.

En lo que tiene que ver con los contenidos de este escrito, ¿abandonará esa administración todas o solo algunas de las ingeniosas combinaciones entre las herramientas de los llamados *hard* y *soft powers* (*smart power*) empleadas por la administración de Barack Obama con vistas a cumplir todos los objetivos estratégicos, generales o específicos, planteados o no en el primer acápite de este ensayo? ¿Esas herramientas serán sustituidas por las que Elier Ramírez denomina *stupid power*?

En mi opinión esas preguntas no tienen una respuesta general. Por consiguiente, considero que para realizar anticipaciones acerca de las estrategias y las herramientas que empleará en sus interrelaciones con América Latina y el Caribe la administración de Donald Trump resulta imprescindible realizar un análisis *caso a caso* que, además de los antecedentes ideológicos, políticos o militares de los altos funcionarios que ya ha nombrado o que nombrará en las próximas semanas, tome en cuenta las percepciones que tienen los diferentes grupos de poder y los poderes fácticos de ese país (incluida su poderosa maquinaria burocrático-militar) sobre los resultados favorables o desfavorables para su poder y sus intereses, así como para la seguridad imperial de los Estados Unidos

que tuvieron las estrategias hacia el hemisferio occidental emprendidas por la administración precedente.

Como ya indiqué, en este escrito no tengo espacio para presentar mis consideraciones sobre sus desiguales resultados. Sin embargo, para cumplir los propósitos que planteé en su introducción, creo imprescindible señalar que, en mi apreciación, el actual gobierno temporal mantendrá la mayor parte de las estrategias desplegadas y las herramientas utilizadas por la maquinaria de la política exterior, económica, ideológica, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos durante el gobierno temporal de Barack Obama, con vistas a garantizar la subordinación de los actuales Gobiernos de Canadá y de México a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los Estados Unidos.

Entre ellas, las definidas en la otrora llamada Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPN) impulsada por la administración de George W. Bush, de consuno con el gobierno neoconservador del primer ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) y del derechista presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012).

Aunque en los años posteriores se presentaron ciertas contradicciones entre Harper, Obama y el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la más reciente Cumbre de América del Norte efectuada en Ottawa en junio de 2016, esos dos últimos mandatarios, junto al entonces recién electo primer ministro liberal canadiense, Justin Trudeau, adoptaron diferentes acuerdos para continuar profundizando “la integración de América del Norte” (Vascós, 2016). Como ya se indicó, la continuación de esa integración con normas ambientales menos exigentes que las vigentes en la actualidad estuvo incluida en la PPR.

Por consiguiente, con independencia de si al fin se acelera la costosa y ecológicamente dañina ampliación del muro que existe en la frontera terrestre entre los Estados Unidos y México, así como del desenlace de la complicada renegociación del TLCAN que con seguridad se desarrollará con los actuales gobiernos de Canadá y de México, exigida por Donald Trump al inaugurar su presidencia, no se abandonará el propósito de profundizar la integración de América del Norte.

Mucho menos, porque esta ha sido durante largo tiempo perseguida por los representantes políticos, militares e ideológico culturales de diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses; incluidos los dueños y gerentes de las principales corporaciones transnacionales (entre ellas, las dedicadas a la producción de automóviles que se “exportan” al mercado estadounidense) que ya tienen incluidos sus enclaves en México entre los eslabones de sus correspondientes “cadenas globales de valor” y como una de las principales fuentes de sus extraordinarias ganancias monopólicas.

De modo que puede afirmarse que las medidas proteccionistas del mercado estadounidense reiteradas por Donald Trump en su discurso inaugural del 20 de enero de 2017 casi seguro serán mediatizadas por los poderosos dueños y ejecutivos, así como por los representantes políticos (ya sean demócratas o republicanos) de esas corporaciones transnacionales que actúan en diferentes instancias del aparato estatal y de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Algo parecido puede decirse de las estrategias desplegadas por Barack Obama para fortalecer su multifacética dominación sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental. Entre ellas, todas las acciones desplegadas durante su administración por el Departamento de Estado, por el

NORTHCOM y por el Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en inglés) dirigidas a “bajar” la frontera de seguridad imperial de los Estados Unidos hasta el norte de Guatemala y de Belice.

Igualmente, las acciones emprendidas por esas y otras estructuras del poder ejecutivo y del SOUTHCOM para contener y tratar de derrotar las “amenazas no tradicionales a su seguridad nacional” en los correspondientes territorios y en las aguas jurisdiccionales de los Estados del triángulo norte de Centroamérica, así como de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y de los 14 Estados integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Lo antes dicho —junto a los persistentes afanes del SOUTHCOM, de la IV Flota de la Marina de Guerra y de los guardacostas estadounidenses de controlar los espacios marítimos y las rutas aéreas del mar Caribe y del golfo de México— seguirá teniendo múltiples implicaciones negativas para los actuales Gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, encabezados por Guillermo Solís, Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega, respectivamente.

En mi concepto, en esos tres países, además de continuar las estrategias indicadas en el párrafo anterior, la administración de Donald Trump y las fuerzas más conservadoras de los partidos demócrata y republicano —el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por su acrónimo en inglés) y el Instituto Internacional Republicano (IRI)— ampliarán el apoyo que directamente, o a través de la bipartidista Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), ya le han venido ofreciendo a las fuerzas sociales y políticas de la derecha costarricense, salvadoreña y nicaragüense.

Por tanto, es de esperar que la administración de Donald Trump fortalezca los condicionamientos que ya se le han

venido imponiendo al Gobierno salvadoreño para recibir los fondos que le corresponden de los 750 millones de dólares aprobados en el presupuesto de 2016-2017 por el Congreso de los Estados Unidos, para apoyar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (asesorado y monitoreado por el BID), así como de los más de 300 millones de dólares dirigidos a fortalecer en el propio año fiscal la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), impulsada desde 2010 por el gobierno temporal de Barack Obama.

Sin hacer ninguna referencia al Gobierno salvadoreño, la continuidad del apoyo de la actual administración estadounidense al Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte y a la CARSI fue aceptada por el exgerente general de la poderosa empresa petrolera Exxon-Mobile y ahora secretario de Estado, Rex Tillerson, en las respuestas escritas que ofreció, previo a su ratificación por el Senado, a las preguntas que le realizaron acerca de diversos temas vinculados a las relaciones de los Estados Unidos con diferentes Gobiernos del hemisferio occidental (Tillerson, 2017).

Por consiguiente, también es de esperar que la recién inaugurada administración de Donald Trump le entregue al actual Gobierno de Costa Rica los 30 millones de dólares en ayuda militar que en agosto de 2016 Obama le ofreció a su homólogo costarricense a cambio de su “cooperación” para contener las migraciones incontroladas, el tráfico de drogas y otros delitos conexos que se siguen produciendo en Centroamérica, así como para continuar edificando las instalaciones del cada vez más militarizado Servicio Nacional de Guardacostas costarricense que el SOUTHCOM está equipando con vistas a habilitar nuevas facilidades para el desplazamiento de sus fuerzas navales en las costas de ese país del océano Pacífico y del mar Caribe.

De manera convergente, el nuevo mandatario estadounidense refrendará, tan pronto la apruebe el Congreso (controlado por el Partido Republicano), la llamada *Nicaragua Act* que se presentó en ambas cámaras en los meses previos y posteriores a la reelección de Daniel Ortega.

Para los senadores y representantes promotores de las sanciones incluidas en esa ley, los comicios presidenciales que se realizaron en noviembre de 2016 en Nicaragua (en los que resultó reelecto por más de 70 % de los votantes su presidente Daniel Ortega) fueron fraudulentos. Entre otras razones, porque no fueron supervisados por la OEA. Para tratar de evitar esas sanciones, el Gobierno nicaragüense aceptó que ese organismo supervise las próximas elecciones municipales que se efectuarán en el presente año.

Por otra parte, a pesar del rechazo de la actual administración republicana al TPP, se mantendrá su apoyo a todos los acuerdos en el campo político, económico, comercial, militar y vinculados a la “seguridad hemisférica” previamente firmados por el gobierno de Barack Obama con sus contrapartes de Colombia, Perú y Chile; incluido su multimillonario apoyo al denominado Colombia Peace Plan impulsado por esa administración demócrata (con el respaldo del Congreso y del Pentágono) para “ayudar” al Gobierno colombiano actual y al que resulte electo en 2018 a “ganar la paz”, tanto como los ayudaron a “ganar la guerra” diferentes administraciones demócratas y republicanas estadounidenses (Isacson, 2016).

Mucho más porque la identificación de Colombia como “uno de los más cercanos aliados en el hemisferio” y como “un importante socio comercial” fue confirmada por el actual secretario de Estado antes de su ratificación por el Senado estadounidense. A ello agregó que revisará “los detalles del reciente acuerdo de Paz” firmado por las FARC y el Gobierno

colombiano para determinar “hasta qué punto los Estados Unidos deben continuar apoyándolo” (Tillerson, 2017).

En cualquier caso, la administración de Donald Trump continuará las diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas que había venido desplegando el gobierno temporal de Barack Obama con vistas a debilitar a la Revolución Ciudadana y a favorecer la victoria de las fuerzas de la derecha y de la centro-derecha ecuatoriana en los comicios presidenciales y parlamentarios que se efectuarán en febrero de 2017.

Por tanto, cualesquiera que sean los resultados de esos comicios, se fortalecerán las relaciones de los partidos Demócrata y Republicano y de otras instituciones integrantes o vinculadas con la NED (como el Centro Internacional para la Empresa Privada y el Centro Estadounidense para la Solidaridad Sindical Internacional, CIPE y ACILS, por sus correspondientes siglas en inglés) con todos los sectores de la derecha ecuatoriana, al igual que con la políticamente fortalecida derecha chilena.

Contando con ese apoyo y con los resultados favorables a sus candidatos en las elecciones municipales efectuadas en 2016, los partidos que la integran redoblarán sus esfuerzos para derrotar al candidato presidencial que presentará la heterogénea coalición ahora denominada Concertación por la Democracia-Nueva Mayoría (en la que participa el Partido Comunista Chileno), en los comicios presidenciales de finales del presente año. Ese empeño se verá favorecido por las grandes debilidades que ya exhibe el gobierno de esa coalición política, presidido por Michelle Bachelet.

Asimismo, el gobierno temporal de Donald Trump fortalecerá el ostensible respaldo político que le ha venido dando su antecesor demócrata a los gobiernos derechistas y

“neoliberales” actualmente instalados en Argentina, Brasil y Paraguay. Y, al igual que ya venía haciendo la administración de Barack Obama, continuará sus acciones dirigidas a debilitar y, si le fuera posible, derrocar al gobierno boliviano presidido por Evo Morales, artífice de la Revolución Democrática y Cultural que se ha venido desarrollando en ese país desde 2006.

También a debilitar aún más a los sectores “populistas radicales” y “antiestadounidenses” que todavía conservan ciertas influencias en la elaboración de las ambivalentes políticas internas y externas que ha venido desarrollando el gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez.

Tales acciones se complementarán con un mayor respaldo por parte de los partidos Demócrata y Republicano a los partidos Blanco y Colorado, con vistas a lograr la derrota del candidato que presente el Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones presidenciales de 2018. Asimismo, al que seleccione la derecha brasileña para competir con el candidato que finalmente presente la debilitada izquierda de ese país (y, en particular, el Partido de los Trabajadores liderado por Luiz Inácio Lula da Silva) en los comicios de igual carácter que se efectuarán en el mismo 2018.

Como ya venía ocurriendo durante el último año de la administración de Barack Obama, en lo inmediato, todas esas acciones tendrán por objetivos la profundización de la crisis que está sufriendo el MERCOSUR y, por carácter transitivo, el debilitamiento de la UNASUR y de la CELAC. Igualmente, la influencia que han tenido y tienen en el funcionamiento de esa última organización de concertación política los Gobiernos de los Estados suramericanos y caribeños integrantes del ALBA-TCP.

Por consiguiente, la administración de Donald Trump redoblará las acciones que ya venían desplegando diversas

instancias de la antes mencionada administración demócrata (con el apoyo del Congreso) para lograr “el cerco y la asfixia”, así como “la implosión” de Venezuela, previstas en las diferentes fases de las Venezuela Freedom 1 y 2 Operations que, como se indicó, desde hace dos años ha venido organizando el SOUTHCOM al amparo de la Orden Ejecutiva de Barack Obama de 2015, ratificada en marzo de 2016 y en enero de 2017, con el pretexto de darle tiempo a la administración de Trump a que elabore sus propias directivas al respecto.

La continuidad de esas acciones contrarrevolucionarias fue ratificada por el actual secretario de Estado en sus diversas respuestas a las preguntas que le formularon antes de su ratificación por el Senado. En esa ocasión, Tillerson confirmó que él buscará “una estrecha colaboración” con “los amigos de los Estados Unidos en el hemisferio”, en particular con los Gobiernos de Brasil y Colombia, al igual que con la OEA, para lograr “una transición negociada a la democracia en Venezuela”. Y agregó que, en su consideración, “la administración de Donald Trump deberá continuar denunciando las prácticas antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro”. Asimismo, que apoyará los esfuerzos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática Interamericana “para promover la normalización de la situación en Venezuela y restaurar sus instituciones democráticas” (Tillerson, 2017).

En mi consideración, con tales fines, la actual administración discontinuará los canales de diálogo entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del actual Gobierno venezolano que, como ya se indicó, se habían habilitado desde la única reunión que sostuvieron los presidentes Barack Obama y Nicolás Maduro durante la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril de 2015.

De manera convergente, la actual administración republicana estimulará a las fuerzas más reaccionarias de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) a abandonar definitivamente las complicadas negociaciones que, bajo los auspicios de la UNASUR y del Vaticano, se venían desplegando desde 2016 con el que la PPR denominó “dictador marxista”, que ha permitido que Venezuela “se haya convertido en un Estado narco-terrorista”, en “una avanzada iraní en América Central” y en “un cielo seguro para los agentes de Hezbollah” (PPR, 2016: 50).

Hay que resaltar que esos últimos elementos habrían sido incluidos entre los “complejos desafíos no tradicionales a la seguridad nacional estadounidense” listados por el actual jefe del SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, en la intervención que realizó el 10 de marzo de 2016 ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense.

Entre esos desafíos incluyó la existencia “de redes criminales transnacionales bien organizadas, bien financiadas, bien armadas y tecnológicamente avanzadas”; las migraciones de “extranjeros de interés especial” entre los que pudieran incluirse “luchadores terroristas extranjeros” vinculados al Estado Islámico e interesados en emprender actos terroristas en los Estados Unidos o en sus “naciones aliadas”. Igualmente, “las intenciones del actual Gobierno iraní de incrementar sus vínculos económicos, científicos y culturales con América Latina; la existencia de una extensa red de militantes y simpatizantes de la organización libanesa Hezbollah, algunos de los cuales están involucrados en el lavado de dinero y en otras actividades ilícitas”, así como en el mantenimiento de “una infraestructura capacitada para emprender o apoyar actos terroristas” (Tidd, 2016).

En esa ocasión, Tidd también expresó su preocupación por los vínculos económicos, políticos y militares de Rusia con

varios gobiernos latinoamericanos, así como por las diversas acciones en el terreno económico, político y cultural que —“violando las reglas establecidas”— ha venido desarrollando el Gobierno de la República Popular China (RPCh) en diversos países latinoamericanos y caribeños.

De modo que esos enunciados seguramente encontrarán continuidad en las que algunos analistas estadounidenses han calificado como equívocas y “escasamente realistas” políticas hacia esa potencia asiática ya emprendidas por Donald Trump. Entre ellas, sus amenazas de imponer altos aranceles a las importaciones de diversos productos chinos (incluidos los fabricados por empresas estadounidenses) que se comercializan en el mercado interno de ese país y su decisión de abandonar la política seguida desde hace varias décadas por diferentes administraciones de los Estados Unidos en sus interrelaciones oficiales con sucesivos gobiernos de Taiwán (Walt, 2017).

Cualquiera que sea el futuro de las relaciones con el Gobierno de la RPCh que desplegará el gobierno temporal de Donald Trump y acorde con los conceptos expresados por el actual jefe del SOUTHCOM, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos continuará respaldando financiera y militarmente todas las acciones previstas en la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés), antes impulsada por la administración de Barack Obama.

A la par, los partidos Demócrata y Republicano, así como las otras instituciones integrantes de la NED redoblarán sus acciones dirigidas a apoyar a las fuerzas de la derecha que actúan en todos los Estados del Caribe insular y continental, integrantes del ALBA-TCP, al igual que en los Estados de la Caricom y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) signatarios de los acuerdos de Petrocaribe. Entre ellos, a Haití.

Para solucionar los graves problemas económicos, sociales, políticos y de seguridad que afectan a ese empobrecido país, el secretario de Estado, Rex Tillerson, adelantó que durante su gestión tratará de movilizar apoyo internacional para “compartir la carga” de “la asistencia” que, de manera políticamente condicionada, le venía ofreciendo la administración de Barack Obama a los Gobiernos de esa nación después del terremoto de 2010 y de otros “desastres naturales” posteriores (Tillerson, 2017).

Con esas y otras acciones —como el condicionamiento de los fondos que aprobó el Congreso estadounidense para el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética de Centroamérica y el Caribe impulsada desde finales de 2014 por la administración de Barack Obama y, en particular, por su vicepresidente Joe Biden— se buscará debilitar la oposición que hasta ahora han expresado los Gobiernos de los Estados integrantes de la Caricom y del SICA a las propuestas de aplicarle a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA impulsadas, como ya se indicó, por su actual secretario general, Luis Almagro.

Este quedó comprometido con el Departamento de Estado a impulsar “la reforma” de la OEA coincidente con los objetivos de la ya mencionada ley al respecto firmada a finales de 2013 por el presidente Barack Obama y con los propósitos político-militares de esa organización impulsados por el Pentágono.

Asimismo, con algunas tareas de la ya mencionada Venezuela Freedom 2 Operation que ha venido desplegando el SOUTHCOM. En estas continuarán desempeñando un importante papel las bases y otras facilidades militares que tienen instaladas las Fuerzas Armadas estadounidenses en Colombia y en Honduras, al igual que en Aruba y Curazao. Estas últimas

mediante los acuerdos signados entre sucesivos Gobiernos de los Estados Unidos y de Holanda.

Sin dudas, en caso de que resulten exitosas las principales acciones hacia el sur del continente americano que —según mis anticipaciones— desplegará la actual administración republicana, en el futuro previsible se le creará un contexto hemisférico complicado al actual Gobierno cubano, presidido por Raúl Castro, así como al nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de ese país que sea nombrado por los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular previamente elegidos en los comicios que se realizarán en enero de 2018. Por consiguiente, el escenario más probable de las políticas hacia Cuba que desarrollará el presidente republicano Donald Trump será el abandono de los llamados que reiteradamente Obama le ha realizado al Congreso estadounidense a que levante “el embargo” contra Cuba.

Además, se ralentizarán (sin abandonarlos por completo) buena parte de los demás componentes de la “nueva política” hacia ese archipiélago definida por Barack Obama en su ya mencionada Directiva del 14 de octubre de 2016; particularmente aquellos vinculados a los multidimensionales intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos: el enfrentamiento conjunto a algunas pandemias que afectan o pudieran afectar a la población estadounidense; la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos conexos; así como contra las migraciones incontroladas y el tráfico de personas.

De ahí el sibilino apoyo que le ofreció Donald Trump a los acuerdos migratorios que, unos días antes del inicio de su mandato, se firmaron entre los Gobiernos de ambos países con vistas a lograr “la migración segura y ordenada” hacia ese país de miles de cubanos que, aprovechando las excepcionalidades que les concedían las autoridades estadounidenses

respecto a otros migrantes, estaban tratado de llegar a los Estados Unidos a través de su frontera terrestre con México.

Lo antes dicho no evitará que la actual administración republicana fortalezca las acciones dirigidas a “cambiar el régimen cubano” con la consiguiente complicación en la ejecución de algunos de los 20 acuerdos que finalmente se lograron concluir entre los funcionarios de alto nivel de la administración demócrata y del Gobierno cubano antes del 19 de enero de 2017. Asimismo, el condicionamiento a cambios en la proyección externa del actual o del futuro Gobierno cubano de cualquier negociación que se desarrolle con el de los Estados Unidos, al menos durante los dos años que abarcan estas anticipaciones.

Por ende, en estas no imperarán el espíritu de reciprocidad y de respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano reiteradamente aceptadas, desde diciembre de 2014, por Barack Obama y por los secretarios y funcionarios de diferentes departamentos y del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense (en especial, Benjamín Rhodes) que han participado en las intensas y, por lo general, fructíferas negociaciones que desde esa fecha se han desarrollado con sus correspondientes contrapartes del Gobierno cubano.

Además de los enunciados de la PPR y de los exabruptos ya mencionados de Trump en ocasión de la desaparición física de Fidel Castro, así parecen confirmarlo los planteamientos respecto a las futuras relaciones con Cuba previamente realizados por el “guerrero cultural” de la derecha alternativa y actual vicepresidente Mike Pence (el 14 de octubre de 2016 había indicado que si Trump y él ganaban las elecciones iban a derogar las órdenes ejecutivas de Obama con relación a Cuba) y la posterior incorporación a su “equipo de transición”, y casi seguro a diversos puestos claves de su administración, de

varios cubano-estadounidenses extremadamente críticos a “la nueva política” hacia Cuba desplegada por la administración de Barack Obama. A ello hay que agregar las declaraciones realizadas por el actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump en la audiencia orientada a obtener el apoyo a su ratificación por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Ante los tendenciosos comentarios y las incisivas preguntas vinculadas a sus posiciones acerca del futuro de las relaciones oficiales con Cuba que le formularon, entre otros, el senador demócrata Bob Menéndez y el senador republicano Marcos Rubio (ambos radicalmente opuestos a las políticas hacia ese país desarrolladas por el ahora expresidente Barack Obama), Tillerson afirmó, entre otras cosas que veremos en el próximo párrafo, que, en caso de ser aprobado por el Senado como secretario de Estado, él “le recomendaría” al presidente Trump que vetara cualquier decisión del Congreso estadounidense orientada a eliminar “el embargo” contra Cuba.

Reiterando con sus propias palabras lo antes planteando por el actual mandatario estadounidense y por su vicepresidente, así como por otros adversarios de la política de Obama hacia la mayor de las Antillas, Tillerson también indicó que, en su opinión, “Nuestros recientes compromisos con el Gobierno de Cuba no han sido acompañados por ninguna concesión significativa de su parte en el campo de los derechos humanos. No hemos logrado que [ese gobierno] sea considerado responsable por sus conductas. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo recibió poco. Eso no sirve ni a los intereses de los cubanos ni de los estadounidenses” (Tillerson en Yepe, 2017).

Acto seguido señaló, de manera reiterada, que creía que el presidente Donald Trump había sido “bastante claro” en

indicar que le iba a pedir a todas las agencias del Gobierno estadounidense que realizaran una revisión completa de todas las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama; incluidas las vinculadas a las autorizaciones de las 12 categorías de viajes que los ciudadanos estadounidenses ya pueden realizar a Cuba sin autorización de la OFAC y las “diversas actividades de negocios” que se pueden realizar en ese país.

A decir de Tillerson, esa revisión también incluirá “las razones que llevaron al Departamento de Estado y a diversas agencias del Gobierno estadounidense a excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo” (Tillerson en Yepe, 2017). Merece recordar que esa exclusión fue una de las condiciones imprescindibles para restablecer las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos que le planteó Raúl Castro a Obama en la primera reunión bilateral que sostuvieron en Panamá, en abril de 2015.

Adicionalmente, creo conveniente resaltar que —según la información que he podido revisar— los asuntos vinculados al porvenir de las relaciones oficiales con Cuba fueron uno de los temas más escabrosos que tuvo que abordar Rex Tillerson durante sus respuestas a las preguntas que le realizaron diversos senadores demócratas y republicanos acerca de las políticas hacia América Latina y el Caribe que él impulsará desde el Departamento de Estado.

Esto ratifica el criterio ya expresado en este ensayo acerca de la existencia de un consenso bipartidista favorable a la mayoría de los objetivos generales y específicos, así como a buena parte de las principales estrategias empleadas por la administración de Barack Obama para tratar de “renovar y prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas”.

Seguramente, como ha ocurrido en otras ocasiones históricas, las discrepancias en el futuro previsible tanto en el seno de los diversos órganos del poder ejecutivo como del poder legislativo y de los cada vez más monopolizados medios privados de desinformación masiva estadounidenses estarán vinculadas a las diferentes percepciones existentes acerca de la eficacia de los conceptos e instrumentos empleados por la administración antes mencionada para garantizar la seguridad imperial de los Estados Unidos y, muy vinculados a ella, los importantes intereses geopolíticos y geoeconómicos de sus clases y sus grupos dominante en el que la exasesora para la Seguridad Nacional del expresidente Barack Obama, Susan Rice, denominó “crucial hemisferio [occidental]” (Rice en Yepe, 2017).

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe (incluida Cuba) que desarrollará el recién inaugurado gobierno temporal estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de continuidad con relación a las desplegadas por su antecesor demócrata. Pero la nueva administración republicana dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado *hard power* (incluidas las negociaciones desde posiciones de fuerza, incluso con algunos de sus “socios” y “aliados”, como es el caso del actual Gobierno de México) que las que tuvieron en el gobierno temporal precedente.

Así parecen indicarlo los diversos multimillonarios (buena parte de ellos, con cuestionables comportamientos éticos y sin experiencias político-administrativas previas) y exmilitares de alto rango que el actual mandatario ha seleccionado para

conformar gran parte de su gabinete. No puedo caracterizarlos a todos. Mucho menos, porque en el momento de terminar esta escrito (28 de enero) algunos de ellos todavía no han sido ratificados por el Senado estadounidense.

Sin embargo, me parece importante resaltar algunas características y comportamientos de los ya seleccionados para conducir la política exterior, de defensa y seguridad, al menos durante los dos años que abarcan mis anticipaciones.

Como ya se indicó, la Secretaría del Departamento Estado le fue encargada a un exalto ejecutivo de la Exxon-Mobile, poderosa empresa petrolera que tuvo varios conflictos con los sucesivos Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos, los causados por sus exploraciones en la zona marítima que aún está en litigio entre ese país y la República Cooperativa de Guyana.

A su vez, como Consejero de Seguridad Nacional, Trump designó al “islamofóbico”, prisionista y guerrerista teniente general retirado Michael Flynn. Asimismo, la Secretaría del Departamento de Defensa será ocupada por el general retirado James Mattis; quien —luego de su participación destacada en las sangrientas guerras del Golfo (1991), de Afganistán (2001) y de Irak (a partir de 2003)— fue separado de las Fuerzas Armadas estadounidenses por oponerse a los cambios que había introducido la administración de Barack Obama en su proyección político-militar hacia el Medio Oriente y el golfo Árabe-Pérsico.

Por otra parte, la Secretaría del Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en inglés) fue asumida por el exjefe del SOUTHCOM (2011-2015), el almirante retirado John Kelly, quien, entre otras acciones desplegadas contra los pueblos y las naciones de Nuestra América, fue uno de los coordinadores de toda la ayuda militar ofrecida por los Estados

Unidos a las represivas Fuerzas Militares colombianas durante los últimos años de la primera y en los iniciales de la segunda administración de Barack Obama. Asimismo, uno de los instigadores de la ya referida directiva de ese mandatario en la que calificó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Igualmente, el organizador de la mencionada Venezuela Freedom 1 Operation iniciada en 2015.

Además, la jefatura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) le fue encomendada al exmilitar y exintegrante del Comité de Inteligencia del Congreso Mike Pompeo, miembro destacado del ultraconservador Tea Party y, por tanto, hostil al incumplido propósito de Barack Obama de cerrar la prisión enclavada en la mal llamada Base Naval de Guantánamo y partidario de derogar los acuerdos establecidos entre los Gobiernos de Estados Unidos e Irán en 2015. Como se recordará, estos contaron con el apoyo de los Gobiernos de los demás Estados integrantes permanentes del antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, Gran Bretaña, la República Popular China y Rusia), al igual que del actual Gobierno de Alemania.

No obstante, como indiqué en la introducción de este ensayo, los escenarios reseñados en el tercer acápite de este escrito, al igual que al comienzo de estas conclusiones, no son los únicos posibles. Por consiguiente, podrían configurarse otros escenarios alternos a partir de las acciones reactivas, preactivas y proactivas que emprenderán los diversos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, canadienses, estadounidenses, latinoamericanos y caribeños que han recibido con una enorme preocupación la elección de Donald Trump, y han rechazado sus posiciones racistas, xenofóbicas, misóginas y homofóbicas. Igualmente, sus posturas reacias a cumplir los

acuerdos adoptados en la Cumbre de París para contener el cambio climático, al igual que las primeras acciones vinculadas a la política externa que ese mandatario ha anunciado o emprendido antes o enseguida de haber tomado posesión el pasado 20 de enero.

Sin embargo, en mi consideración, todos esos actores sociales, políticos e intelectuales, estatales o no estatales, deben prepararse para enfrentar “los peores escenarios” mencionados o no en este escrito y, por tanto, para contrarrestar —mediante acciones proactivas y, en lo posible, concertadas— las redobladas amenazas que ese gobierno temporal estadounidense les planteará a los pueblos, las naciones y a algunos de los Gobiernos de Nuestra América. En ese contexto recobra nuevos significados lo planteado en 1891 por José Martí:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbado, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tunden y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes (Martí [1891] 1992: 22).

La Habana, 28 de enero de 2017

LAS POLÍTICAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP: UNA APROXIMACIÓN A SUS PRIMEROS 155 DÍAS

Introducción

Este artículo actualiza y, en algunos aspectos, amplía las dos versiones del ensayo que, entre el 21 de enero y el 16 de mayo de 2017, publiqué en diversos medios electrónicos y en algunas revistas académicas latinoamericanas con el título “El gobierno temporal de Donald Trump: una redoblada amenaza para Nuestra América” (Suárez, 2017a y 2017b).

En ese escrito anticipé que, al menos hasta las elecciones intermedias de noviembre de 2018, esa administración le iba a dar continuidad a la mayor parte de los objetivos estratégicos, generales y, en algunos casos, específicos que guiaron las diversas “estrategias inteligentes” que, durante las dos presidencias de Barack Obama (2009-2017), había desplegado la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, así como sus aparatos económicos e ideológico-culturales contra las naciones, los pueblos y algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, agregué que, en razón de su carácter acentuadamente plutocrático, xenofóbico, racista, misógino, chovinista y militarista (puesto de manifiesto en la gran cantidad de multimillonarios blancos y de exmilitares incluidos en su gabinete y en los principales mandos del Consejo Nacional

de Seguridad), en sus interrelaciones con los Gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales del sur político del continente americano, la actual administración republicana le iba a dar un mayor despliegue a las herramientas del llamado *hard power* (incluidas las negociaciones desde posiciones de fuerza) que las que tuvieron durante los ocho años del gobierno temporal precedente.

En esa lógica, históricamente sustentada en las continuidades y los cambios que siempre han caracterizado la proyección externa de los Estados Unidos y, en especial, sus políticas hacia América Latina y el Caribe (Suárez, 2003 y 2006), en las páginas que siguen trataré de sintetizar las diversas informaciones que he recibido acerca de las principales definiciones y acciones hacia (o contra) algunos Gobiernos latinoamericanos y caribeños desplegadas por la cada vez más controvertida, impopular, así como interna e internacionalmente cuestionada, administración de Donald Trump, desde el 21 de enero de 2017 hasta la fecha de terminación de este escrito.

Para facilitar la comprensión de mi análisis y cuando lo considere necesario, en cada uno de los acápite que siguen presentaré los principales objetivos generales o específicos que, en mi opinión, habían guiado las políticas hemisféricas de las dos administraciones de Barack Obama.

Asimismo, me referiré a la manera en que el actual ocupante de la Casa Blanca y su plutocrático y militarizado equipo de política exterior, de defensa y seguridad han abordado el cumplimiento de esos propósitos o emprendido definiciones o acciones que los modifiquen total o parcialmente.

Culminado ese rápido y seguramente incompleto recorrido, en pocos párrafos presentaré mis conclusiones y una advertencia (en mi consideración, aún vigente) que nos dejó el Apóstol

de la independencia de Cuba y precursor de las luchas por “la segunda independencia” de Nuestra América, José Martí; quien, días antes de caer en combate el 19 de mayo de 1895, le confesó a su “hermano queridísimo”, el mexicano Manuel Mercado, que cuanto había hecho y en el futuro haría era luchar para “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América” (Martí [1895], 1974: 473).

Fortalecer su dominación neocolonial sobre México

Como indiqué en varios trabajos publicados entre 2009 y 2016, uno de los principales objetivos que guiaron las políticas hemisféricas desplegadas durante las dos administraciones de Barack Obama fue restaurar o fortalecer, según el caso, su multifacética dominación neocolonial sobre México, sobre todos los Estados-nacionales o plurinacionales ubicados en el istmo centroamericano y sobre la que en los Estados Unidos indistintamente denominan “cuenca del Caribe” o “Caribe oriental”.

En este escrito no creo necesario relatar las diversas acciones emprendidas durante esos ocho años por la maquinaria burocrática-militar estadounidense con vistas a controlar los espacios geoestratégicos, los recursos naturales y los bienes públicos existentes en el que denomino gran Caribe; incluidas las orientadas a profundizar sus asimétricas interrelaciones económico-comerciales, así como en los campos de la defensa y la seguridad con los Gobiernos mexicanos presididos entre 2006 y 2012 por Felipe Calderón y, a partir de esa fecha hasta la actualidad, por Enrique Peña Nieto. Asimismo,

con las administraciones canadienses encabezadas desde 2003 hasta 2016 por el primer ministro neoconservador Stephen Harper y, desde ese último año, por el actual primer ministro liberal Justin Trudeau.

Como ha documentado el economista cubano Fidel Vascós (2016), a pesar de las diferencias existentes entre cada uno de ellos, durante sus correspondientes mandatos se profundizó la integración subordinada de Canadá y México a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los poderes fácticos y de los grupos dominantes en los Estados Unidos. Y, como parte de ese proceso, también se profundizaron las diferenciadas y asimétricas alianzas existentes entre las fuerzas militares y de seguridad de esos tres países con vistas a enfrentar conjuntamente las nuevas amenazas “tradicionales” y “no tradicionales” que —en el criterio del NORTHCOM y del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés)— afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos (Gortney, 2016).

Entre ellas, las supuestamente provenientes de la RPCh, de la República Popular y Democrática de Corea, de la República Islámica de Irán, de la Federación Rusa, al igual que de México y de los diversos Estados centroamericanos y caribeños incluidos en la extensa “área de responsabilidad” del SOUTHCOM.

En mi comprensión, para ese comando su tarea principal sigue siendo contener y, en lo posible, derrotar las amenazas “no tradicionales” a la que llamo “seguridad imperial de los Estados Unidos”: las migraciones incontroladas, el “narcotráfico”, el terrorismo y otros delitos transnacionales conexos (incluido el tráfico de armas y de los precursores necesarios para la producción de estupefacientes presuntamente suministrados por “la tríada china”), al igual que las acciones desplegadas por las fuerzas sociales y políticas, así como los

gobiernos “antiestadounidenses” instalados en diferentes países de América Latina y el Caribe.

Según la información que hasta ahora he recibido, ninguno de los objetivos mencionados en los párrafos anteriores ha sido abandonado por la actual administración republicana. Entre otros elementos que veremos más adelante, así lo demuestran las estrechas interrelaciones que —a pesar de sus diferencias político-ideológicas, así como en algunos de sus enfoques sobre diversos asuntos bilaterales, hemisféricos o globales— se han venido estableciendo entre Donald Trump y el actual primer ministro liberal canadiense Justin Trudeau, quien reajustó su gabinete con vistas a tratar de garantizar sus “relaciones estratégicas” y sus “increíblemente buenas relaciones” con los Estados Unidos, sin convertirse en “un Estado cliente” ni dependiente de su poderoso vecino sureño (Freeland, 2017).

Esas y otras prioridades de la política exterior y de defensa canadiense —sintetizadas en el ya referenciado discurso que pronunció su actual ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, ante el Senado de su país el pasado 6 de junio— han potenciado de forma objetiva las exitosas presiones que, inmediatamente después de su inauguración, ha venido desplegando la actual administración republicana con el objetivo de obtener nuevas y cada vez más onerosas concesiones en las políticas internas, económicas y externas, así como de defensa y seguridad del actual Gobierno mexicano.

Además de sus reiteradas amenazas de deportar a los millones de inmigrantes ilegales mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, así como de continuar construyendo el muro que separa la extensa frontera entre ambos países, esas presiones se han venido expresando en las exigencias de que el Gobierno mexicano asuma mayores compromisos en la

defensa de la seguridad nacional estadounidense y acepte renegociar aquellos componentes del ya leonino TLCAN que, en la perspectiva chovinista y selectivamente “proteccionista” y “librecambista” del actual ocupante de la Casa Blanca y de los sectores empresariales que lo respaldan, son en extremo perjudiciales para la socioeconomía y la macroeconomía de su país.

Así lo ratificó su secretario de Estado, Rex Tillerson, en el discurso que, guiado por el eslogan “Estados Unidos primero”, pronunció el pasado 3 de mayo ante los principales funcionarios del Departamento de Estado (SD, por sus siglas en inglés). En este, luego de delinear el enfoque “neorrealista” de la política exterior que desplegará la actual administración, así como de enumerar algunas de “las iniciativas” que ya se han emprendido o que en el futuro se emprenderán hacia el hemisferio occidental, indicó:

Obviamente, nuestros vecinos, Canadá y México, son de *una importancia vital para nosotros*. Ambos entienden que tenemos que refrescar algunos de los acuerdos que han gobernado nuestras relaciones, en particular en el área del comercio, y [los gobiernos de] ambas naciones están listos para dedicarse junto a nosotros a un esfuerzo de buena fe (Tillerson, 2017a, traducción y énfasis del autor de este escrito).

En correspondencia con ese anuncio, el 15 de mayo, la actual administración estadounidense nombró a Robert Lighthizer como su representante en esas negociaciones, quien, siguiendo los procedimientos establecidos en los Estados Unidos, ya le comunicó al Senado los “modestos cambios” que —en la evaluación preliminar del *Wall Street Journal*— el Departamento de Comercio, ahora encabezado por el multimillonario Wilbur Ross, quiere introducir en el TLCAN (Fernández, 2017).

Esa evaluación coincide con lo indicado por la periodista del *The New York Times*, Julie Hirschfeld Davis. Según ella, en una carta que les envió Lighthizer a los legisladores estadounidenses, este “indicó que el Gobierno buscará mejor paga para los trabajadores estadounidenses y un crecimiento económico a través de mejoras no especificadas al TLCAN”.

Sin embargo, a decir de esa periodista, esa carta de dos páginas “no prevé modificaciones a gran escala” y, por tanto, “contrasta con una versión de ocho páginas que fue circulada en el Congreso durante marzo [que] proponía que se pudieran restablecer aranceles a las importaciones hacia los Estados Unidos que amenazaban a la industria de ese país, así como hacer cambios en la sección sobre reglas de origen de los productos” (Hirschfeld, 2017, traducción del autor de este artículo).

Cualquiera que sea la certeza de esas evaluaciones, inmediatamente después de conocer esos documentos, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló: “Estamos en un momento crítico que nos ofrece la oportunidad de determinar cómo podemos alinear al TLCAN con las nuevas realidades e incluir maneras progresivas, libres y justas de abordar el comercio y las inversiones”. Por su parte, la Secretaría de Economía mexicana emitió un comunicado en el que reafirmó “su voluntad de actualizar el TLCAN para hacer frente a los retos del siglo *xxi*” (cit. en Hirschfeld, 2017).

Hay que resaltar que —según había indicado previamente el titular de esa cartera, Idelfonso Guajardo, en una entrevista que le concedió al diario británico *Financial Times*— su Gobierno “estaba urgiendo a Donald Trump a reutilizar los acuerdos adoptados dentro del abortado Tratado Transpacífico (TPP) para crear una poderosa base manufacturera y

energética entre los Estados Unidos, México y Canadá para competir con los bajos costos de las producciones chinas”. También indicó que, en sus conversaciones previas, su homólogo Wilbur Ross había “reaccionado positivamente” frente a esa sugerencia (*Financial Times*, 2017, traducción del autor de este artículo).

Partiendo de esas y otras informaciones antes mencionadas, el periodista mexicano Jorge Fernández Menéndez señaló que, en su opinión, la única diferencia importante que existía entre los Gobiernos de México y de los Estados Unidos era que este quería “sacar adelante los acuerdos de seguridad [antes] que la renegociación del TLCAN”; mientras que el primero había venido defendiendo el criterio de “que todo debe ser parte, con sus lógicas y especificidades, de un mismo paquete”. Tales diferencias —agregó Fernández— deberán solucionarse prontamente porque “tanto en Washington como en México existe conciencia de que no sería sano que la renegociación [del TLCAN] se empalme con los procesos electorales que se darán en [ese] país, pero también en Estados Unidos para renovar el Congreso” (Fernández, 2017).

Mucho más porque en una audiencia del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense, efectuada el 5 de abril de 2017, el senador republicano John McCain y el secretario del DHS, almirante John Kelly, habían coincidido en afirmar que, si las elecciones presidenciales mexicanas se desarrollaran al otro día, probablemente obtendría la victoria el “populista antiestadounidense” y candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador; quien durante una visita que recién había realizado a los Estados Unidos había afirmado que, si ganaba las elecciones presidenciales que se realizarán en México en julio de 2018, “nuestras

relaciones con los Estados Unidos serán de amistad y cooperación; pero no de sumisión” (Reuters, 2017).

Esa preocupación de la actual administración republicana salió a relucir en la reunión que sostuvieron en Washington el 18 de mayo los secretarios de Estado y del DHS, Tillerson y Kelly, con sus correspondientes contrapartes mexicanas, Luis Videgaray y Ángel Osorio Chong, con vistas a analizar “los desafíos que los carteles transnacionales de la droga” les plantean a ambos países.

Así, en la conferencia de prensa que los cuatro ofrecieron después de esa reunión, el canciller mexicano, en un arranque de nacionalismo poco frecuente, criticó la injerencia de Kelly en los asuntos internos de su país. Y, refiriéndose al problema del narcotráfico, indicó que “si los gobiernos de México y los Estados Unidos seguían discutiendo quién es el culpable y el responsable, el único que ganará es el crimen organizado que está llevando violencia y muerte a ambos lados de la frontera”. Esa afirmación fue aceptada por Kelly, quien insistió en vincular ese tema con las pérdidas de vidas humanas que por esas causas también se producen en Centroamérica y Colombia (Gehrke, 2017, traducción del autor de este escrito).

Merece recordar que —según indicó Tillerson en su intervención ante los altos funcionarios del Departamento de Estado ya referida— la reunión antes mencionada fue uno de los frutos de la visita que él y Kelly realizaron a México a mediados de febrero de este año [2017]. En esta se acordó comenzar en Washington “un proceso” entre diferentes agencias oficiales estadounidenses y altos funcionarios del Gobierno mexicano para discutir los asuntos “transmigratorios y del crimen transnacional organizado”. Este, añadió, no “son solo un desafío para nosotros y para la estabilidad de

México [...] También son parte de las redes financieras del terrorismo” (Tillerson, 2017).

Acto seguido indicó que, “por diferentes razones, es vital para nosotros realizar algún progreso en *el gran esfuerzo que estamos realizando en México*”. Y añadió: “En realidad, actualmente estamos organizando un evento en Miami para atraer a diversos líderes y poder hablar con ellos sobre cómo nos organizamos mejor para enfrentar estas problemáticas y *cómo podemos atraer más capital privado para aprovechar las oportunidades de inversión en América Latina y Central*”. Asimismo, “cómo podemos trabajar con los Gobiernos ubicados al sur de México donde existe un gran número de personas que están tratando de llegar [ilegalmente] a los Estados Unidos” (Tillerson, 2017, traducción y énfasis del autor de este escrito).

Bajar las fronteras de seguridad de los Estados Unidos hasta el sur de México

De una u otra manera, esas ideas fueron reiteradas o ampliadas por el subsecretario interino para el hemisferio occidental del SD, Francisco Palmieri, en la intervención que realizó el 9 de mayo ante la 47 Conferencia anual del Consejo de las Américas realizada en Washington. En esta, como es tradicional, participaron representantes de las más importantes empresas transnacionales estadounidenses con intereses en América Latina y el Caribe, al igual que en Canadá.

Por consiguiente, reiterando lo que en las conferencias precedentes habían planteado diversos altos funcionarios de la administración de Barack Obama (entre ellos, su vicepresidente Joe Biden), Palmieri señaló que la actual administración “está comprometida a expandir la seguridad y a fomentar el crecimiento económico del hemisferio occidental”. Y agregó:

“Junto con nuestros socios estamos buscando una visión compartida: un hemisferio libre, seguro y democrático; una región donde impere la ley y el orden en nuestras fronteras, donde las redes del crimen transnacional y el tráfico de actividades ilícitas sean derrotadas” y “donde el terrorismo no pueda echar raíces” (Palmieri, 2017, traducción del autor de este artículo).

Con tal fin, adelantó que el SD, junto con el DHS y el Gobierno mexicano coauspiciaron en Miami una Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica. Antecedida por una “rueda de negocios” convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la que participaron altos funcionarios públicos y representantes de diversas empresas privadas centroamericanas, estadounidenses y mexicanas, la antes mencionada conferencia se realizó el 15 y 16 de junio, primero en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés) y, luego, en la sede del SOUTHCOM instalada en esa ciudad.

En opinión de diversos analistas estadounidenses y mexicanos (compartida por el autor de este escrito), esto último y otros elementos que ya se han visto, o que se verán después, evidenciaron el carácter militarista de las iniciativas para la prosperidad y la seguridad de Mesoamérica que está impulsando la actual administración estadounidense.

Sobre todo, en mi consideración, porque criminalizan las tradicionales corrientes migratorias hacia ese país al unificarlas con fenómenos que tienen diferentes etiologías, como la producción, el tráfico y el consumo de drogas y otros delitos conexos, “el terrorismo”, las “maras” y otras expresiones del “crimen transnacional organizado” también presentes en los Estados Unidos.

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, en la mencionada conferencia de Miami participaron, de manera secuencial, el reaccionario vicepresidente estadounidense Mike Pence (quien pronunció las palabras inaugurales) y los secretarios de los departamentos del Tesoro, de Estado y de Seguridad Interna de ese país, Steven Mnuchin, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente. Asimismo, los secretarios de Hacienda, del Interior y de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, Osorio Chong y Videragay, junto a los presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, y al vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz. Al igual que el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y altos funcionarios gubernamentales (que no he podido identificar) de Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y España; así como representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea.

Según el comunicado difundido por el DHS (cuyo jefe fue el principal promotor de esa conferencia), en esta todos los participantes reafirmaron su apoyo a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica elaborada a finales de 2014, con la asesoría del BID, por los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. También discutieron políticas para “promover inversiones” de compañías privadas estadounidenses y de otros países en la región y “facilitar su crecimiento sostenible”. Asimismo, “vías tangibles para combatir el crimen organizado y promover la cooperación de seguridad regional, mejorar la seguridad ciudadana y realzar el papel de la ley”. Y, en confluencia con los propósitos declarados de la actual administración estadounidense, agregó:

Una Centroamérica segura y estable contribuye a un Estados Unidos seguro y más próspero mediante la ayuda

a asegurar sus fronteras, proteger a los ciudadanos estadounidenses e incrementar las oportunidades para los negocios de ese país. El comprometimiento de los Estados Unidos en Centroamérica apunta a destruir las organizaciones del crimen transnacional, combatir el tráfico de drogas y detener las migraciones ilegales, así como *a incrementar las inversiones del sector privado* para crear empleos y oportunidades económicas en la región. Estados Unidos también reconoce sus responsabilidades para tratar la demanda ilegal de drogas que crea el mercado para las organizaciones criminales transnacionales” (DHS, 2017, traducción y énfasis del autor de este escrito).

A decir del periodista mexicano Raymundo Rivas Palacios, “el plan [de esa conferencia] lo esbozó [el secretario del HSD, John] Kelly al anunciar el ajuste general a la estrategia de seguridad en América Central, en donde México [...] mejore su trabajo y establezca una frontera hermética con Guatemala para frenar la inmigración indocumentada y a los criminales”. De modo que “el Plan de Kelly ajusta la Alianza para la Prosperidad [del Triángulo Norte de Centroamérica], impulsada por el presidente Barack Obama, [que] en octubre del año pasado inyectó 750 millones de dólares en Centroamérica para impulsar proyectos que impulsen el desarrollo económico y lleven a la construcción de un estado de derecho que combate el crimen organizado” (Rivas, 2017).

Merece resaltar que aproximadamente 30 % de esos fondos estuvieron dirigidos a la lucha contra el narcotráfico, al entrenamiento de militares y a las fuerzas armadas de esos tres países (WOLA, 2016). También que, si el Congreso estadounidense finalmente lo aprueba, en el presupuesto anual (FY, por sus siglas en inglés) de 2017-2018 las asignaciones para

la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica sufrirán importantes reducciones derivadas de la rebaja de 37 % de las partidas asignadas al Departamento de Estado —incluida la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés)— presentada al Senado y a la Cámara de Representantes por el actual mandatario estadounidense.

Según el periódico *El Nuevo Herald* que se publica en Miami, “de salir adelante ese presupuesto”, el recorte de los fondos dedicados a Centroamérica “será sustancial”, ya que “reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el anterior gobierno de Barack Obama” (*El Nuevo Herald*, 2017). En ese contexto, Guatemala obtendría \$80,7 millones (frente a los \$131,2 millones que recibió en el FY 2016-2017); Honduras se quedaría con \$67,8 millones (frente a los \$98,2 de 2016-2107), y El Salvador con \$46,3 millones (frente a los \$67,9 anteriores). Por su parte, Costa Rica obtendrá \$400 000 dólares (frente a los \$1,8 millones del FY 2016-2117), Panamá recibirá \$1,2 millones (frente a los \$3,3 millones anteriores) y Nicaragua solo recibirá \$200 000 dólares frente a los \$10 millones que recibió durante el año fiscal precedente.

Lo antes dicho confirma mi criterio de que, en cuanto el Congreso la apruebe, Donald Trump firmará la denominada *Nicaragua Act*, dirigida a imponer sanciones económicas al Gobierno nicaragüense presidido por el líder del “antiestadounidense” FSLN, Daniel Ortega, bajo el pretexto de que en ese país se cometieron fraudes en las elecciones presidenciales de finales de 2016.

Sin embargo, creo necesario aclarar que, hasta ahora, nada indica que la actual administración republicana reducirá, al menos de manera significativa, los 349 millones de dólares en

ayuda militar y policial autorizados en el FY 2016-2017 para la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) impulsada desde 2010 por el gobierno temporal de Barack Obama.

Mucho menos, porque con independencia del monto que finalmente reciba el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, considero que la actual administración dará continuidad a las acciones que, desde años atrás, venía desplegando la maquinaria burocrático-militar y de seguridad estadounidense (incluidas las diferentes agencias del DHS) con vistas a “bajar” su perímetro de defensa y seguridad hasta la frontera de México con Belice y Guatemala (Isacson *et al.*, 2015).

Con ese y otros propósitos, entre el 23 y el 25 de abril de 2017 se efectuó en Cozumel, Quintana Roo, México, la Quinta Conferencia para la Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017). Esta fue coauspiciada por primera vez en su historia por el NORTHCOM, el SOUTHCOM, así como por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de México.

Por consiguiente, participaron en algunas de sus deliberaciones los actuales jefes de esos comandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, al igual que el Secretario de Defensa Nacional y de la Marina de México, la general de la Fuerza Aérea Lori Robinson, el almirante Kurt Tidd, el general Salvador Cisneros Fuentes y el almirante Francisco Soberón Sanz, respectivamente.

Asimismo, altas autoridades de seguridad y defensa (que aún no he podido identificar) de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. También, observadores de Canadá, Chile, Colombia, Reino Unido, República Dominicana, al igual que de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), de la Junta Interamericana

de Defensa (JID) y de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

Todos ellos abordaron a puertas cerradas temas de tanta trascendencia como la “cooperación regional para combatir las amenazas transnacionales”, el papel de las “Fuerzas Armadas y de Seguridad en apoyo al orden público y para casos de asistencia humanitaria”, y diferentes “iniciativas de cooperación para fortalecer la seguridad regional”, así como para “explotar [las] oportunidades [existentes] para mejorar la coordinación y cooperación entre las naciones participantes” (*CancunMio*, 2017).

Así lo denunció en un editorial el prestigioso diario *La Jornada* de México; ya que en los marcos de esa conferencia, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, general Juan Manuel Pérez Ramírez, informó que se había acordado que en los próximos meses las Fuerzas Armadas de México y Guatemala, con el apoyo del SOUTHCOM, formarían una “fuerza de tarea conjunta para efectuar patrullajes terrestres y aéreos en la frontera común, con el propósito de intercambiar información e inteligencia, a fin de combatir la delincuencia organizada” (*La Jornada*, 2017). Tomando como punto de partida esa información, ese diario mexicano indicó:

De ser cierto ese dato, ha de concluirse que el Estado mexicano se encuentra en proceso de una renuncia progresiva de facultades esenciales en materia de preservación de la independencia y la integridad territorial: si en el sexenio pasado se permitió la operación de funcionarios civiles de Washington en tareas de combate al narcotráfico y de persecución de migrantes centroamericanos, en éste se habría autorizado a militares del vecino país del norte a integrarse en la lucha contra la delincuencia organizada.

Lo cierto es que desde 2009 la administración de Barack Obama financió la multimillonaria Iniciativa Mérida (inicialmente denominada Iniciativa de Seguridad para México y Centroamérica) y, en sus últimos dos años, el denominado “Plan Frontera Sur” dirigido a contener el tráfico de drogas y de personas en los límites de México con Belice y Guatemala.

De modo que el ahora llamado “Plan Kelly” solo busca ampliar las posibilidades de inversión de empresas transnacionales estadounidenses en Centroamérica, profundizar las acciones previamente desplegadas en el territorio mexicano por diferentes agencias subordinadas al DHS, al igual que por el NORTHCOM, cuyo entonces jefe, el almirante William Gortney, en el informe que en 2016 le presentó al Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense afirmó que nunca antes en la historia habían sido tan estrechas las interrelaciones de ese comando “con las Secretarías de Defensa y de la Marina del Gobierno mexicano” (Gortney, 2016).

Fortalecer “la alianza estratégica” entre Colombia y los Estados Unidos

Es preciso resaltar que la participación de representantes de Colombia tanto en la Centsec 2017 como en la antes mencionada Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica que se realizó en Miami se vinculan, de una u otra manera, con el *Plan de Acción sobre Cooperación en Seguridad Regional* aprobado en 2012 por los Gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia en las diversas sesiones del “Diálogo de Seguridad Estratégica de Alto Nivel” que, desde hace varios años, se viene desarrollando entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países (Isacson *et al.*, 2013).

En los marcos de ese plan, más de 25 000 oficiales policiales y militares mexicanos y de otros países de América Latina (en especial de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) recibieron entrenamientos de diferentes tipos por parte de las represivas Fuerzas Militares colombianas (Suárez [2014], 2016 y Suárez, 2016a).

Esas y otras acciones hemisféricas y extrahemisféricas que, por encargo del Pentágono han venido ejecutando las Fuerzas Militares colombianas, se han mantenido y se mantendrán durante la administración de Donald Trump. Esto se depende del resultado de la reunión que él sostuvo el 17 de mayo de 2017 en la Casa Blanca con el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Este, en un artículo publicado en el *New York Times*, indicó que, en su “productiva conversación” con Trump, se acordó continuar “trabajando juntos” para fortalecer “nuestra alianza estratégica en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo colombiano”. Como parte de esa alianza, agregó, seguiremos “trabajando juntos para ayudar a México y a los países del Triángulo Norte de América Central [...] a combatir la violencia de los carteles de las drogas que está avivando el flujo de refugiados” hacia los Estados Unidos (Santos, 2017, traducción al español del autor de este artículo).

Por otra parte, en una velada referencia al apoyo que le ha ofrecido el Gobierno colombiano a las cada vez más agresivas acciones que ha venido desarrollando la actual administración republicana con vistas a derrocar (incluso por medios violentos) al Gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Santos también señaló: “Estamos unidos con los Estados Unidos y a otras naciones democráticas para defender los valores democráticos de nuestro hemisferio” (Santos, 2017).

A ese tema volveremos más adelante, pero antes de hacerlo creo necesario remarcar que, a cambio de conservar los cerca de 450 millones de dólares que la administración de Barack Obama le había ofrecido en febrero de 2016 en los marcos del denominado plan “Paz Colombia”, el mandatario colombiano también quedó comprometido a “trabajar con la administración Trump para detener y revertir el incremento en la producción de hojas de coca” (la principal, pero no la única, materia prima para la elaboración de la cocaína) que se ha registrado en Colombia en los últimos años.

Cabe recordar que esa fue la principal preocupación que, durante la visita que realizó a ese país a finales de marzo de 2017, les planteó a sus autoridades oficiales el (al parecer ratificado) subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, William Brownfield.

En la entrevista que le ofreció al diario *El tiempo* de Bogotá, él adelantó que, en el FY 2017-2018, la Casa Blanca iba a proponerle al Congreso una reducción hasta de 37 % de los fondos previamente asignados a la ayuda financiera que ofrecen los Estados Unidos a diversos países del mundo y, a la par, un incremento de 54 000 millones de dólares en los gastos militares. Por otra parte, Brownfield indicó que, “bajo la ley de los Estados Unidos”, las FARC todavía están calificadas como “una de las organizaciones de narcotráfico más grande del mundo y un organismo de terrorismo internacional” (*El Tiempo*, 2017).

Días después se difundió que, gracias a las gestiones del reaccionario senador republicano Marcos Rubio, Trump había sostenido una conversación (supuestamente casual) en sus propiedades de Mar-a-Lago (Florida) con los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: cabezas

visibles de los sectores de la ultra derecha colombiana opuestos a los Acuerdos de Paz firmados a finales de noviembre de 2016 entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez (alias *Timochenko*). Igualmente, a las conversaciones exploratorias que, con iguales fines, se están desarrollando en Ecuador entre los representantes del actual Gobierno colombiano y los de la organización político-militar Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por tanto, esa noticia fue uno de los primeros indicios de que la actual administración estadounidense iba a adoptar una posición altamente crítica frente al decidido apoyo que la administración de Barack Obama les había ofrecido a esos acuerdos entre las FARC y el Gobierno colombiano, al igual que a sus conversaciones con el ELN. Así parecen confirmarlo las declaraciones recientemente realizadas en Miami por el secretario del DHS, John Kelly.

Según la agencia cablegráfica española EFE, en estas él señaló que el ELN “está acorralado” y que su jefatura sería “estúpida” si no firma un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano. Y agregó que, en su consideración: “Las FARC, y en el mismo sentido el ELN, no vienen a la mesa de negociaciones sobre la paz porque son fuertes, vienen porque tienen a soldados, marineros, almirantes y marines que los han vencido y ahora tratan de sobrevivir” (EFE, 2017a).

Acto seguido, señaló: “Si alguna vez tuvieron el apoyo del pueblo de Colombia hace 50 o 60 años, ahora el pueblo colombiano las ha reconocido por lo que son, criminales”. Asimismo, luego de indicar que el acuerdo para la paz “no es perfecto”, Kelly afirmó: “Las buenas noticias son que, finalmente, la insurgencia, la insurgencia asesina, que eran las FARC, parece que se ha acabado. Tomará tiempo para que el acuerdo de paz llegue a ser lo que debe, pero tengo una gran

fe, verdaderamente, en el Ejército de Colombia y en el pueblo de Colombia” (EFE, 2017a).

Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis, confirman que, introduciendo algunos cambios terminológicos y prácticos, la administración de Donald Trump ha asumido como propios los objetivos generales y específicos que guiaron las diversas “estrategias inteligentes” con relación a Colombia desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama.

Estos se pudieran resumir de la siguiente manera: lograr una solución político-militar altamente favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses de la prolongada guerra civil —con contenidos de liberación nacional y social— que, pese a los avances que se han logrado al calor de los Acuerdos de Paz, todavía se está desarrollando en Colombia.

Igualmente, disminuir a toda costa la producción de cocaína y otras drogas ilícitas que, según se ha demostrado, tienen su principal demanda en el mercado interno estadounidense; y garantizar que, con la debida autorización del Pentágono, las Fuerzas Militares colombianas continúen “exportando seguridad” a otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental.

Mucho más porque, en la ya referida visita que realizó el presidente colombiano Juan Manuel Santos a los Estados Unidos, ambos Gobiernos acordaron mantener el “Diálogo de Seguridad Estratégica de Alto Nivel” iniciado durante la administración precedente y se anunció que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitará oficialmente Colombia y otros países latinoamericanos (Argentina, Chile y Panamá) entre el 13 y el 17 de agosto de 2017.

Además, en el FY 2017-2018 del Departamento de Estado propuesto por la administración de Donald Trump están

contemplados 251,4 millones de dólares para darle continuidad al Plan “Paz Colombia” anunciado por Barack Obama, en ocasión de la visita que, en febrero de 2016, realizó a los Estados Unidos el antes mencionado presidente colombiano para celebrar el XV Aniversario de la implementación del bipartidista Plan Colombia, iniciado por la administración de William Clinton.

Aunque, como bien se indicó en el referido análisis de *El Nuevo Herald*, esa cifra reduce de manera significativa los 391 millones de “asistencia humanitaria y para el desarrollo” que habían entregado al Gobierno colombiano en el FY 2016-2017, “es posible que haya más fondos para Colombia”, ya que “a los fondos para cada país deben sumarse las cantidades dedicadas a los programas de seguridad, democracia, lucha contra el narcotráfico o inmigración, que tienen cuentas conjuntas para todo el continente y reparten los fondos según se juzgue necesario” (*El Nuevo Herald*, 2017).

Por otra parte, a decir del director de la Oficina de Ayuda Exterior del Departamento de Estado, Hari Sastry, en el FY 2017-2018 “se está dando prioridad a los programas centrados en complicar la actividad de las organizaciones criminales transnacionales, a fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la corrupción” (cit. en Stargardter, 2017).

Derrocar al Gobierno constitucional venezolano

A lo dicho hay que agregar que —según *El Nuevo Herald*— en el desglose por países de la propuesta de fondos “para las operaciones en el continente americano y el Caribe” que desplegará en 2018 el Departamento de Estado (1093 millones de dólares: \$614 millones menos que en el FY 2016-2017) no aparecen consignados los 20 millones de dólares destinados

en 2016 por la administración de Barack Obama a “promover la democracia en Cuba”. Tampoco los 6,5 millones destinados por esa administración a apoyar a las “organizaciones de la sociedad civil” opuestas a la “dictadura venezolana” y, en particular, a los sectores más reaccionarios y neofascistas de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Posteriormente me referiré a las implicaciones que la real o presunta eliminación de los fondos destinados a Cuba pudieran tener para el futuro inmediato y previsible de la que he denominado “*anormalización* de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba” (Suárez, 2015). Pero ahora quiero resaltar que el ocultamiento de los fondos destinados a Venezuela en otras partidas (como la dedicada a “la promoción de la democracia en todo el mundo”) o su eventual eliminación en modo alguno significa que la actual administración republicana haya abandonado el propósito del mandato de Barack Obama de desestabilizar y, si le fuera posible, derrocar al Gobierno constitucional venezolano presidido desde abril de 2013 por Nicolás Maduro.

Por el contrario, en los cinco meses del gobierno temporal de Donald Trump, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial, así como sus aparatos ideológicos, informativos y culturales, de manera unilateral o de consuno con sus “socios”, “aliados” o “amigos”, gubernamentales o no gubernamentales de dentro y fuera del hemisferio occidental, ha radicalizado todas las acciones previstas en los planes Venezuela Freedom 1 y Venezuela Freedom 2 elaborados y desplegados por el SOUTHCOM, desde los primeros meses de 2015.

Fundamentados en las sucesivas directivas presidenciales de Barack Obama de 2015, 2016 y de los primeros días de enero de 2017, en las que se calificó a Venezuela como una

“amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, ambos planes han estado expresamente dirigidos a crear las condiciones políticas y militares necesarias para producir “el cerco”, “la asfixia” y “la implosión” de la sociedad y del sistema político venezolano, con vistas a justificar y tratar de legitimar una “intervención regional humanitaria” en ese país suramericano (SOUTHCOM, 2016).

Entre las muchas evidencias que pudieran enumerarse, creo necesario resaltar las sanciones aprobadas de manera bipartidista por el Congreso y por el actual presidente estadounidense contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami (sindicándolo de “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”) y, posteriormente, contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En este caso, utilizando como pretexto su decisión, prevista en la Constitución vigente, de transferir a ese órgano del poder judicial algunas de las atribuciones de la Asamblea Nacional, cuyas sucesivas presidencias —controladas por los sectores más reaccionarios de la MUD— sistemáticamente han desacatado las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y del propio TSJ, así como entorpecido las labores del poder ejecutivo. Igualmente, han impulsado y apoyado diversas acciones violentas (con un alto saldo de pérdida de vidas humanas y con significativos costos económicos) dirigidas a derrocar al Gobierno constitucional venezolano, incluso mediante sus constantes (y hasta ahora desoídos) llamados a un golpe de Estado militar.

A pesar de esto, en un acto poco frecuente en “la diplomacia” estadounidense, el pasado 8 de mayo el consejero para la seguridad nacional de Donald Trump, Herbert Raymond McMaster (posteriormente mencionaré algunos de sus antecedentes), sostuvo en Washington una reunión con uno de

los principales dirigentes de la MUD: el actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges.

Según el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, Borges y McMaster discutieron “la necesidad de respetar la Constitución venezolana, de liberar a los presos políticos, de respetar la Asamblea Nacional y de realizar elecciones libres y democráticas” en ese país (Reuters, 2017a).

A lo dicho se une el decidido apoyo que, en contraste con las ambivalencias de la administración precedente, le ha venido ofreciendo el actual gobierno temporal estadounidense a las diversas (y hasta ahora frustradas) maniobras emprendidas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para tratar de garantizar, a toda costa, que una Reunión de Consultas de los Ministros de Relaciones Exteriores de los 34 Estados integrantes de esa organización le aplique a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana aprobada en 2001.

Esas maniobras —muchas veces violatorias de los reglamentos funcionales del Consejo Permanente de la OEA—, al igual que las coordinaciones al respecto realizadas con Almagro, aparecen expresamente indicadas en los planes del SOUTHCOM orientados a producir una “intervención regional humanitaria” en ese país suramericano.

De ahí y de las diversas acciones proactivas emprendidas por el SD, el decidido apoyo que las maniobras antes mencionadas han encontrado, al menos, entre los actuales Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, cuyo presidente, Pedro Pablo Kuczynski (estrechamente vinculado con diversas instituciones financieras estadounidenses y que tuvo que renunciar a la ciudadanía estadounidense para poder aspirar a ese cargo), fue el primer mandatario

latinoamericano que recibió Donald Trump en la Casa Blanca.

Semanas después fue seguido por el acaudalado empresario y actual presidente argentino Mauricio Macri (cuyo padre había tenido algunos negocios inmobiliarios con Donald Trump) y, como ya se indicó, por el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Según algunas informaciones recibidas, en la organización de la visita de este último desempeñó un importante papel el actual secretario del HSD, John Kelly.

En cualquier caso, con esos tres mandatarios el actual presidente estadounidense coordinó personalmente las acciones que está desplegando su administración contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Según diversas informaciones, esas coordinaciones también estuvieron incluidas en la visita que realizó en la tercera semana de junio a los Estados Unidos el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y, con anterioridad, en las conversaciones telefónicas que ha sostenido Trump con el corrupto y cada día más desprestigiado presidente brasileño, Michel Temer; con el presidente de México, Enrique Peña Nieto; y con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Asimismo, en las reuniones que ha sostenido en Washington el secretario de Estado Rex Tillerson con la ahora sustituida ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, y con los cancilleres de Chile y Brasil, Heraldo Muñoz y Aloysio Nunes Ferreira, respectivamente. Además, en los diversos encuentros que, como ya se indicó, Tillerson y Kelly han sostenido desde febrero de este año hasta la actualidad con el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, y con otros integrantes del gabinete de Peña Nieto.

Esto explica el bochornoso papel desempeñado por los representantes del Gobierno mexicano en la Reunión de

Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que se efectuó horas antes del comienzo de la Asamblea General de esta organización, realizada en Cancún, México, entre el 19 y el 21 de junio de 2017.

Reformar y revitalizar la OEA y el Sistema Interamericano de Defensa

En estas, y una vez más contando con el apoyo de los Gobiernos de los Estados Unidos, de Canadá y de otros Estados miembros, su actual secretario general, Luis Almagro, siguió buscando, tanto de manera pública como encubierta, la aprobación de una resolución contra el Gobierno de Venezuela.

Aunque ese intento nuevamente fue derrotado por los votos contrarios o por la abstención de los representantes de 14 Estados integrantes de esa organización, de consuno con su bien remunerada burocracia, Almagro siguió impulsando nuevos y sesgados acuerdos sobre “los derechos humanos” orientados a “reformular” y a “revitalizar” el Sistema Interamericano.

Como he indicado en algunos de mis escritos ya referenciados, a finales de 2013 el Congreso estadounidense aprobó, y Barack Obama firmó, una ley que estipuló que, en su interrelación eficaz con el proceso de las Cumbres de las Américas, con otros miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de esas Cumbres y con el BID, la OEA “debe ser la entidad diplomática multilateral primordial” en el hemisferio occidental (Congress of The United States of America, 2013); definición que, de modo explícito, desvalorizó el importante rol que en las relaciones hemisféricas y extrahemisféricas desde 2011 había venido desarrollado la CELAC.

Esa comunidad (cuyos acuerdos deben tomarse mediante el consenso de todos sus Estados miembros) en estos

momentos está virtualmente dividida a causa, entre otras, de la agresiva política de la administración de Donald Trump contra Venezuela y del apoyo a esta que le han venido dando los gobiernos de diversos partidos de “la derecha” instalados en algunos de los Estados latinoamericanos y, en menor medida, caribeños.

Aunque no los garantizará, esa situación favorecerá el cumplimiento de los aviesos objetivos que se planteará la actual administración estadounidense tanto en futuros eventos de la OEA, y de otros órganos del Sistema Interamericano, como en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Perú en abril de 2018.

En cualquier caso, es necesario recordar que, sobre la base de la ya mencionada ley para revitalizar la OEA aprobada por la administración de Barack Obama y partiendo de los propósitos que previamente se habían planteado en *La política de defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental hasta el 2023* (elaborada durante esa administración, Panetta, 2012), en 2014 el Pentágono —apoyado en la JID— impulsó, tanto dentro como fuera de la OEA, “una reforma” del Sistema Interamericano de Defensa.

Esta tenía como uno de sus principales fines elaborar un instrumento jurídico hemisférico que sustituya al obsoleto y desacreditado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 e institucionalizar una Comisión Interamericana de Defensa en el seno de la OEA (JID, 2014).

Ninguna de esas propuestas prosperó a causa de la correlación de fuerzas desfavorables a esos propósitos que entonces existía entre los Gobiernos de los 34 Estados integrantes de esa organización. Como esa correlación ha cambiado desde finales de 2015 hasta la actualidad, es posible que en diferentes órganos y foros del Sistema Interamericano (incluida la

CMDA y las conferencias de jefes de Ejércitos, de la Marina y la Aviación que sistemáticamente se efectúan de espaldas a la opinión pública) se retomen todos o algunos de esos planes de la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos. Mucho más por el importante papel que tienen varios altos militares recientemente retirados, tanto en el gabinete como en los principales mandos del Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés) del actual gobierno republicano.

En las páginas anteriores ya mencioné el significativo rol que, en razón de sus conocimientos sobre América Latina y el Caribe, ha venido desempeñando el exjefe del SOUTH-COM y ahora secretario del DHS, John Kelly, en la definición de las políticas de la actual administración hacia México y Centroamérica, así como hacia Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos y caribeños.

A ello hay que agregar que el recién nombrado secretario adjunto del SD, el abogado John Sullivan, previamente había laborado en el Pentágono y sostuvo estrechas relaciones con el actual secretario del Departamento de Defensa (Dod, por su acrónimo en inglés), el general retirado de la Infantería de Marina James Mattis (Sullivan, 2015).

Este —luego de su destacada participación en las sangrientas guerras del Golfo (1991), de Afganistán (a partir de 2001) y de Irak (a partir de 2003)— fue separado de las Fuerzas Armadas estadounidenses por oponerse a los cambios que había introducido la administración de Barack Obama en su proyección político-militar hacia el Medio Oriente y el golfo Pérsico. Como ya se sabe, esa proyección ha sido radicalmente modificada por la actual administración republicana luego de las visitas realizadas por Donald Trump a Arabia Saudita y al Estado de Israel.

A su vez, luego de la renuncia de su primer Consejero de Seguridad Nacional, el “islamofóbico” y prosionista teniente general retirado Michael Flynn (ahora sometido a una investigación por el Senado a causa de sus estrechos vínculos con el embajador de Rusia en los Estados Unidos), Donald Trump nombró como su asesor y jefe del NSC al ya mencionado teniente general H. R. McMaster, considerado como el “soldado más reconocido” y “el mejor brigadier” durante la criminal guerra desplegada por los Estados Unidos en Irak. Asimismo, como un especialista en contrainsurgencia y un “guerrero pensador” de la arquitectura que en el futuro deberá tener el Ejército estadounidense.

Por su parte, McMaster escogió como vicejefe del NSC al general Ricky Wadell, y al veterano oficial de la CIA Juan Cruz (de origen puertorriqueño) como director del hemisferio occidental de esa importante dependencia del equipo ejecutivo de la Casa Blanca.

Según los reporteros de UNIVISION David Adams y Enrique Acevedo, antes de su nombramiento en el NSC, Cruz había sido el jefe de América Latina en la CIA y, previamente, había cumplido misiones de esa agencia en Brasil, Perú y Colombia. En este último país fue jefe de la Estación de la CIA en los años en que el Gobierno y las Fuerzas Militares de esa nación obtuvieron “grandes éxitos en su enfrentamiento a los carteles de las drogas” y le propinaron “duros golpes” a la comandancia del Estado Mayor de las FARC. De ahí sus estrechos vínculos con el actual vicepresidente colombiano, el general retirado y exjefe de la Policía Nacional, Oscar Naranjo (Adams y Acevedo, 2017).

Sobran los comentarios sobre “los méritos” de Cruz; pero esa selección parece indicar que, al igual que ocurrió durante la administración de Barack Obama, el antes mencionado

director de Asuntos Hemisféricos del NSC (puesto tradicionalmente ocupado por un diplomático o un académico especializado en la región) desempeñará un importante papel en la definición de la política de la actual administración republicana hacia América Latina y el Caribe. Mucho más porque, en el momento de terminar este artículo, aún no se había nombrado al nuevo subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado.

Debilitar a la UNASUR y a la CELAC

La Subsecretaría para el hemisferio occidental todavía está ocupada interinamente por Francisco Palmieri, quien, a finales de marzo de 2017, viajó a Paraguay para fortalecer las relaciones políticas y militares entre la nueva administración y las autoridades de ese país suramericano. También para garantizar que su actual presidente, Horacio Cartes, abandonara sus pretensiones de modificar la Constitución y procurar su reelección en los comicios presidenciales de 2018.

El inmediato anuncio de Cartes de que, aun en caso de que el Congreso apruebe la entonces mencionada reforma a la carta magna, no presentará su candidatura contribuyó a aplacar la violenta crisis política que se había presentado en los días previos. Según algunos analistas, esa decisión del actual mandatario paraguayo y la resistencia de importantes sectores de los partidos tradicionales (el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical) a aprobar cambios en la Constitución cierran la posibilidad de que el expresidente y ahora presidente del Senado Fernando Lugo (derrocado en 2012 mediante un golpe de Estado institucional, apoyado por la administración de Barack Obama) presente su candidatura a las elecciones.

Cualquiera que sea la validez de esos análisis, el papel desempeñado por Palmieri en la solución, al menos transitoria, de las agudas contradicciones existentes entre los representantes políticos y militares de las clases dominantes paraguayas demuestra la decisión de la actual administración republicana y, en particular, de su secretario de Estado, Rex Tillerson, de inmiscuirse directa y abiertamente en los asuntos internos de los Estados latinoamericanos y caribeños.

Sobre todo, porque en medio de la complicada y, a ratos, convulsa situación política que está viviendo Paraguay, el 25 de mayo de 2017 llegaron a ese país 23 militares estadounidenses “para entrenar las fuerzas militares locales”. Estos permanecieron allí hasta el 23 de junio como parte de los entrenamientos conjuntos que desarrolla el Comando de Operaciones Especial (SOC, por sus siglas en inglés) del Ejército Sur subordinado al SOUTHCOM (Sánchez, 2017).

Esos y otros intercambios entre militares estadounidenses y suramericanos están afectando el funcionamiento de UNASUR: organización que ahora está atravesando una profunda crisis. Así se ha puesto de manifiesto en las grandes dificultades presentadas para elegir al sustituto de su actual secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper, y en el apoyo que —en contraposición a las posturas de los Gobiernos de Bolivia, Ecuador, Surinam y, en menor medida, de Guyana— le han brindado los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay a las referidas maniobras que, con el decidido apoyo de los Estados Unidos, ha emprendido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para aprobar sanciones colectivas contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa situación han tenido una enorme influencia las estrechas relaciones que, como ya se vio, han mantenido la

actual administración estadounidense con los mandatarios de Argentina, Colombia y Perú. Asimismo, las vacilaciones del actual gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez (ya se había expresado en los sucesivos intentos que se realizaron de expulsar a Venezuela del MERCOSUR) y la multifacética crisis que ha estado y está viviendo Brasil; tanto antes como después del golpe de Estado parlamentario-judicial y mediático que se produjo en 2016 contra su presidente constitucional, Dilma Rousseff.

Ese golpe contó con el apoyo sibilino de la administración de Barack Obama; pero ahora cuenta con el rampante respaldo del actual gobierno temporal estadounidense. Ya se mencionaron la visita que realizó a Washington el canciller brasileño y las conversaciones telefónicas entre Trump y Michel Temer, quien en un año le ha hecho tantas concesiones a los Estados Unidos que, en la ya referida intervención realizada ante el Consejo de las Américas, Francisco Palmieri señaló que su Gobierno estaba disfrutando “una robusta asociación” con Brasil; cuyos “líderes”, al igual que el presidente Trump, están impulsando “una agenda para lograr el crecimiento económico, crear empleos y realizar inversiones en ambos países” (Palmieri, 2017).

A ello añadió que la actual administración republicana estaba impulsando, junto con Brasil y Suiza, una “investigación conjunta sobre el mayor escándalo de corrupción que se haya producido en la región: el creado alrededor de la compañía brasileña Odebrecht”. Y añadió que esa investigación “muestra un compromiso regional compartido con los procesos democráticos y con el buen gobierno; lo que enfatiza el valor de la cooperación de las fuerzas de la ley” (Palmieri, 2017).

Tal apología desconoció por igual las demostradas corrupciones de Temer y las deshonestas prácticas empresariales de

varios integrantes del gabinete de Donald Trump. También es irresuelto y denunciado “conflicto de intereses” que este tiene entre sus alta funciones gubernamentales y sus negocios personales (Baker, 2017).

A lo dicho hay que agregar que durante el primer (y tal vez último) año del gobierno de Temer se profundizaron las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Brasil y de los Estados Unidos. En efecto, con el fin de “reaproximar” y “estrechar” sus interrelaciones, a finales de marzo de 2017 fue invitado y condecorado en Brasil el jefe del Ejército Sur, mayor general Clarence Chin, quien, por primera vez, visitó el Comando Amazónico de las Fuerzas Armadas brasileñas. De manera coincidente, los ministerios de Defensa de ambos países firmaron un convenio de intercambio de informaciones y de cooperación en tareas de investigación-desarrollo en la esfera militar.

Al decir del jefe de la secretaría de la Defensa del Ministerio de Defensa de Brasil, Flávio Basilio, ese acuerdo no requiere la aprobación del Congreso brasileño, lo que posibilitará “establecer cualquier tipo de cooperación militar con los Estados Unidos” (BBC-Brasil, 2017, traducción del autor de este artículo).

Sea válida o no esa afirmación, como parte de ese acuerdo (denominado en inglés: Master Information Exchange Agreement), en octubre de 2017 se realizará en Washington “un nuevo encuentro sobre la industria militar de ambos países” y, posteriormente, el Ejército brasileño organizará un Batallón de infantería que, en 2020, se entrenará junto a una Brigada del Ejército estadounidense ubicada en Fort Polk, Luisiana (BBC-Brasil, 2017).

Previamente, en noviembre de 2017, unidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses participarán, junto a sus pares brasileñas, colombianas y peruanas en la Operación

Américas Unidas. Esta consistirá en el primer ejercicio militar multinacional que a lo largo de la historia han organizado las Fuerzas Armadas brasileñas en la triple frontera existente entre esos tres países. En esa inédita “experiencia militar”, de manera temporal se organizará una base logística en Tabatinga, compuesta por efectivos de las tres naciones amazónicas y del Ejército Sur de los Estados Unidos.

Según el reportaje de la corresponsalía de la BBC de Londres en Brasil, esas maniobras, que durarán diez días, son parte del *AmazonLog* organizado por las Fuerzas Armadas brasileñas luego de haber enviado observadores a un ejercicio de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) realizado en Hungría en 2015.

Un año después —ya durante el gobierno espurio presidido por Michel Temer— las marinas de guerra de ambos países realizaron una actividad preparatoria de las olimpiadas efectuadas en Río de Janeiro. Esta incluyó entrenamientos para enfrentar “focos de terrorismo”. De ahí el regocijo expresado por la Embajada estadounidense en Brasil. Esta indicó que en el año más reciente se formalizó una serie de compromisos claves relacionados con la defensa. Entre ellos, algunos vinculados a la cooperación científica y a la investigación-desarrollo entre las industrias militares de ambos países (BBC-Brasil, 2017).

Esas declaraciones fundamentaron las afirmaciones realizadas por el coordinador del Grupo de Seguridad Internacional, Defensa y Estrategia de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales, Héctor Luis Saint Pierre, quien indicó que los acuerdos de defensa arriba referidos, junto con las conversaciones telefónicas y/o personales, según el caso, que hasta ese momento había sostenido Trump con los presidentes Michel Temer, Mauricio Macri y Pedro Pablo Kuczynski, demostraban la intención de esa administración

de aprovechar el momento político para fracturar la cooperación suramericana.

Igualmente, evidenciaban la “grave preocupación” de la actual administración estadounidense por el incremento del comercio entre la RPCh y América Latina, especialmente si este incluye la venta de armas. En la base de esa preocupación, agregó Saint Pierre, no solo están presentes preocupaciones geopolíticas, sino también las grandes ganancias que obtiene el complejo militar-estadounidense con sus ventas de armas en América Latina (Saint Pierre, cit. por BBC-Brasil, 2017). Vale resaltar que, en los primeros siete años de la administración de Barack Obama, esas exportaciones ascendieron a cerca de 5558 millones de dólares (SAM, 2016).

Como he indicado en otros escritos, esa intención de fracturar la cooperación suramericana ya estaba presente entre los objetivos generales de ese último Gobierno estadounidense. Este, de manera unilateral o concertada con sus aliados en el Congreso paraguayo, emprendió diversas acciones dirigidas a dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y también, de consuno con otros Gobiernos suramericanos, para evitar la profundización de los acuerdos en los campos políticos y de defensa adoptados por la UNASUR, al igual que las resoluciones y los acuerdos de la CELAC menoscabaran su ya mencionado propósito de “revitalizar” y “reformular” la OEA, así como el interés del Pentágono en refundar el Sistema Interamericano de Defensa.

Dividir la Caricom y fracturar sus interrelaciones con Venezuela

Todos esos objetivos continúan guiando la *praxis* de la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de

los Estados Unidos. A lo dicho en las páginas anteriores hay que agregar las diversas presiones que, junto con los representantes en la OEA de Canadá y de varios Estados latinoamericanos, ha venido ejerciendo el Departamento de Estado sobre los Gobiernos de todos los Estados políticamente independientes integrantes de la Caricom.

Así lo denunció el 10 de mayo de 2017 el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en una misiva que envió a todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de esa organización de concertación política, cooperación e integración económica. En esta señaló que, con vistas a lograr “el cambio de régimen en Venezuela”, en la OEA estaba en marcha “un insidioso desarrollo” mediante el cual “un pequeño grupo de Estados poderosos” estaban buscando imponer su voluntad a los Gobiernos caribeños, ya fuera mediante la exclusión o la invitación selectiva de los representantes de los 14 Estados miembros de la Caricom a las reuniones cuasi secretas que se estaban desarrollando en esa organización panamericana. Sobre todo, porque sus votos son necesarios para obtener los 23 imprescindibles (dos tercios de 34) para aplicar sanciones colectivas contra el actual Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (Gonsalves, cit. en CMC, 2017, traducción del autor de este escrito).

Sin embargo, algunos de los Gobiernos caribeños emitieron su voto favorable a la nueva resolución contra Venezuela que se presentó en la referida Reunión de Consultas de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que se realizó en Cancún. No obstante, el aldabonazo de Gonsalves impactó en la XX Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de esa organización (COFCOR, por sus siglas en inglés), efectuada el 22 de mayo de 2017 en Bridgetown, Barbados.

En esta analizaron los cambios que están teniendo lugar en el escenario internacional y hemisférico, así como sus implicaciones para el despliegue de la política exterior concertada entre los Gobiernos de sus Estados miembros. Y, en su declaración final, reiteraron la importancia de defender los principios “de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados” y, en particular, en los de Venezuela (CMC, 2017). Tal consenso se expresó en la frustrada Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que se intentó realizar en Washington el 31 de mayo de 2017.

Como se sabe, ese cónclave tuvo que suspenderse “ante la falta de acuerdo de las dos propuestas de declaraciones presentadas”: Una liderada por los Estados Unidos, México, Perú, Canadá y Panamá que, entre otros temas, “condenaba la convocatoria a la Asamblea Constituyente” realizada por el presidente Nicolás Maduro (cuyos delegados serán electos a finales de julio de 2017 por la ciudadanía venezolana), exigía la liberación de los “presos políticos” y la realización de elecciones “con observación internacional”. Y la otra, presentada por los países de la (Caricom) que “no incluía la mayoría de esas demandas” (BBC, 2017a).

Por consiguiente, es de esperar que en los próximos meses se incrementen las presiones estadounidenses sobre esos Gobiernos caribeños y, en especial, sobre los de Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas y Haití. En el penúltimo caso aprovechando su enorme dependencia de los Estados Unidos y, en el último, con el chantaje (que también se está utilizando contra los Gobiernos de El Salvador y Honduras) de adelantar la deportación de los cerca de 600 000 haitianos que el 22 de julio se les vence el denominado Estatutos de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que les ofreció y, sucesivamente, prorrogó la administración de

Barack Obama después del destructivo terremoto que afectó a ese país caribeño en 2010.

Por consiguiente, ya el DHS comenzó a notificarles que debían comenzar a preparar su regreso a Haití, pero muchos de ellos (en especial los que ya tienen hijos nacidos en los Estados Unidos) se niegan a hacerlo, dadas las precariedades económicas y sociales, las fragilidades ecológico-ambientales y las frecuentes inestabilidades políticas que históricamente han afectado a su país.

Aunque en los Estados Unidos se han levantado diversas voces solicitándole al secretario del DHS, John Kelly, que, en uso de sus facultades y atendiendo a los estragos que en 2016 causó en Haití el huracán Mathew, les prorrogue a los haitianos 18 meses más el TPS, él indicó que solo iba a prorrogarlo durante seis meses antes de adoptar nuevas decisiones al respecto.

Así se lo ratificó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en la visita que realizó a Puerto Príncipe a comienzos de junio de 2017. Inmiscuyéndose en los asuntos internos de ese país, Kelly también le insistió en que desistiera del proyecto de refundar las Fuerzas Armadas haitianas después que la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH, por su acrónimo en francés) se retire de ese país en octubre del presente año. Al respecto, declaró en público: “Lo que ellos necesitan es una nueva política nacional, probablemente una subunidad dentro de la policía nacional fronteriza. Un ejército cuesta mucho dinero para un país como Haití” (Charles, 2017).

Tal decisión es consistente con el viejo propósito del Pentágono y del DHS de que la defensa del territorio y el control del espacio aéreo y de las costas de ese país caribeño sean ejercidos por las fuerzas del SOUTHCOM y por los guardacostas estadounidenses. También con la draconiana política hacia

los inmigrantes indocumentados que, prácticamente desde su inauguración, ha desplegado la actual administración republicana; cuyo presidente se comprometió durante su campaña electoral a deportar 3 millones de personas: 500 000 más que los que fueron deportados durante los ocho años de la administración Obama.

A esto hay que agregar el carácter racista, prepotente e insensible frente a los destructivos impactos que está teniendo y que en el futuro tendrán los cambios climáticos en la socioeconomía, el medioambiente y el equilibrio ecológico de los Estados insulares del Caribe oriental, en especial en los más pequeños y los altamente endeudados, como Haití, a cuyo Gobierno la actual administración estadounidense ha propuesto entregarle, en el FY 2017-2018, 33,3 millones de dólares menos que los que recibió en el FY 2016-2017 (BBC Mundo, 2017b).

No obstante, y aunque todavía no dispongo de informaciones al respecto, estoy casi seguro que el actual gobierno temporal de Donald Trump mantendrá las iniciativas para “la seguridad no tradicional” y para la “seguridad energética” de la cuenca del Caribe desplegadas por su antecesor en la Casa Blanca; ya que esta última está expresamente dirigida a tratar de disminuir “la dependencia energética y financiera” de la mayor parte de los países caribeños (y de algunos centroamericanos) de los suministros petroleros a precios preferenciales y con favorables condiciones de pago que, a pesar de sus grandes dificultades, les ha seguido entregando la República Bolivariana de Venezuela como parte de los acuerdos que en 2005 dieron origen a Petrocaribe y al fondo ALBA-Caribe.

Y, en el caso de la primera, en razón de la importancia geoestratégica que históricamente ha tenido el control del mar Caribe (otrora llamado “el Mediterráneo Americano”),

incluido Puerto Rico y las islas Vírgenes estadounidenses, para la maquinaria de defensa y de seguridad “tradicional” y “no tradicional” de los Estados Unidos. Asimismo, para muchas empresas transnacionales de ese país que son propietarias de los principales sectores de la economía de los Estados caribeños.

Estas sobreexplotan a sus trabajadores y, a su vez, quieren preservar para sí los ingentes recursos naturales y los bienes públicos existentes en el subsuelo y las plataformas marítimas de buena parte de los Estados de la que denominan cuenca del Caribe. Ello explica la gran cantidad de bases y otras facilidades militares y policiales que tienen en esa región el SOUTHCOM, al igual que diversas agencias del DHS (García, 2016).

Aunque a diferencia de la presidida por Barack Obama, hasta ahora la actual administración republicana no ha impulsado ninguna reunión con los jefes de Estado y de Gobierno, ni con los cancilleres de los Estados integrantes de la Caricom, lo dicho en los dos párrafos anteriores se desprende de los planteamientos de Francisco Palmieri, en la ya mencionada 47 Conferencia del Consejo de las Américas. Con la retórica que acostumbran a emplear los funcionarios del SD, en esa ocasión indicó:

En el Caribe también tenemos estrechos vínculos. Los Estados Unidos son el primer socio comercial en esa región. En 2016 tuvimos un superávit comercial de 4600 millones de dólares. Sin embargo, también hay riesgos –crecen el crimen y la corrupción endémica que amenazan la estabilidad de los gobiernos y privan a los ciudadanos de sus derechos básicos a la seguridad y al buen gobierno.

En el Caribe oriental, estamos focalizados en desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y en reforzar la profesionalización de su policía. Estamos

promoviendo las exportaciones y apoyando las oportunidades de inversión del sector privado. Nos focalizamos, por ejemplo, en el uso de energías renovables y de bajo costo para incentivar su desarrollo económico y crear nuevas oportunidades para las empresas estadounidenses (Palmieri, 2017).

Seis días antes y sin hacer precisiones al respecto, en el referido discurso que el 3 de mayo pronunció ante los funcionarios del SD, Rex Tillerson había anunciado: “Lo que queremos hacer es lograr una nueva perspectiva (*step back*) y desarrollar una estrategia para el hemisferio occidental que piense América del Sur como un todo y sus relaciones con América Central, al igual que con Cuba y el Caribe”. Y agregó:

Hay asuntos vinculados al financiamiento del terrorismo. Hay redes terroristas que han comenzado a emerger en partes de América del Sur que requieren nuestra atención. Hay asuntos de gobernabilidad en ciertos países –seguramente ustedes están siguiendo la situación en Venezuela; una real tragedia, pero estamos esperanzados que trabajando con otros [...] estaremos en posibilidades de ganar cierta influencia en Venezuela (Tillerson, 2017a).

Las relaciones oficiales de los Estados Unidos con Cuba: continuidades y cambios

Ya se mencionaron los planes crecientemente agresivos que, de consuno con los Gobiernos de Canadá y de varios Estados latinoamericanos y caribeños, está desarrollando la actual administración republicana contra la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, ahora quiero resaltar que lo indicado por Tillerson acerca de la estrategia para el hemisferio occidental que estaba elaborando el nuevo equipo de la

política exterior, de defensa y seguridad estadounidense ya comenzó a evidenciarse en sus reaccionarias y militarizadas políticas hacia Mesoamérica y hacia Colombia, así como en las estrechas interrelaciones desarrolladas con los actuales Gobiernos derechistas de Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay y Perú, y con el casi saliente Gobierno chileno presidido por Michelle Bachelet.

A esto hay que agregar el *Memorandum Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba*. Este fue firmado por Donald Trump el 16 de junio en un teatro de la llamada “Pequeña Habana” de Miami que lleva el nombre del jefe político de la derrotada intervención mercenaria contra Cuba emprendida por los Estados Unidos a mediados de abril de 1961 (Trump, 2017).

Antes de firmarlo y utilizando los conceptos y el lenguaje antediluviano y ultraconservador presente en los enunciados sobre “la familia de las Américas” contenidos en la Plataforma del Partido Republicano aprobada en Cleveland a finales de junio de 2016 (PPR, 2016), Trump pronunció un discurso que, como han indicado diversos analistas, reverdeció el lenguaje contra Cuba empleado por diversos gobiernos demócratas y republicanos estadounidenses durante los peores tiempos de la Guerra Fría.

Por tanto, elogió a algunos de los cubano-estadounidenses que han cometido criminales actos terroristas contra el pueblo cubano. También ensalzó al reaccionario senador republicano Marco Rubio, quien, además de oponerse sistemáticamente a los cambios de la política hacia Cuba impulsados por la administración precedente, mantiene estrechas relaciones con los sectores más reaccionarios de diferentes países de América Latina y el Caribe y, en particular, de Colombia y Venezuela.

Aunque en el referido memorándum firmado por Trump no se derogaron ninguno de los 22 instrumentos bilaterales firmados entre los Gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos entre los primeros meses de 2015 y enero de 2017 (Cubaminrex, 2017), no me caben dudas acerca de que las directivas de actual presidente estadounidense constituyen un profundo retroceso conceptual y práctico con relación a las “estrategias inteligentes” hacia el Gobierno y el pueblo cubano desplegadas en sus últimos dos años por la administración de Barack Obama.

Basta decir que, con vistas a producir en el corto y mediano plazo cambios favorables a los intereses de los Estados Unidos en el peyorativamente llamado “régimen cubano”, ese mandatario no perdía oportunidad para recabar “el firme apoyo en el Congreso” para “levantar el embargo y otras restricciones legales para facilitar la ampliación de los viajes y el comercio con Cuba”, así como para “acelerar la normalización” de las relaciones entre ambos países.

Mientras que el memorándum firmado por Trump se fundamenta en el “apoyo al embargo económico de Cuba” descrito en la llamada Ley para la Libertad y Solidaridad de Cuba” de 1996 (más conocida como la Ley Helms-Burton) hasta que no se cumplan las condiciones y se instale en ese país “el gobierno de transición” favorable al libre mercado y a la democracia liberal burguesa.

Entre otros elementos que sería muy largo explicar (como los relativos a las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba), con vistas a tratar de acelerar esa “transición”, en el antes mencionado memorándum se establece que, salvo algunas excepciones, en los próximos meses deberán terminar las “prácticas económicas” de las empresas u otras instituciones y de los ciudadanos estadounidenses que “desproporcionadamente

beneficien al Gobierno cubano o a sus militares, o a agencias y personal de inteligencia y seguridad a expensas del pueblo cubano” (Trump, 2017).

Asimismo, se indica que el secretario del Tesoro redefinirá las regulaciones que prohíben el envío de remesas desde los Estados Unidos a miembros del Consejo de Estado y de Ministros, a miembros y empleados de las Asambleas Provinciales y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los jefes locales de los Comités de Defensa de la Revolución, a los directores y subdirectores generales y otros altos funcionarios de los ministerios y las agencias estatales cubanas, a empleados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a los principales dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba y de los sindicatos que la integran, a los directores, subdirectores y editores de todos los medios de comunicación estatales y a los miembros y empleados del Tribunal Supremo de la República de Cuba.

Aunque en las próximas semanas diversos departamentos del Gobierno de los Estados Unidos tendrán que precisar cómo y cuándo se aplicarán esas y otras directivas del presidente Donald Trump, tampoco tengo dudas que estas tendrán diversas afectaciones negativas en el proceso de “anormalización de las relaciones oficiales de los Estados Unidos con Cuba” iniciado por la administración de Barack Obama.

También que se complicará el cumplimiento por parte de los Estados Unidos de algunos de los 22 instrumentos signados por esa administración con el Gobierno cubano presidido por Raúl Castro. Igualmente, se dificultará la aprobación de las leyes para modificar parcialmente “el embargo” contra Cuba que han venido impulsando diversos senadores y representantes de los partidos demócratas y republicanos con el respaldo de la opinión pública estadounidense, de

los ciudadanos de ese país de origen cubano, así como de los empresarios estadounidenses interesados en comerciar con Cuba o en invertir en diversos sectores de la economía de ese archipiélago.

A lo ya dicho considero necesario agregar el impacto negativo que tendrán en las relaciones oficiales cubano-estadounidenses las agresivas estrategias que está desplegando la actual administración estadounidense contra diversos Gobiernos latinoamericanos y caribeños integrantes del ALBA-TCP y, en particular, contra el de la República Bolivariana de Venezuela.

En razón de los estrechos vínculos intersolidarios existentes entre los pueblos y los Gobiernos de Cuba y Venezuela, la escalada de las agresiones de los Estados Unidos y sus principales aliados hemisféricos o extrahemisféricos contra ese país suramericano creará un escenario altamente adverso y de imprevisibles consecuencias para el desenvolvimiento de las relaciones entre los Gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos.

Tres párrafos de cierre y una advertencia de José Martí

Todo lo antes señalado, junto a las graves implicaciones que tendrán para el continente americano y, en especial, para los pequeños Estados y territorios no independientes del Caribe insular la decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático, confirman mi temprana afirmación de que esa administración ya es, y en el futuro previsible continuará siendo, una redoblada amenaza para las naciones, los pueblos y algunos Gobiernos de Nuestra América.

Mucho más porque, a pesar de sus contradicciones internas, la maquinaria de la política exterior, de seguridad y

defensa de los Estados Unidos en los primeros 154 días del actual gobierno ha venido privilegiando, y lo continuará haciendo, el empleo de las herramientas de *hard power* y, por tanto, menoscabando las del *soft power* ingeniosamente combinadas por los dos gobiernos temporales de Barack Obama con vistas a “renovar” y “prolongar a lo largo del siglo XXI” el llamado de modo eufemístico “liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental”.

Esto y las diversas maniobras contrarrevolucionarias, contrarreformadoras y contrarreformistas que está desplegando el Gobierno de los Estados Unidos, de manera unilateral o de consuno con sus principales “socios”, “amigos” o “aliados” gubernamentales y no gubernamentales de dentro y fuera del continente americano (algunos de ellos neofascistas), le confieren un renovado significado a lo indicado por José Martí cuando valoró las implicaciones de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos efectuada en Washington a finales de 1889 y comienzos de 1890:

En cosas de tanto interés, la alarma falsa fuera tan culpable con el disimulo. Ni se ha de exagerar lo que es, ni de torcerlo, ni de callarlo. Los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima, sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política es aclarar y prever. Sólo una respuesta unánime y viril, para la que todavía hay tiempo sin riesgo, puede libertar de una vez a los pueblos [...] de América de la inquietud y perturbación, fatales en su hora de desarrollo, en que les tendría sin cesar, con la complicidad posible de repúblicas venales o débiles, la política secular y confesa de predominio de un vecino pujante y ambicioso que nos los ha querido fomentar jamás, ni se ha dirigido a ellos sino para impedir su extensión [...] o apoderarse de su territorio [...], o para cortar

por la intimidación sus tratos con el resto del universo [...], o para obligarlos, como ahora, a comprar lo que no pueden vender, y confederarse para su dominio (Martí, 1974a: 251).

La Habana, 25 de junio de 2017

LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP CONTRA NUESTRA AMÉRICA: UNA MIRADA RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA

Introducción

Este escrito tiene como uno de sus propósitos presentar algunas anticipaciones con relación a las políticas contra los pueblos, las naciones y ciertos Gobiernos de América Latina y el Caribe que en el futuro previsible desplegará la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad imperial de los Estados Unidos, así como sus aparatos económico-financieros e ideológico-culturales durante el tiempo que le queda al primer (y, tal vez, único) gobierno temporal de Donald Trump.

Pero antes de referirlas presentaré una sintética y seguramente incompleta enumeración de las acciones emprendidas por esa administración desde su inauguración hasta la VIII Cumbre de las Américas efectuada en Lima con el propósito de fortalecer su multifacético sistema de dominación —hegemonía acorazada con la fuerza— sobre el hemisferio occidental.

Como nuevamente se transparentó en la remilitarizada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos difundida a mediados de diciembre de 2017, tales acciones han sido y serán intrínsecas a los propósitos de la actual administración, así como de los sectores de las clases dominantes y los poderes fácticos que la respaldan para derrotar a

los “anacrónicos y autoritarios gobiernos de izquierda” que perduran en la región y para “disminuir la maligna influencia de fuerzas no hemisféricas”; en particular, de la República Islámica de Irán, de la República Popular y Democrática de Corea, de la República Popular China y de la Federación Rusa. Estas dos últimas calificadas como “potencias revisionistas” que “usan la tecnología, la propaganda y la coerción para conformar un mundo antitético con nuestros intereses y valores” (ESN, 2017).

Acciones más relevantes de la administración Trump contra Nuestra América

Como adelanté en el primer trabajo incluido en este volumen, la actual administración estadounidense le iba a plantear “redobladas amenazas” a las naciones, los pueblos y algunos Gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales, al igual que a algunos de los territorios de Nuestra América sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda.

Y, como comencé a documentar en mi análisis acerca de los primeros 155 días de esa la administración (incluido en este volumen), esas conclusiones se han confirmado durante los primeros 15 meses de su controvertida y, para algunos analistas, “errática”, “caótica” o “irracional” gestión. Desmarcándome del empleo de esos calificativos con vistas a encontrar “la racionalidad” de sus acciones, sin ánimo de ser exhaustivo, así parecen confirmarlo, entre otros, los siguientes hechos vinculados entre sí:

- 1.** El endurecimiento y la ampliación de las sanciones económico-financieras contra el actual Gobierno de la República

Bolivariana de Venezuela, presidido desde 2013 por Nicolás Maduro, previamente aplicadas por la segunda administración de Barack Obama. A tal grado que, a diferencia de la retórica empleada por este y abandonando los canales de diálogo de alto nivel que desde abril de 2015 se habían restablecido entre ambos Gobiernos, Donald Trump volvió a calificar a ese país “como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos” y afirmó en un tuit que no descartaba una “acción militar” para derrocar a “la dictadura venezolana”.

Aunque esa amenaza encontró el inmediato rechazo de diversos Gobiernos latinoamericanos y caribeños, de una u otra manera, quedó latente en las declaraciones de su vicepresidente, Mike Pence, durante las visitas que realizó a Colombia, Chile, Argentina y Panamá en agosto de 2017. Igualmente, en la conferencia pronunciada en la Universidad de Texas el 1.º de febrero de 2018 por su entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, pocos días antes de emprender su primer recorrido por América Latina y el Caribe.

En esta, además de vindicar la historia y la vigencia de la Doctrina Monroe (previamente desechada por su antecesor demócrata, John Kerry), Tillerson expresó su respaldo a la posibilidad de que, si no se produce “un cambio pacífico del régimen”, se produjera un golpe de Estado en Venezuela (Tillerson, 2018).

Días después declaró que uno de los principales objetivos de la visita que había realizado a Argentina, Colombia, México, Perú y Jamaica era explorar la disposición de los actuales Gobiernos de esos países a apoyar el bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo, al igual que a otras acciones contra el Gobierno de esa nación que estaba valorando el presidente Donald Trump.

Como han denunciado algunos analistas, entre otras variantes, esas acciones pudieran incluir la creación de un conflicto militar entre Colombia y Venezuela que —acorde con los enunciados de la Venezuela Freedom 2 Operation elaborada por el SOUTHCOM en 2016— sirva como pretexto para desencadenar “una intervención regional humanitaria” contra el pueblo y el Gobierno de ese último país, apoyada en todas las facilidades y los efectivos militares, navales y aéreos que ya tiene desplegado ese comando en Colombia, Honduras, al igual que en Aruba y Curazao (SOUTHCOM, 2016).

Todo esto influyó en el desconocimiento, por parte de los sectores más reaccionarios de la oposición venezolana —algunos de ellos neofascistas—, de los acuerdos a que sus representantes (aún agrupados en la mal llamada Mesa de Unidad Democrática) habían llegado en los primeros días de febrero en República Dominicana con prominentes dirigentes del Gobierno constitucional venezolano. Estos ofrecieron diversas garantías para la participación de los candidatos opositores que cumplieran con las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales que se realizarán el 20 de mayo de 2018.

Al igual que ocurrió en todos los comicios efectuados en 2017 para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente y a los gobernadores y alcaldes de todo el país, los próximos comicios presidenciales ya fueron descalificados *ex ante* por la actual administración estadounidense. Esta contó con el apoyo de los gobiernos temporales de los Estados integrantes del llamado “Grupo de Lima”: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Junto al de Bahamas, los jefes de Estado y de Gobierno o los cancilleres de todos esos países que asistieron a la VIII

Cumbre de las Américas aprobaron una nueva declaración contra el actual Gobierno venezolano. Tal declaración también fue firmada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien en su discurso ante ese evento calificó a Venezuela como un “Estado fallido” y a su Gobierno como una “dictadura corrupta”. Y añadió: “Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos listos para hacer más, mucho más, para apoyar directamente al cada vez más sufrido pueblo venezolano” (Pence, 2018).

Antes de esa afirmación, Pence había indicado que “el colapso venezolano ya está afectando a las economías de la región” y “ofreciéndole nuevas oportunidades a los traficantes de drogas y a las organizaciones criminales transnacionales para poner en peligro a nuestro pueblo”: pretexto que ya había sido aducido por el jefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd, en el *posture statement* que presentó el 18 de febrero de 2018 ante el Comité de Servicios Armados del Senado (CSAS). En este indicó:

Venezuela ha proporcionado un largo y permisivo ambiente para narcoterroristas y para los que apoyan a la [organización político-militar libanesa] Hezbollah y es un país de tránsito para el tráfico de drogas ilícitas y de extranjeros de interés especial [para los Estados Unidos]. El continuado asalto a las instituciones democráticas provee un espacio incrementado para actores ilícitos que operan con impunidad, y para Rusia, China y Cuba para expandir su influencia sobre el corrupto régimen de Maduro. Los próximos meses serán críticos con unas elecciones presidenciales, el continuado deterioro de la economía, los extendidos cortes de medicinas, alimentos, electricidad y otros bienes de consumo (Tidd, 2018).

A lo dicho agregó que a pesar de que esos y otros desafíos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que

previamente había mencionado, “son significativos, no son insuperables. A través de la red de seguridad regional, continuaremos construyendo posibilidades, capacidades e interoperatividad, expandiendo el intercambio de información y profundizando nuestros vínculos con los muchos socios comprometidos y capaces que tenemos en la región” (Tidd, 2018). Entre ellos listó a buena parte de los Gobiernos y las fuerzas armadas de los Estados integrantes del Grupo de Lima y, en especial, a los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

2. El abandono de casi todas “las estrategias inteligentes” emprendidas por la administración de Barack Obama con vistas a lograr en el mediano plazo cambios favorables a los “intereses y valores” estadounidenses en el peyorativamente llamado “régimen cubano”. Como se ha documentado, las acciones iniciadas por la actual administración republicana con el objetivo de fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, de reducir las visitas de ciudadanos estadounidenses, así como de crear una Fuerza de Tarea (estatal y no gubernamental) orientada a difundir a través de Internet mensajes dirigidos “a subvertir el orden interno” y a “agredir la institucionalidad” de ese país, han tenido diversos efectos negativos en las relaciones oficiales entre ambas naciones (*Bohemia*, 2018).

Sobre todo, después que, tomando como pretexto una indemostrada “agresión acústica” contra algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, fueron expulsados 17 funcionarios de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos y se redujeron al mínimo imprescindible los servicios consulares que les ofrecían en su Embajada en La Habana a los ciudadanos cubanos interesados en viajar de manera temporal o permanente hacia los Estados Unidos.

Sin que se hayan anulado totalmente, esa decisión —unida a la prohibición de que funcionarios oficiales estadounidenses viajen a Cuba— ha afectado el cabal cumplimiento por parte de la actual administración estadounidense de buena parte de los 22 acuerdos en diferentes áreas de mutuo interés suscritos entre los Gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, entre mediados de 2015 y enero de 2017.

Mucho más, por el tono cada vez más agresivo y ofensivo contra el Gobierno y el pueblo cubano que han venido empleando el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de su administración, así como el jefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd, quien señaló:

Desde el punto de vista de la seguridad nacional, Cuba ha demostrado claros intentos de afectar los intereses estadounidenses a través de la colección, vigilancia y actividades de contrainteligencia en los países a través de la región. También ha demostrado sus fallas en su obligación internacional de proteger al personal diplomático [estadounidense]. La planeada transición política de esta primavera [momento en que la Asamblea Nacional de ese país eligió al nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros] es improbable que cambie ese enfoque, disminuya las posiciones de influencia que tienen los militares o altere su cooperación con Rusia, China e incluso Corea del Norte en diferentes asuntos de seguridad, políticos y económicos. La negativa influencia de Cuba en Venezuela [...] es evidente en el incremento de las tácticas autoritarias y de los abusos contra los derechos humanos del régimen de Maduro (Tidd, 2018).

Esa última idea fue retomada por el vicepresidente Mike Pence en su discurso ante la VIII Cumbre de las Américas. Entre otras ofensas hacia Cuba que inmediatamente fueron

rechazadas por el canciller de ese país, Bruno Rodríguez (Rodríguez, 2018), Pence afirmó que “la dictadura cubana no solo hostiga a su propio pueblo”, sino que también ha “tratado de exportar su fallida ideología a toda la región y está ayudando y apoyando a la dictadura corrupta de Venezuela” (Pence, 2018).

3. Esos retrocesos en la que denominé “*anormalización* de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba” (Suárez, 2015), al igual que las antes referidas agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela son congruentes con el objetivo de la maquinaria burocrático-militar, así como de los más recientes dos gobiernos temporales demócratas y republicanos de los Estados Unidos (encabezados por George W. Bush y Barack Obama, respectivamente) de neutralizar, debilitar y donde y cuando le sea posible derrocar a algunos Gobiernos de los 12 Estados latinoamericanos y caribeños integrantes del ALBA-TCP; en particular, a los que desafían la seguridad imperial estadounidense. Al respecto, Tidd señaló:

La expansión de puertos y accesos logísticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela provee a Rusia una persistente y perniciosa influencia, incluida la colección más frecuente de [información de] inteligencia marítima y una visible proyección de fuerzas en el hemisferio occidental. El santuario de robustas relaciones con esos tres países le habilita a Rusia una plataforma para apuntar hacia los Estados Unidos y las facilidades y activos de sus socios, ejercer una negativa influencia sobre los gobiernos no democráticos y para el empleo de opciones estratégicas en la eventualidad de una contingencia global (Tidd, 2018).

4. Aunque después de los resultados favorables a los candidatos del FSLN de las elecciones municipales realizadas en octubre de 2017 (refrendadas por los observadores de la OEA), se han ralentizado las gestiones que desde 2016 venían realizando varios senadores y representantes demócratas y republicanos para aplicarle algunas sanciones económicas al gobierno presidido por el líder del FSLN, Daniel Ortega, durante la administración Trump se ha registrado una sensible disminución de los fondos de la “asistencia humanitaria y para el desarrollo” que le había venido ofreciendo al Gobierno nicaragüense la administración precedente (Security Assistance Monitor, 2018).

5. Algo parecido ha ocurrido en el caso de Bolivia, cuyo Gobierno ha denunciado de forma reiterada la constante injerencia de los últimos gobiernos y de la Embajada estadounidense en los asuntos internos de su país (Tellería y González, 2015; Quintana, 2016). Y, más recientemente, sus conspiraciones con diferentes partidos y organizaciones no gubernamentales de la oposición, con vistas a tratar de desestabilizar al Gobierno boliviano, así como a lograr que estos presenten un candidato único para tratar de derrotar las aspiraciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y de la mayor parte de las organizaciones populares bolivianas y así impedir la reelección del actual presidente boliviano Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, en los comicios que se realizarán a finales de 2019.

Pese a que no se refirió a esos comicios, en su antes mencionado *statement*, Tidd detalló las acciones que han venido desarrollando las diversas unidades integrantes de ese comando con el fin de estrechar sus relaciones con las fuerzas militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Si estas siguen

avanzando, se consolidará un cerco político-militar alrededor de Bolivia. Mucho más si prosperan las tratativas entre los actuales Gobiernos de Argentina (presidido por Mauricio Macri) y de los Estados Unidos orientadas a estrechar sus relaciones en los diversos campos de “la seguridad” y a instalar una Locación de Seguridad Cooperativa (SCL, por sus siglas inglés) en la región del Chaco, fronteriza con Bolivia y Paraguay.

Según diversas informaciones, esa posibilidad se planteó durante las mencionadas visitas realizadas a Argentina por Mike Pence y por el ahora exsecretario de Estado, Rex Tillerson. En cualquier caso, pocos días después de esa última visita, Tidd le indicó al CSAS: “En lo que queda de este año vemos tremendas oportunidades para profundizar nuestras relaciones con esos importantes aliados [suramericanos], así como para revivir nuestros mutuamente beneficiosos acuerdos de cooperación con Argentina y Ecuador” (Tidd, 2018).

6. En lo que atañe al Gobierno de este último país (presidido por Lenín Moreno), esa afirmación comenzó a concretarse en las visitas que realizaron a Quito en febrero de 2018 el entonces subsecretario del Departamento de Estado, Thomas Shannon, y un mes después el teniente general Joseph DiSalvo y la embajadora Liliana Ayalde, segundo jefe y asesora de política exterior del SOUTHCOM, respectivamente. Ambos sostuvieron reuniones con el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas ecuatorianas y con su actual ministro de Defensa, Patricio Zambrano.

Según la Embajada de los Estados Unidos, esa reunión tuvo por objetivo “intercambiar ideas y reiterar su compromiso para impulsar su asociación y fortalecer la histórica amistad” entre su país y Ecuador. Estas, a decir de la Ayalde, están “viviendo un momento muy positivo” (Romero, 2018).

Entre otros propósitos, esas acciones buscan distanciar al Gobierno ecuatoriano de sus compromisos con el ALBA-TCP y, en particular, de los acuerdos adoptados en su más reciente cumbre, efectuada en Caracas el 5 de marzo para coordinar las acciones que desarrollaron los Gobiernos de sus Estados miembros durante la VIII Cumbre de las Américas.

A diferencia de casi todos los mandatarios de los Estados integrantes de esa alianza, Lenín Moreno asistió a esa cumbre, pero tuvo que regresar a Quito para encarar la situación que le planteó el asesinato de dos periodistas en su frontera con Colombia. Previamente, el Gobierno de ese país y el SOUTHCOM les ofrecieron apoyo a las fuerzas militares ecuatorianas para realizar operaciones conjuntas en esa región, con vistas a enfrentar lo que, en su discurso en la VIII Cumbre de las Américas, Mike Pence denominó “desafíos que nos plantean” las fuerzas “marxistas narco-terroristas que brutalmente asesinaron a dos periodistas y su chofer en Ecuador” (Pence, 2018).

7. Esos acercamientos al Gobierno y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas se articulan con las presiones que ha venido ejerciendo la actual administración estadounidense sobre los Gobiernos de los pequeños Estados insulares del Caribe oriental integrantes del ALBA-TCP con el objetivo de que abandonen las posiciones de defensa de la soberanía y a la autodeterminación del pueblo venezolano. Sin embargo, la mayor parte de los Gobiernos de los 14 Estados independientes integrantes de la Caricom rechazaron las persistentes gestiones emprendidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dirigidas a aplicarle al Gobierno venezolano las estipulaciones de la Carta Democrática Interamericana.

Hasta ahora esas presiones y las artimañas de Almagro —oportunamente denunciadas por el primer ministro de San

Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves— solo han logrado producir un cambio en las posiciones adoptadas por el actual Gobierno de Santa Lucía. Este se incorporó al llamado Grupo de Lima y, junto a los de Bahamas y Guyana, firmó la mencionada declaración contra el Gobierno venezolano aprobada en los corrillos de la VIII Cumbre de las Américas.

De ahí que la ampliación del apoyo de los demás Gobiernos integrantes de la Caricom a las políticas estadounidenses contra la Revolución Bolivariana estuviese entre los objetivos de la visita que realizó Tillerson a Jamaica. En esta defendió los supuestos beneficios que le reportarían a todos los Estados caribeños integrantes de Petrocaribe la aceptación de la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe, antes emprendida por la administración de Barack Obama con el propósito de eliminar la “dependencia energética y financiera” que estos presuntamente tienen del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Así lo adelantó el subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, David Malpass, en la conferencia que pronunció el 2 de febrero de 2018 en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de los Estados Unidos. En esta indicó:

Como Venezuela ha colapsado, hemos visto el hundimiento de su intento de proyectar su influencia en la región. Nos congratula que los países receptores de Petrocaribe hayan tenido tiempo para ajustarse a la incapacidad de Venezuela para cumplir sus compromisos [...] y esperamos que las naciones de la región utilicen la oportunidad para diversificar sus importaciones de energía, incluidas la del más eficiente gas natural que se produce en los Estados Unidos (Malpass, 2018).

8. Tal propósito se vincula al proyecto estratégico que —según indicó Tillerson antes de su democión— continuará desarrollando la actual administración republicana con vistas a lograr que, desde ahora hasta 2030, las principales empresas transnacionales estadounidenses se conviertan en las principales suministradoras de gas natural, así como proveedoras de la infraestructura y las tecnologías vinculadas con las multimillonarias inversiones (70 000 millones de dólares) “en nuevas plantas eléctricas para impulsar su crecimiento económico” que se emprenderán en diversos Estados del hemisferio occidental (Tillerson, 2018).

Según la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, tal propuesta les fue reiterada por el secretario de Estado interino, John J. Sullivan, en la reunión que sostuvo en “los márgenes de la Cumbre de las Américas” con los jefes de Gobierno y/o los ministros de Relaciones Exteriores de Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Santa Lucía.

En esta reunión, Sullivan “también discutió la necesidad de apoyar la unidad hemisférica para apoyar al pueblo venezolano y su derecho a tener una voz en el gobierno a través de unas elecciones libres y limpias”. A su vez, él y “los líderes caribeños” acordaron continuar sus compromisos con las iniciativas para la Seguridad y para la Seguridad Energética del Caribe, al igual que sus esfuerzos para enfrentar “los desastres y las emergencias” que frecuentemente se producen en esa subregión (Nauert, 2018).

9. Lo antes dicho también se relaciona con las acciones desplegadas por el SOUTHCOM con el fin de lograr que “sus socios caribeños —como Trinidad y Tobago y las organizaciones multinacionales de esa región” (entre ellas el Sistema Regional de Seguridad y la Agencia Caribeña para el Manejo

de Emergencia y Desastres), al igual que República Dominicana— continúen emprendiendo acciones conjuntas con las fuerzas militares y aeronavales, y con otros departamentos y agencias del HSD con el pretexto de “interrumpir el tráfico de drogas y armas”, prevenir la extensión de “redes extremistas” y cooperar en la respuesta a los mal denominados “desastres naturales” que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, afectan a los Estados y territorios de la cuenca del Caribe (Tidd, 2018).

Las falacias de esa última afirmación se pusieron de manifiesto en el escaso apoyo ofrecido por el actual Gobierno estadounidense (22 millones de dólares) a los Gobiernos de los Estados independientes y “territorios no independientes” del Caribe insular más afectados en 2017 por los poderosos huracanes Irma o María: Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Bahamas, San Martín y Sint Maarten. Estos dos últimos bajo el control de Francia y Holanda, respectivamente.

10. El carácter engañoso de esas promesas de Sullivan también se había evidenciado en la actitud grotesca asumida por Donald Trump frente a la tragedia humanitaria (según diversas y documentadas denuncias, provocó de manera directa o indirecta más de mil muertos) y a los multimillonarios daños a la fragilizada infraestructura del mal llamado Estado Libre Asociado con los Estados Unidos, instaurado desde 1952 en Puerto Rico.

Tal conducta fue y es consistente con las acciones que, desde la administración de Barack Obama, han venido emprendiendo sus autoridades gubernamentales y el Congreso estadounidense con vistas a fortalecer su dominación colonial sobre “ese territorio no incorporado a los Estados Unidos”,

aprovechando la profunda crisis económica, fiscal, social y ecológica en la que han sumido a su cada vez más disminuidos habitantes (la mayor parte vive y trabaja en los Estados Unidos) los corruptos gobiernos “autonomista” o “anexionistas” que los han mal gobernado en los lustros más recientes.

En la misma dirección apuntan las diversas acciones emprendidas antes y después del huracán María por la denominada Junta de Control Fiscal (JCF), nombrada por el Congreso de los Estados Unidos y respaldada por Obama y Trump, para concluir la privatización y desnacionalización de las empresas y otras instalaciones estatales que aún perduran en Puerto Rico.

Igualmente, para cercenar los derechos sociales, económicos y culturales adquiridos mediante las multiformes luchas de su pueblo. Asimismo, para “convertir en ley las dictatoriales medidas de austeridad que la JCF pretende imponer sobre la clase trabajadora puertorriqueña a los fines de aumentar sus ya altos niveles de explotación con el objetivo de asegurarle las ganancias a sus socios del gran capital y pretender pagar la impagable deuda pública del país” (*Gran Oriente Nacional de Puerto Rico*, 2018).

11. Los constantes chantajes de la actual administración estadounidense sobre el cada vez más desprestigiado y entreguista Gobierno mexicano presidido por Enrique Peña Nieto para que acepte “la modernización” favorable a “los intereses nacionales” de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

También para que, a cambio de que el actual presidente de los Estados Unidos no cumpla su amenaza de abandonar ese leonino tratado, las autoridades mexicanas apoyen (como lo han venido haciendo) las políticas estadounidenses contra

Venezuela y para que las fuerzas militares y navales mexicanas asuman mayores responsabilidades y costos en su sangrienta “guerra contra las drogas”, al igual que en la defensa de la seguridad de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. En especial, en Belice y en el denominado triángulo norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala.

Los detalles de las “operaciones multinacionales y transregionales” que ha venido realizando el SOUTHCOM en conjunto con las fuerzas militares y de seguridad de esos tres países, así como con las de México y Belice, fueron difundidos por el almirante Kurt Tidd en el *statement* ya mencionado en este escrito.

12. No puedo aquí referirme a ellas, por cuestiones de espacio; pero sí me parece necesario indicar que esas operaciones conjuntas fueron uno de los frutos de la Conferencia sobre la Seguridad de Centroamérica efectuada en abril de 2017 en Cozumel, México. Como ya indiqué en un artículo anterior incluido en este volumen, por primera en su historia ese cónclave fue auspiciado por los actuales jefes del NORTHCOM y del SOUTHCOM, así como por los secretarios del Ejército y la marina de guerra mexicana.

De ahí que, al igual que ya había hecho su antecesor —el general William Gortney (Gortney, 2016)—, en su *posture statement* ante el CSAS la actual jefa del NORTHCOM y del Comando de Defensa Aéreo Espacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), la general de la Fuerza Aérea Lori Robinson, ensalzó “el florecimiento” de las sistemáticas interrelaciones entre su comando y sus “socios” de la Secretaría Nacional de Defensa y de la Armada de México. Y agregó:

Mientras las fuerzas armadas mexicanas continúan la lucha contra narcóticos en apoyo a los esfuerzos combinados con nuestras fuerzas para el cumplimiento de la Ley, sus líderes están emprendiendo esfuerzos concertados que les permitan participar de manera más amplia en la seguridad regional y proveer liderazgo en materia de defensa a través de América Latina. Esos esfuerzos de nuestros socios mexicanos refuerzan nuestra propia seguridad nacional, mientras realizan significativas contribuciones a la seguridad de América del Norte como un todo. El NORTHCOM mira en el futuro una duradera alianza con nuestros vecinos (Robinson, L., 2018).

Esas afirmaciones, junto a las acciones emprendidas por la actual administración republicana para fortalecer la subordinación de las autoridades mexicanas a los intereses y las necesidades geoestratégicas y geoeconómicas de los Estados Unidos, contribuyen a explicar “las preocupaciones” que han venido expresando en público diversos congresistas republicanos y altos funcionarios del gobierno temporal de Donald Trump, respecto a la posibilidad (reconocida en diferentes encuestas) de que el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, finalmente logre triunfar en las elecciones presidenciales que se realizarán en México el 1.º de julio de 2018.

Como ya se indicó en otro escrito de esta compilación, así lo habían expresado el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, general retirado John Kelly, y el senador republicano John Mc Cain en una audiencia del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense efectuada el 5 de abril de 2017.

13. Según las informaciones más recientes, esa preocupación por el calendario electoral de México y de los comicios intermedios que este año se realizarán en Canadá y en los Estados Unidos siguió presente entre los principales negociadores de esos tres países que se reunieron durante la VIII Cumbre de las Américas para tratar de concluir un acuerdo antes de mayo de 2018.

Así lo indicó Mike Pence en el discurso que pronunció en ese evento. En este indicó: “Me place informarles que Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con Canadá y con México para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros creemos que estamos muy cerca de arribar a ese acuerdo, y nosotros seguiremos trabajando seriamente para hacerlo realidad” (Pence, 2018).

Horas después se reunió de manera separada con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Según algunas informaciones de prensa, en esa “tensa reunión”, Pence abordó el tema del TLCAN, pero no se refirió al irritante “muro” que Donald Trump está empeñado en seguir construyendo con financiamiento mexicano en la frontera entre ambos países.

14. En razón de las constantes injerencias de las autoridades oficiales estadounidenses en los asuntos internos y externos de todos los Estados latinoamericanos y caribeños, los inconsecuentes reclamos del canciller mexicano aludidos en un escrito que aparece en este volumen no han sido respetados por John Kelly.

Muchos menos porque, en razón de las responsabilidades que durante cuatro años ocupó en el SOUTHCOM, él es el más alto funcionario de la administración de Donald Trump

poseedor de amplios prejuicios y conocimientos sobre las realidades latinoamericanas y caribeñas.

Tan así es que a Kelly se le atribuyó el diseño del plan aprobado por la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica, efectuada en Miami entre el 15 y 16 de junio de 2017. Como se indicó en el artículo anterior, por primera vez fue auspiciada por los Gobiernos de los Estados Unidos y de México y en ella se evidenció el carácter militarista de las iniciativas para la Prosperidad y la Seguridad de Mesoamérica (y por extensión hacia el resto de América Latina y el Caribe) que está impulsando la actual administración estadounidense.

15. En correspondencia con esos propósitos, en su *posture statement* ante el CSAS, el almirante Kurt Tidd indicó que veía “una gran oportunidad para construir la cooperación multinacional que caracteriza esos esfuerzos internacionales de interdicción”. En ese contexto mencionó la Operación KRAKEN, “en la cual los Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica identificaron las rutas marítimas ilegales en los litorales de América Central” (Tidd, 2018).

Igualmente, las operaciones HORNET (realizadas por fuerzas del SOUTHCOM, junto a las fuerzas militares de México y Guatemala) y TOGETHER FORWARD, en las que soldados estadounidenses trabajaron con sus contrapartes en Guatemala, Honduras y el Salvador para “mejorar la colaboración transfronteriza” contra las amenazas que le plantean a la seguridad nacional de los Estados Unidos las “redes criminales y extremistas y sus fuentes financieras” que operan a lo largo de esa subregión” (Tidd, 2018). Todas ellas volverán a realizarse durante 2018.

La inmoralidad de esos enfoques sobre “la seguridad”, “la estabilidad” y “la prosperidad” de los “Estados democráticos conectados a valores e intereses económicos compartidos” incluidos en las referencias al hemisferio occidental que aparecen en la flamante Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nuevamente pudo comprobarse en el decidido respaldo de sus artífices a la fraudulenta reelección de Juan Orlando Hernández en las elecciones presidenciales realizadas en Honduras en noviembre de 2017.

Asimismo, en el silencio cómplice del Departamento de Estado frente a la sangrienta represión que desataron algunos de los destacamentos militares hondureños previamente entrenados en los Estados Unidos contra todos los sectores populares que de manera pacífica e inermes se lanzaron a las calles a defender la victoria del candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

16. Algo parecido puede decirse con relación a los continuos asesinatos de dirigentes sociales, así como de familiares y excombatientes de las otrora llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (después de “dejar las armas” y de su incorporación a la vida política legal de ese país, se han denominado Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común), que se han venido produciendo después de la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz firmados a finales de noviembre de 2016 entre el jefe del Estado Mayor de esa organización, Rodrigo Londoño (alias *Timochenko*), y el presidente de ese país, Juan Manuel Santos.

En mi criterio, en la base del reiterado respaldo que le ofrecieron el presidente Donald Trump (en ocasión de la visita que Santos le realizó en mayo de 2017), así como el vicepresidente Mike Pence y el exsecretario de Estado Rex Tillerson

durante sus correspondientes visitas a Colombia, a la manera mezquina y sesgada en que las actuales autoridades oficiales de ese país han venido implementando los Acuerdos de Paz, se encuentran la identificación de esos y otros prominentes funcionarios de la actual administración republicana (incluidos John Kelly y el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y alto oficial de la CIA, Juan Cruz) con las posiciones de los diversos partidos y sectores de la “ultraderecha colombiana”, liderados por el expresidente Álvaro Uribe.

A todo esto debe agregarse la enorme importancia que siempre le ha ofrecido la maquinaria burocrático-militar de los Estados Unidos a su estrecha “alianza” con sucesivos gobiernos colombianos y con las represivas fuerzas militares de ese país. Así lo reiteró el actual jefe del SOUTHCOM, Tidd, tanto en su referido *statement* ante el CSAS, como durante la visita que realizó a Colombia a mediados de marzo de 2018.

En la primera de esas ocasiones reconoció que el apoyo que el Gobierno estadounidense le ofrece a la solución de sus problemas en los marcos del acuerdo de paz se mantiene en sus intereses, ya que continúa facilitando el liderazgo regional de las Fuerzas Militares de Colombia y esto obedece a su papel “como un exportador neto de seguridad”, tanto regional como globalmente. Y agregó: “Nuestros aliados colombianos pueden ofrecerle útiles lecciones de seguridad” a México, Centroamérica y el Caribe a través del Plan de Acción para la Seguridad Regional firmado con los Estados Unidos en 2012 (Tidd, 2018).

Cabe recordar que, según los datos disponibles hasta 2014, en los marcos de ese plan las Fuerzas Militares colombianas le habían ofrecido entrenamiento a más de 30 000 oficiales

militares y policiales de diversos países del mundo y en especial de México, Centroamérica, Ecuador y Perú.

Tales cifras deben haberse incrementado en los años posteriores. Pero, en cualquier caso, aunque en montos menores que en los anteriores, en el presupuesto del FY 2017-2018 y en la solicitud presentada por la Casa Blanca al Congreso para el FY 2018-2019, Colombia sigue siendo el principal receptor de ayuda militar en el hemisferio occidental (Security Assistance Monitor, 2018).

De ahí, de los resultados de los Diálogos anuales que se siguen desarrollando entre los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países, así como del destacado papel que ha venido desarrollando el Gobierno colombiano en sus planes agresivos contra Venezuela, el interés que tenía el presidente Donald Trump de visitar Colombia inmediatamente después de concluida la VIII Cumbre de las Américas y, al suspenderse esa visita, las conversaciones que durante esa cita sostuvo Mike Pence con Juan Manuel Santos.

17. Según las denuncias que se han realizado, como parte de las acciones previstas por el SOUTHCOM para emprender una eventual “intervención regional humanitaria” en Venezuela, en noviembre de 2017 unidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses participaron, junto a sus pares brasileñas, colombianas y peruanas, en la Operación Américas Unidas, considerada el primer ejercicio militar multinacional que, a lo largo de la historia, han organizado las Fuerzas Armadas brasileñas en la triple frontera existente entre esos tres países, relativamente cercana a los límites suroccidentales de Venezuela con Brasil.

Ese ejercicio —justificado en su enfrentamiento conjunto a las “organizaciones criminales” que operan en esa

región— demostró la profundización que se ha producido en las relaciones políticas y, sobre todo, militares entre los Estados Unidos y Brasil durante los casi dos años del espurio, corrupto y cada vez más impopular gobierno de Michel Temer.

A lo antes dicho es preciso agregar que, como parte del convenio de intercambio de informaciones y de cooperación en tareas de investigación-desarrollo en la esfera militar firmado en marzo de 2017 entre los ministerios de Defensa de ambos países, en octubre de ese año se realizó en Washington “un encuentro sobre la industria militar de ambos países” y se reafirmó que en 2020 el Ejército brasileño organizará un Batallón de infantería que se entrenará junto a una Brigada del Ejército estadounidense ubicada en Fort Polk, Luisiana (BBC-Brasil, 2017).

Sin dudas, esos y otros compromisos (como la coordinación de acciones entre las fiscalías y los ministerios de Justicia de ambos países para “combatir la corrupción” en Brasil), junto a las diferentes acciones que han venido debilitando a las principales empresas estatales brasileñas (incluida PETROBRAS) y a las antipopulares leyes en el terreno económico-social aprobadas por el Congreso y por el presidente Michel Temer, será una de las herencias más nefastas que este le dejará al mandatario que resulte electo en los comicios presidenciales que se realizarán en ese país en octubre de 2018.

La “legitimidad democrática” de esas elecciones ha quedado cuestionada como consecuencia de todas las medidas punitivas que ha venido emprendiendo el cada vez más politizado “poder judicial”, así como otros poderes fácticos (incluidas las Fuerzas Armadas y los grandes medios privados de desinformación masiva) para criminalizar, encarcelar y tratar de impedir que el Partido de los Trabajadores y otras importantes fuerzas sociopolíticas populares puedan

mantener la candidatura presidencial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

18. Como seguramente se reconfirmará en la ya anunciada visita que en junio de 2018 realizará a Brasil el vicepresidente Mike Pence, todas esas acciones han contado y seguirán contando con el apoyo del Gobierno de Donald Trump, interesado, al igual que su antecesor demócrata, en evitar que Brasil se transforme en una potencia contestaria a los intereses geopolíticos y geoeconómicos “globales” y hemisféricos de los grupos dominantes, los poderes fácticos y la maquinaria burocrático-militar estadounidense.

También en enterrar definitivamente la reforma y ampliación del MERCOSUR impulsada, a pesar de la oposición del Gobierno paraguayo presidido por Horacio Cartes, por los entonces mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay: Cristina Fernández, Dilma Rousseff y José Mujica, respectivamente. Asimismo, en seguir paralizando el funcionamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y en continuar evitando la implementación de los más importantes acuerdos adoptados por los anteriores o actuales mandatarios de los 33 países integrantes de la CELAC.

Entre ellos, la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobada en la III Cumbre de esa organización de concertación política y cooperación efectuada en La Habana en enero de 2014. A pesar de las reiteradas inconsecuencias de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños actualmente integrantes del Grupo de Lima, los contenidos de esa declaración fueron ratificados en todas sus cumbres posteriores, al igual que en la Declaración final de la Segunda Reunión Ministerial del Foro CELAC-China (FCC) celebrada en Santiago de Chile el 21 y el 22 de enero de 2018 (XINJUA,

2018). Sin mencionarla por su nombre, en esta se criticaron las más reaccionarias definiciones de la política exterior, económico-comercial y medioambiental que ha venido impulsando la administración de Donald Trump.

19. Como ya se indicó, junto con Rusia, la RPCh ha sido catalogada por esa administración como una de las “potencias revisionistas” que, a decir del exsecretario de Estado, Rex Tillerson, desafían los vigentes enunciados de la Doctrina Monroe. De ahí, las ya referidas acciones político-militares que su maquinaria estatal ha venido desarrollando en el continente americano desde 2017. Asimismo, las diversas iniciativas en el terreno económico, comercial, energético y financiero que se habían venido implementando o elaborando con vistas a que Donald Trump las anunciara en la Cumbre de las Américas efectuada en Perú y/o en la Cumbre del G-20 que se realizará en Buenos Aires en noviembre de 2018.

A algunos de los propósitos de esas iniciativas se volverá después, pero conviene adelantar que, aunque Trump no asistió a la primera de esas cumbres, todas ellas fueron impulsadas por la amplia delegación estadounidense encabezada por su vicepresidente Mike Pence, quien comenzó su discurso en la VIII Cumbre de las Américas recabando el apoyo público de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños a la agresión que, un día antes, habían emprendido las Fuerzas Armadas estadounidenses, británicas y francesas contra Siria. Trató de justificar esa agresión culpando a Rusia y a Irán por su “apoyo, equipamiento y financiamiento al régimen criminal de [Bachar] al-Assad” (Pence, 2018).

20. Acto seguido, Pence anunció la decisión de su administración de solicitar que los Estados Unidos sea la sede

de la IX Cumbre de las Américas que deberá efectuarse en 2021, como otra demostración de “la convicción que tiene el presidente Donald Trump” de que su consigna los Estados Unidos primero no quiere decir los Estados Unidos solo (“America first does no mean America alone”), ya que necesita de “sus vecinos y amigos” del hemisferio occidental para poder convertir en realidad su promesa de lograr, primero que todo, “la seguridad y la prosperidad” de los Estados Unidos (Pence, 2018).

No tengo espacio aquí para referirme a otros de los contenidos de su discurso que no se han mencionado en las páginas anteriores, pero creo necesario resaltar que este fue complementario al discurso que, dos días antes, había pronunciado el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en el Foro Empresarial de las Américas (FCA), efectuado en 2018 de manera paralela a la VIII Cumbre de las Américas. Según las informaciones recibidas, después de hacer un sesgado análisis de las relaciones económico-comerciales que China tiene con América Latina y el Caribe, él afirmó que “Estados Unidos no dejará el liderazgo comercial en su propio continente en manos de países autoritarios” (Reuters, 2018; EFE, 2018).

21. Tal afirmación fue consistente con las que había adelantado el subsecretario del Departamento del Tesoro, David Malpass, en su ya referida conferencia del 2 de febrero de 2018. Según indicó, en la perspectiva de la Cumbre de las Américas que se efectuó en Lima, ese departamento y otras dependencias de la administración habían venido elaborando la que denominó “Alianza para el Crecimiento Mutuo, la Transparencia y el Rol de la Ley”, algunos de cuyos componentes apuntan a tratar de contrarrestar los avances registrados en las que él denominó “relaciones no mercantiles de China”

con diversos Estados latinoamericanos y caribeños, al igual que los resultados del FCA (Malpass, 2018). Al respecto enfatizó:

Quiero dejar claro que los compromisos con China pudieran beneficiar a la región [América Latina y el Caribe] si sus términos fueran justos y sus proyectos estuvieran orientados al mercado. China ha invitado al grupo de la CELAC a sumarse a la Franja y de la Ruta [de la Seda] que seguramente tendrá más beneficios para China que para los pueblos de esas naciones. Como dijo ayer el secretario Tillerson, “China ofrece la apariencia de un atractivo sendero para el desarrollo. Pero en realidad frecuentemente envuelve ganancias de corto plazo en función de una dependencia en el largo plazo (Malpass, 2018).

Inmediatamente después, Malpass se refirió al rechazo de la actual administración republicana a la selección inicial de China como anfitriona de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se realizará en 2019. También adelantó que tanto la referida Cumbre de las Américas y del G-20, así como la Cumbre del G-7 que se realizará en Canadá a finales de 2018, le “ofrecerán a los Estados Unidos una oportunidad para renovar su unión política y económica con los países de la región y una colaboración que ha madurado a lo largo de décadas para reflejar una verdadera asociación basada en el deseo compartido de mirar los éxitos de cada uno de los otros” (Malpass, 2018). Y agregó:

Como parte de esa asociación, discutiremos un número de iniciativas para el crecimiento hemisférico en las que están trabajando el Departamento del Tesoro y la Administración. Juntas, pudieran nombrarse América Crece. Esas iniciativas incrementan el comercio y las inversiones en energía e infraestructura, expanden los flujos de inversiones privadas y profundizan el desarrollo del mercado

regional de capitales. Deseamos fomentar el retorno a la democracia en Venezuela, ayudar a incrementar la transparencia y el combate a la corrupción para mejorar el ambiente de los negocios y apoyar los esfuerzos del Triángulo Norte [de Centroamérica] para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad y contener el ímpetu de las migraciones ilegales. Trabajando con la región, aspiramos a mayores oportunidades económicas, mayores ingresos medios y un fuerte respeto al rol de la ley. El ancla de las iniciativas de crecimiento es la necesidad de inversiones en energía e infraestructura.

Acto seguido detalló los contenidos de algunas de esas iniciativas. Entre ellas, la “modernización del NAFTA” y, eventualmente, de otros acuerdos bilaterales o plurilaterales firmados por los Estados Unidos con otros Gobiernos latinoamericanos, así como el diálogo de los bancos estadounidenses y sus contrapartes extranjeras para supervisar de forma adecuada y estar en capacidad de identificar “transacciones sospechosas”.

Asimismo, aplaudió las acciones de los Gobiernos de los cuatro países integrantes de la Alianza para el Pacífico (México, Chile, Perú y Colombia) por haber emprendido ambiciosas acciones para “desencadenar flujos adicionales de capitales privados para proyectos de inversión” (Malpass, 2018). Y, en ese contexto, señaló: “Nuestros aliados democráticos tendrían que saber y anticipar los beneficios derivados de abrazar y promover las prácticas democráticas. Lo mismo tendrían que saber los autócratas y dictadores y anticipar las consecuencias de sus prácticas antidemocráticas y de sus actos ilegales”. Al igual que después hizo Pence en la VIII Cumbre de las Américas, entre estos incluyó a los presidentes de Cuba y Venezuela a los que calificó como “dictadores represivos”.

A modo de conclusión: una rápida mirada al porvenir

Todos los elementos antes señalados permiten afirmar que, en los casi tres años que le quedan al primer y, tal vez, único gobierno temporal de Donald Trump, la maquinaria burocrático-militar y los poderes fácticos estadounidenses desplegarán un conjunto de estrategias mucho más coherentes que las que a veces se les atribuye para tratar de acrecentar las indudables ventajas con que cuentan en el hemisferio occidental con vistas a “proteger a su patria, al pueblo y al modo de vida estadounidense”, “promover la prosperidad de Estados Unidos”, preservar su *pax* mediante “la reconstrucción de su fortaleza militar” e intentar recuperar sus otrora privilegiadas posiciones, tanto en la economía capitalista mundial como en el sistema internacional de Estados.

En especial, frente a los desafíos que en ambos “tableros” les ha venido planteado a los grupos transnacionales de la oligarquía financiera estadounidense, así como a los sectores de sus clases dominantes que tienen ligada su suerte al mercado interno y a la creciente proyección externa de los avances obtenidos por la economía estatal, mixta y privada que funciona en la RPCh, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Gobierno de ese país. Asimismo, la demostrada recuperación del poderío económico-energético y tecnológico de la Federación Rusa y su exitoso despliegue político-militar en y allende sus áreas de influencias más inmediatas.

Y, vinculado con lo antes dicho, la progresiva, aunque inconclusa, institucionalización de un “orden mundial multipolar” antagónico con la hegemonía “unipolar” estadounidense que desde los primeros años del siglo XXI han venido impulsando los sucesivos Gobiernos de China y Rusia

junto con los Gobiernos de diferentes Estados centro asiáticos y con la India, Sudáfrica y Brasil. En este último caso, antes del golpe de Estado jurídico-parlamentario y mediático que en mayo de 2016 derrocó a su presidenta constitucional Dilma Rousseff.

Si mis anteriores criterios fueran acertados, el escenario más probable de las políticas contra la naciones, los pueblos y algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe que en los próximos tres años emprenderá la actual administración republicana se caracterizará por sus refortalecidos y remilitarizados intentos dirigidos a preservar, ampliar y/o profundizar, según el caso, los éxitos que obtuvo en diferentes Estados del sur político del continente americano la que en otros escritos he llamado “contraofensiva plutocrático-imperialista”, emprendida por las dos administraciones de Barack Obama (Suárez, 2017a).

Con tales fines, la actual administración estadounidense, de manera unilateral o en unión con los Gobiernos de los Estados integrantes del Grupo de Lima, continuará y, eventualmente, ampliará todas sus acciones dirigidas a tratar de derrotar la Revolución Bolivariana. Sobre todo si se cumplen los diversos pronósticos que indican que en los próximos comicios presidenciales será reelecto Nicolás Maduro. También continuará tratando de cooptar al actual Gobierno ecuatoriano presidido por Lenín Moreno, utilizando el “momento muy positivo” que están viviendo sus relaciones con los Estados Unidos.

En contraste, con mayor o menor intensidad, según el caso, la maquinaria burocrático-militar de ese país seguirá hostigando a los actuales Gobiernos de Bolivia, Cuba y Nicaragua, presididos por Evo Morales, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente. Asimismo, a las autoridades de los

pequeños Estados insulares del Caribe oriental integrantes del ALBA-TCP y de Petrocaribe. En especial a los que, a diferencia del de Santa Lucía, no se han sumado al Grupo de Lima: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, así como San Vicente y las Granadinas.

En paralelo, la actual administración estadounidense mantendrá su virtual protectorado sobre Haití y seguirá tratando de coaccionar a los Gobiernos de los demás Estados de la Caricom, al igual que al de República Dominicana para que abandonen, de manera progresiva, su defensa de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, así como los compromisos que adquirieron con sucesivos Gobiernos de ese país en los marcos de Petrocaribe.

Funcional a esos propósitos continuarán siendo las iniciativas para la Seguridad y para la Seguridad Energética de la Cuenca del Caribe emprendidas por la administración de Barack Obama y ahora ampliadas con las nuevas propuestas que explayó Rex Tillerson durante su referida visita a Jamaica. Igualmente, con la “Alianza para el Crecimiento Mutuo, la Transparencia y el Rol de la Ley” que —según David Malpass— incorporará las diversas iniciativas ya emprendidas o que en los próximos meses impulse la administración de Donald Trump.

Entre sus objetivos hemisféricos y globales, tal “alianza” perseguirá debilitar todos los organismos de concertación política, cooperación e integración independientes a los dictados estadounidenses creados en los lustros más recientes por algunos o por todos los Gobiernos de los Estados latinoamericanos y caribeños y, en especial, a la UNASUR y la CELAC. Asimismo, a entorpecer o contrarrestar los promisorios acuerdos que algunos de los Gobiernos integrantes de esa última organización han venido elaborando con la RPCh.

Todo esto irá acompañado por las acciones proactivas que desplegarán el NORTHCOM y el SOUTHCOM para fortalecer sus asimétricas alianzas con las fuerzas armadas y de seguridad de la mayor parte de los Estados latinoamericanos y caribeños.

En ese contexto, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos seguirá emprendiendo diversas acciones públicas, discretas o encubiertas para, de consuno con sus “socios” y “amigos” gubernamentales y no gubernamentales mexicanos, impedir, incluso mediante un nuevo “mega fraude”, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales que se realizarán en México en julio de 2018.

Y si, a pesar de esas acciones, este triunfara, el actual Gobierno estadounidense utilizará todos sus instrumentos de poder (incluidas sus cada vez más fortalecidas relaciones con las Fuerzas Armadas mexicanas) para tratar de mediatizar o descarrilar la gestión del gobierno de la coalición “Juntos haremos Historia”, liderada por el MORENA.

Eso será así en razón de la enorme importancia geopolítica y geoeconómica que ha tenido, tiene y tendrá el control del territorio y los recursos de ese país para la seguridad imperial estadounidense, así como para el éxito de sus acciones en Belice y en el llamado triángulo norte de Centroamérica.

En esa subregión, la actual administración estadounidense continuará apoyando todos los planes vinculados a su prosperidad y su seguridad, incluidas las draconianas acciones que ha venido impulsando para humillar a “los latinos” documentados o indocumentados residentes en los Estados Unidos, así como para reprimir las mal llamadas “migraciones ilegales” de latinoamericanos y caribeños, así como de otros

extranjeros de interés especial para los Estados Unidos, que se producen desde o a través del territorio o las aguas territoriales mesoamericanas.

Por consiguiente, a pesar de las corruptelas que los caracterizan, también seguirán respaldando a los actuales Gobiernos de Panamá, Guatemala y Honduras, presididos por Juan Carlos Varela, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, respectivamente. Al mismo tiempo, seguirán trabajando con el ahora recién electo mandatario costarricense, Carlos Alvarado, para mantener todos los compromisos políticos (como los vinculados a su participación en el Grupo de Lima) y en el campo de la seguridad adquiridos por su antecesor: Luis Guillermo Solís.

Simultáneamente, el Gobierno de los Estados Unidos mantendrá las presiones y chantajes de todo tipo que siempre ha ejercido sobre el Gobierno salvadoreño presidido por el líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez Cerén. A pesar de las diferencias que este tiene con diversos aspectos de la política externa estadounidense (en particular con relación a sus políticas agresivas contra Cuba y Venezuela), en este caso la actual administración republicana no emprenderá acciones para derrocarlo, confiando en que en las elecciones presidenciales de 2019 será derrotado el aspirante que presente el FMLN. Mucho más por el descalabro que tuvieron buena parte de sus candidatos en las elecciones intermedias que se efectuaron a comienzos de 2018.

Algo parecido puede decirse de la conducta que mantendrá hasta las elecciones presidenciales de 2020 el gobierno temporal de Donald Trump frente al actual Gobierno uruguayo presidido por “el pragmático” dirigente del Frente Amplio de Uruguay, Tabaré Vázquez. Sus relaciones con este buscarán

que, al menos, su cancillería no abandone las vacilantes posiciones que ha mantenido frente a las acciones desplegadas por los actuales Gobiernos de los Estados integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Paraguay) dirigidas a desacreditar al Gobierno venezolano, así como frente a la mayor parte de los componentes de la actual política estadounidense hacia América Latina y el Caribe. También buscarán mantener los estrechos vínculos de las Fuerzas Armadas uruguayas y con las fuerzas del SOUTHCOM que operan en Paraguay y en el Atlántico sur.

En esa subregión la maquinaria estatal estadounidense mantendrá su apoyo al cada vez más antipopular y entreguista Gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, y respaldará todas las acciones que desplieguen los representantes políticos, militares, judiciales, mediáticos e ideológico-culturales de los diversos sectores de la oligarquía financiera brasileña dirigidos a impedir a toda costa (incluyendo la represión) la candidatura presidencial de Lula en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Y, en el improbable caso que no lo logren, respaldarán a los candidatos de los sectores más reaccionarios de la derecha brasileña, ya que, como seguramente se confirmará durante la próxima visita a ese país del vicepresidente Mike Pence, en la perspectiva de su administración el apoyo del actual y del futuro Gobierno brasileño le será necesario para cumplir sus objetivos hemisféricos y globales, incluido el debilitamiento del BRICS, de la UNASUR y de la CELAC.

Puede decirse algo similar de la conducta que mantendrá la actual administración estadounidense durante y después de las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia en mayo de 2018. Como casi seguramente ninguno de los diversos candidatos de la fragmentada centro-izquierda política de

ese país (ni siquiera el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro) tendrá posibilidades de ganar en la segunda vuelta de esos comicios, lo más probable es que cualquiera que sea el candidato de los partidos tradicionales que resulte electo (Iván Duque o Germán Vargas Lleras), la maquinaria burocrático-militar estadounidense le dará continuidad a todas las acciones previamente emprendidas durante la administración de Donald Trump.

Sobre todo, por el importante apoyo que siempre les han venido brindando los diferentes gobiernos y las represivas Fuerzas Militares de Colombia para el cumplimiento de los cambiantes objetivos hemisféricos y de algunos de los “extra-hemisféricos” de las sucesivas ESN de los Estados Unidos.

Pese a las diferencias existentes entre uno y otro país, casi lo mismo pudiera decirse de las relaciones que mantendrá el actual Gobierno estadounidense con el presidente que resulte electo en los comicios presidenciales que se realizarán a finales de este mes [abril] en Paraguay, al igual que con los mandatarios de Chile y Perú, Sebastián Piñera y Martín Vizcarra, respectivamente.

Como consecuencia de su debilidad política, este último mantendrá todos los acuerdos políticos y militares elaborados con los Estados Unidos por su defenestrado antecesor; mientras que, en razón de su procedencia de uno de los principales partidos de la derecha, Piñera tratará de fortalecer las excelentes relaciones que, desde el golpe de Estado contra Salvador Allende, siempre han existido entre los sucesivos gobiernos militares y civiles de ese país (incluidos los dos mandatos discontinuos de Michel Bachelet) con casi todas las administraciones demócratas y republicanas estadounidenses.

Nada de lo dicho o excluido en las páginas anteriores debe interpretarse como que su autor desmerita las contradicciones o diferencias que en el futuro previsible se presentarán entre algunos de los Gobiernos latinoamericanos o caribeños (incluso, los de “la derecha” o “la centro-derecha”) y, especialmente, con aquellos que no compartan todos o algunos componentes de la chovinista, racista, xenófoba, militarista, selectivamente “proteccionista” y “librecambista”, violatoria de los derechos de los migrantes y sus familias que ha venido desplegando la actual administración republicana, al igual que las muchas veces irrespetuosa y prepotente proyección personal de Donald Trump.

A pesar de la aprobación por consenso del Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, de una u otra manera, algunas de esas contradicciones se expresaron en la VIII Cumbre de las Américas, tanto en sus eventos oficiales como en algunos de los foros de la sociedad civil que, organizados por la OEA, se efectuarán previo a esa cita.

Sin embargo, el repudio mayor a las agresivas políticas contra los pueblos, las naciones y algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe que están siendo implementadas por la maquinaria burocrático-militar estadounidense, ahora encabezada por Donald Trump, de consuno con sus “aliados” hemisféricos, se escuchó en la Cumbre de los Pueblos organizada por las diversas organizaciones populares aglutinadas en el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

En ambas cumbres, en las plurales voces del presidente boliviano Evo Morales, del canciller cubano Bruno Rodríguez, de varios dirigentes populares y prestigiosos intelectuales

latinoamericanos y caribeños volvió a resonar la visionaria advertencia de Simón Bolívar: “...los Estados Unidos [...] parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria en nombre de la Libertad”. También el llamado de José Martí a unir a los pueblos y a aquellos Gobiernos latinoamericanos y caribeños que estén dispuestos a hacerlo “como la plata en las raíces de los Andes” para enfrentar “el gigante de las siete leguas”.

La Habana, 19 de abril de 2018

LAS ESTRATEGIAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP HASTA 2020: ALGUNAS ANTICIPACIONES

Introducción

Este escrito tiene como propósito actualizar y, en algunos casos, ampliar las anticipaciones que publiqué, inmediatamente después de la VIII Cumbre de las Américas (efectuada en Lima, Perú, a mediados de abril de 2018), sobre las políticas hacia América Latina y el Caribe que emprendería la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad imperial de los Estados Unidos, así como sus aparatos económico-financieros e ideológico-culturales durante los casi tres años que entonces le quedaban al primer (y, tal vez, único) “gobierno temporal” de Donald Trump (Suárez, 2018).

A analizar y documentar si se cumplieron o no mis anticipaciones, y en qué magnitud, al igual que a presentar el que considero el “escenario más probable” hasta las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos (noviembre de 2020), van dirigidas las páginas que siguen. Sin embargo, adelanto que, según todas las informaciones que he recibido desde entonces hasta la fecha de terminación de este escrito, confirman los criterios que he expresado en algunos de mis artículos anteriores.

Una mirada a los próximos 21 meses

Por ello, me atrevo a afirmar que, sobre la base de los reverdecidos enunciados de la Doctrina Monroe, en conjunción con el “anticomunismo” desplegado durante la Guerra Fría (1948-1989), al menos hasta el 19 de enero de 2021 el actual gobierno temporal de los Estados Unidos continuará emprendiendo diversas estratagemas político-diplomáticas, económico-financieras, político-militares y en el campo de la seguridad dirigidas a tratar de contrarrestar las que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (difundida a finales de 2017) calificó como “malignas influencias de fuerzas no hemisféricas”; en especial las provenientes de la RPCh y de la Federación Rusa.

Como vimos en uno de mis artículos anteriores, estas dos últimas fueron definidas desde 2017 como “potencias revisionistas” que “usan la tecnología, la propaganda y la coerción para conformar un mundo antitético con nuestros intereses y valores” (ESN, 2017).

Con otras palabras, tomadas de la Estrategia Nacional de Defensa de los Estados Unidos (también difundida a finales de 2017), los desafíos que real o presuntamente les plantean a “la seguridad nacional” de los Estados Unidos las diversas acciones que han venido desplegando en América Latina y el Caribe los Gobiernos de las dos “potencias competidoras globales” arriba mencionadas fueron remarcados a finales de septiembre de 2018 por el actual jefe del SOUTHCOM, vicealmirante Craig S. Faller, estrechamente vinculado al ahora exsecretario de Defensa, general retirado James Mattis.

En las respuestas a las preguntas que les formularon diversos integrantes del Comité de Servicios Armados un mes antes de que su nombramiento fuera aprobado por el pleno

del Senado estadounidense, entre otras ideas al respecto que no tengo espacio para detallar aquí, Faller indicó:

China está expandiendo agresivamente su influencia económica, política y diplomática a través de la región. Busca ampliar su Iniciativa de la Franja y la Ruta [de la Seda] hacia América Latina y el Caribe, y en el último año ha obtenido éxitos diplomáticos gracias a su reconocimiento por parte de algunos de nuestros socios claves (Panamá, República Dominicana, El Salvador). Como en otros escenarios, Rusia emplea el conjunto de sus herramientas diplomáticas, de inteligencia y de información para tratar de influir en las actitudes del público y en los tomadores de decisiones de la región. Ha hecho incursiones significativas en el dominio de la información regional, inundando Internet, redes sociales y canales de televisión con propaganda original o reproducida para sembrar dudas sobre las intenciones de los Estados Unidos. China y Rusia han proporcionado ayudas financieras vitales al Gobierno de Venezuela y tienen relaciones con otros regímenes autoritarios (Cuba, Nicaragua). Ambas les ofrecen [a esos tres Gobiernos] préstamos y entrenamiento militar, así como acuerdos de financiación poco transparentes (Faller, 2018, traducción al español del autor de este escrito).

Cambio de régimen en “la troika de la tiranía”

Esto último y las más recientes declaraciones en diferentes tribunas nacionales o internacionales de Donald Trump, de su vicepresidente, Mike Pence, y de su secretario de Estado, Mike Pompeo, me colocan en otro de los principales objetivos de las diversas estrategias hacia América Latina y el Caribe que en los próximos 21 meses desplegará la actual administración

republicana: impulsar con mayores o menores éxitos, según el caso, el “cambio de régimen” en los países de esa región que conforman el que en las entrevistas que concedió y en el discurso que pronunció en Miami el 1.º de noviembre de 2018 el recalcitrante asesor para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, indistintamente denominó “triángulo del terror” o “la troika de la tiranía” compuesta, a su decir, por los actuales Gobiernos de Cuba, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela (*El Nuevo Herald*, 2018).

En lo que atañe al primero de esos países, la actual administración estadounidense continuará fortaleciendo el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano. También continuará amplificando su propaganda agresiva contra el Gobierno de ese país presidido desde abril de 2018 por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apoyando financieramente a los llamados “grupos disidentes” y entorpeciendo el cabal cumplimiento de la mayor parte de los 22 acuerdos o instrumentos bilaterales que se suscribieron entre los Gobiernos de ambas naciones durante los dos últimos años de la administración de Barack Obama.

Con tales fines, al igual que con el propósito de seguir deteriorando sus relaciones diplomáticas con Cuba, las actuales autoridades oficiales estadounidenses enarbolarán diversos pretextos. Entre ellos, los indemostrados e indemostrables “ataques sónicos” que hace más de un año se produjeron contra diversos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.

Asimismo, la supuesta violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano; y la presunta responsabilidad que tienen “el Gobierno, los órganos de la inteligencia y las Fuerzas Armadas cubanas” en la prolongación de la que diversos altos funcionarios de la actual

administración (incluido el vicepresidente Mike Pence) sistemáticamente han venido denominando “ilegítima, corrupta y criminal dictadura venezolana” (Pence, 2018).

Con el cinismo que lo caracteriza, así lo indicó su actual secretario de Estado, Mike Pompeo, en el discurso que pronunció el 26 de enero de 2019 en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU impulsada por el Departamento de Estado: “Los miembros de este consejo frecuentemente utilizan sus micrófonos para condenar la interferencia extranjera en [sus] asuntos internos. Seamos sumamente claros: la potencia extranjera que actualmente está interviniendo en Venezuela es Cuba. Cuba ha empeorado directamente la situación y Estados Unidos y sus aliados son los verdaderos amigos del pueblo venezolano” (Pompeo, 2019).

Respecto a este último país y en correspondencia con el llamado “Plan Maestro para derrocar a la dictadura venezolana” elaborado a comienzos de 2018 por el SOUTHCOM (SOUTHCOM, 2018), de manera unilateral o concertada con sus principales “aliados”, “socios” y “amigos” gubernamentales o no gubernamentales de dentro o fuera del hemisferio occidental, al igual que con el apoyo de la cúpula del Partido Demócrata, la actual administración republicana dará continuidad a las diversas estratagemas que ha venido desplegando con vistas a tratar de derrocar —mediante un golpe de Estado o una eventual “intervención regional humanitaria”— al Gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuevamente presidido desde el 10 de enero de 2019 por Nicolás Maduro. Entre ellas, la aplicación de nuevas y cada vez más draconianas “sanciones económicas”, así como el emprendimiento de nuevos sabotajes contra la infraestructura venezolana y el apoyo a otras acciones terroristas.

Funcional a esa política serán los esfuerzos que emprenderán diversas agencias estatales y paraestatales estadounidense (entre ellas, la CIA), de consuno con los principales medios de desinformación masiva de diferentes partes del mundo, incluidos los de los Estados Unidos, para sindicar al Gobierno de Venezuela de estar vinculado con el narcotráfico y con los que algunos califican como “grupos terroristas islámicos”; en particular, con la organización político-militar libanesa Hezbollah.

Asimismo, para magnificar la crisis política, económica y social que está viviendo ese país y los “graves problemas” que “el masivo éxodo” de los habitantes de ese “Estado fallido” presuntamente les crearán a “la estabilidad y seguridad” de otros países de la región; sobre todo, a Brasil y Colombia.

De manera convergente, y como parte de la que Atilio Boron denomina “guerra híbrida” o de “quinta generación” desatada contra Venezuela (Boron, 2019), la USAID y otras agencias estatales y paraestatales estadounidenses (como la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés) proseguirán sus diversas acciones dirigidas a tratar de unificar a los alicaídos y disgregados partidos integrantes de la oposición venezolana alrededor de la figura del espurio y cada vez más desprestigiado “presidente encargado Juan Guaidó”.

Por otra parte, el Departamento de Estado, en contubernio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, seguirá tratando de incorporar al llamado “Grupo de Lima” al corrupto Gobierno de la República Dominicana, presidido hasta 2020 por Danilo Medina, y al nuevo Gobierno salvadoreño, presidido, desde febrero de 2019, por Nayib Bukele.

También continuarán ejerciendo presiones sobre los actuales Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,

Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú para que abandonen las reticencias a involucrarse en una “intervención militar humanitaria” contra Venezuela que estos expresaron en la reunión que efectuaron en Colombia el 25 de febrero de 2019; ya que, en su comunicado conjunto, sus signatarios reiteraron “su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza” (Grupo de Lima, 2019).

Todo esto contrasta con las reiteradas afirmaciones del Gobierno estadounidense de que están abiertas “todas las opciones” y con el cerco político militar que han venido estableciendo alrededor de Venezuela.

Por otra parte, la actual administración republicana, contando con el apoyo de sus principales “socios”, “amigos” y aliados latinoamericanos y caribeños, gubernamentales y no gubernamentales, seguirá empleando diversas estrategias y tácticas dirigidas a tratar de lograr el colapso del actual gobierno del FSLN o el adelanto, bajo presión y supervisión internacional, de las elecciones presidenciales que, según su constitución y leyes electorales, se tendrán que realizar en Nicaragua a finales de 2021.

Con tal fin, la maquinaria burocrático-estatal estadounidense, con el apoyo del políticamente dividido Congreso electo en noviembre de 2018, continuará ampliando las sanciones económicas previstas en la denominada Nicaraguan Investment Conditionality Act (*Nica Act*) aprobada por el Senado estadounidense en diciembre de ese año.⁵

5 Según la información disponible, antes de que el Senado estadounidense se inaugurara su nuevo mandato en los primeros días de enero de 2019,

Esa normativa restringe los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales controladas por los Estados Unidos —el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— al gobierno presidido por Daniel Ortega, con “la excepción del financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense” (Calloni, 2018).

Asimismo, y dando continuidad a su respaldo a las criminales acciones terroristas y vandálicas que emprendieron contra el gobierno sandinista en octubre de 2018, ambos “poderes” estatales estadounidenses y las diferentes instituciones paraestatales de ese país continuarán apoyando las diversas acciones desestabilizadoras (algunas de ellas violentas) que en el futuro previsible emprendan las heterogéneas fuerzas opositoras al Gobierno nicaragüense integrantes de la ahora llamada Unidad Nacional Azul y Blanco.

Como ya se ha visto en los primeros días de marzo de 2019, con el respaldo del Gobierno estadounidense esas fuerzas harán todo lo que esté a su alcance para boicotear las nuevas negociaciones “sin condicionalidades políticas de ningún tipo” emprendidas desde el 27 de febrero de ese año entre el presidente Daniel Ortega y los representantes empresariales, políticos y sociales de las diversas fuerzas opositoras agrupadas en la llamada Alianza Cívica (Copades, 2019).

quedó pendiente de aprobación la denominada “Magnitsky Nica Act”, surgida de la unificación de la “Ley Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua” (S.3233) y de la antes mencionada *Nica Act*. Según las reglas del funcionamiento del “poder legislativo” estadounidense, esa ley (promovida, entre otros, por el senador demócrata Bob Menéndez, quien resultó reelecto) deberá ser nuevamente colocada a la consideración de la Cámara de Representantes y del Senado antes de 2020.

Fracturar el “frágil consenso” existente en la Caricom

Con esos y otros fines (incluida su campaña para lograr su reelección en los primeros meses de 2020), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el decidido apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, continuará las diversas y hasta ahora frustradas acciones que ha venido emprendiendo para aplicarle a Nicaragua y a Venezuela las sanciones previstas en la llamada Carta Democrática Interamericana.

Igualmente, con el propósito de menoscabar las gestiones para lograr una solución negociada entre el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro y las fuerzas de la oposición venezolana que, desde los primeros días de enero de 2019, han venido impulsando los actuales Gobiernos de México y Uruguay, presididos por Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente. Estas han encontrado el apoyo de otros Gobiernos de la región.

Para tratar de modificar la correlación de fuerzas hemisféricas que hasta ahora han impedido que puedan alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios en la OEA, la actual administración estadounidense apoyará en las elecciones previstas para 2019 y 2020 a las fuerzas opositoras a los actuales Gobiernos de los Estados caribeños integrantes u observadores del ALBA-TCP: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, así como Surinam; encabezados por Gaston Brown, Roosevelt Skerrit, Keith Mitchell, Timothy Harris, Ralph Gonsalves y Dersy Bouterse, respectivamente (Legra, 2018).

A la par, la maquinaria de la política exterior y de seguridad estadounidense, con el respaldo del Gobierno de Canadá, encabezado desde 2015 por el primer ministro liberal Justin Trudeau, continuará chantajeando a los restantes Gobiernos

de los 14 Estados independientes integrantes de la Caricom, con vistas a tratar de fracturar el que la destacada intelectual trinitaria Jessica Byron ha denominado “frágil consenso” existente en esa organización de concertación política, cooperación e integración económica respecto a la posición que se debe adoptar con relación a la situación de Venezuela (Byron, 2018).

Con tal fin, después de la VIII Cumbre de las Américas efectuada en Perú, el secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, John J. Sullivan, ha realizado, tanto en Jamaica como en Nueva York, algunos contactos con diversos representantes de los Gobiernos de los Estados caribeños integrantes de la Caricom. En especial, con los Gobiernos de Bahamas, la República Cooperativa de Guyana y de Santa Lucía que, hasta la ya referida reunión efectuada en Colombia, habían venido participando en las reuniones del Grupo de Lima.

Cualesquiera que sean los resultados de esas presiones, los pilares de las políticas hacia esa subregión de la actual administración republicana seguirán siendo el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe (expresamente dirigida a debilitar los acuerdos concertados por las autoridades oficiales de esos países con Venezuela en los marcos de Petrocaribe), de la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe y de la Ley de Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe hasta 2020, aprobada en 2010 por la administración de Barack Obama.

Como he indicado en otros escritos (Suárez [2011], 2017), esa ley fue la sucedánea de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe impulsada, desde 1983, por la administración de Ronald Reagan y su prorroga también abarcó el virtual Tratado de Libre Comercio con Haití (conocido como la “Ley

Hope”: *Haitian Opportunity for Economic Enhancement*) firmado en 2007 por los entonces presidentes de ambos países, René Préval y George W. Bush, respectivamente.

Tabla 1. Monto total en dólares estadounidenses de la Ayuda para la Seguridad (AS) y de la Ayuda Económica (AE) ofrecida por los Estados Unidos a los Estados integrantes de la Caricom, sin incluir a Haití (FY 2016-2017 al FY 2018-2019)

PAÍSES	FY	FY	FY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019
A todo el Caribe (AE) *	3 000 000	0	0
Antigua y Barbuda	0	0	0
Bahamas (AS)	1 034 000	100 000	200 000
Barbados (AS)	114 000	0	0
Belice (AS)	5 421 000	200 000	200 000
Guyana (AS)	277 000	200 000	200 000
Jamaica (AE + AS)	12 176 000	500 000	500 000
San Kits y Nieves (AS)	31 000	0	0
San Vicente y las Granadinas (AS)	30 000	0	0
Surinam (AS)	269 000	200 000	100 000
Trinidad y Tobago (AS)	6 633 000	160 000	150 000
Total, AE+AS	28 985 000	1 360 000	1 350 000

*Según la fuente que sirvió de base para la elaboración de esta tabla y, a diferencia de la AS, esa asignación de AE no aparece desglosada por los países receptores.

FUENTE: Tabla confeccionada por la Dra. Tania García Lorenzo sobre la base de las informaciones que aparecen en Security Assistance Monitor 2018, <https://securityassistance.org/>. Consultado el 6 de diciembre de 2018.

Sin embargo, con excepción de Haití, ninguno de los Estados integrantes de la Caricom se encuentra entre los principales receptores de la AS y de la AE que durante 2019 les ofrecerá el actual Gobierno de los Estados Unidos a sus principales “aliados” del Caribe insular y continental. Por el contrario,

como se aprecia en la Tabla 1, la administración de Donald Trump seguirá disminuyendo sensiblemente los fondos al respecto que hasta el FY 2016-2017 les había venido ofreciendo la administración de Barack Obama.

Como se verá en la Tabla 2, esas cifras contrastan con la voluminosa “ayuda” que, desde 2017, la actual administración republicana le ha venido ofreciendo al cada vez más represivo y antipopular Gobierno haitiano presidido desde 2017 por Jovenel Moïse, inmerso en una profunda crisis política causada por las grandes movilizaciones populares que, desde mayo de 2018, están exigiendo su renuncia por los graves problemas económicos y sociales que continúan afectando a la mayor parte de su población y por el robo de la generosa asistencia solidaria que le había venido ofreciendo el Gobierno venezolano desde el sismo de 2010, de manera bilateral o como parte de los acuerdos de Petrocaribe.

Para tratar de evitar el derrocamiento del actual Gobierno haitiano, la administración estadounidense continuará impulsando “el diálogo” entre este y las diferentes fuerzas sociales y políticas opuestas a la continuación de su mandato y, en particular, con las que representan los intereses de las clases dominantes de ese empobrecido país.

También seguirán emprendiendo diversas gestiones para que el Consejo de Seguridad de la ONU continúe respaldando la injerencia en los asuntos internos de Haití de las fuerzas extranjeras integrantes de la ahora denominada Misión para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH), continuadora de las impúdicas y represivas acciones contra su población emprendidas desde 2004 por las fuerzas militares de diferentes países del mundo (encabezadas por las de Brasil) integrantes de la mal denominada Misión de la ONU para la Estabilización de Haití.

Tabla 2. Principales países de América Latina y el Caribe receptores de la AS y de la AE de los Estados Unidos (FY 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019)

PAÍSES	MONTO TOTAL EN USD, FY 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019
Colombia (AE+AS)	968 492 000
Haití (AE+AS)	512 336 000
México (AE+AS)	352 034 096
Guatemala (AE+AS)	313 081 000
Honduras (AE+AS)	243 765 000
Perú (AE+AS)	176 995 000
El Salvador (AE+AS)	176 828 000
República Dominicana (AE+AS)	33 888 139
Panamá (AS)	17 979 018
Jamaica (AE+AS)	13 176 000
Paraguay (AE+AS)	8 450 000
Costa Rica (AS)	7 140 000
Trinidad y Tobago (AS)	6 943 000
Belice (AS)	5 821 000
Ecuador (AE)	3 289 000
Argentina (AS)	2 654 238
Nicaragua (AE+AS)	2 454 000
Brasil (AE+AS)	2 280 000
Bahamas (AS)	1 334 000
Uruguay (AMS)	1 253 000
Guyana (AS)	677 000
Surinam (AS)	569 000

FUENTE: Tabla confeccionada por el autor de este escrito sobre la base de las informaciones que aparecen en Security Assistance Monitor 2018, <https://securityassistance.org/>. Consultado el 6 de diciembre de 2018.

Como he documentado en algunos escritos anteriores, el control del territorio y de las fuerzas policiales haitianas por parte de la MINUJUSTH se articularán con las diferentes misiones que seguirá cumpliendo los acrecentados efectivos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos desplegados en el mal llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con las acciones del SOUTHCOM dirigidas a “disuadir mediante el empleo dinámico de sus fuerzas a los competidores globales” (Faller, 2018).

Asimismo, a lograr que sus “socios caribeños”, como las fuerzas militares de Jamaica y Trinidad y Tobago, y “las organizaciones multinacionales de esa región” (entre ellas el Sistema Regional de Seguridad y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencia y Desastres), al igual que las de la República Dominicana, continúen emprendiendo acciones conjuntas con las fuerzas militares y aeronavales, y con otros departamentos y agencias del HSD de los Estados Unidos, con el pretexto de “interrumpir el tráfico de drogas y armas”, prevenir la extensión de “redes extremistas” y cooperar en la respuesta a los mal denominados “desastres naturales” que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, afectan a los Estados y territorios de la cuenca del Caribe (Tidd, 2018).

Sin embargo, en el tiempo que le queda a su primer (y, tal vez, único) mandato, la actual administración republicana continuará desdeñando tanto en su discurso como en sus prácticas internas y externas las evidencias científicas existentes acerca de las interrelaciones entre los desastres socioambientales y económicos provocados por los eventos naturales severos que, de manera cada vez más frecuente y destructiva, han venido afectando a diferentes Estados del Caribe y los cambios climáticos causados, entre otros factores antropogénicos, por la constante y desproporcionada emisión (con

relación al tamaño de su población y su territorio) de gases de efecto invernadero por parte de la socioeconomía estadounidense, incluido su complejo militar-industrial.

Por consiguiente, su maquinaria política y económico-financiera continuará demeritando los reclamos de los Gobiernos de los Estados integrantes de la Caricom (y, en particular, de sus pequeños Estados insulares) de recibir mayores fondos de AE que los que actualmente les asignan los Estados Unidos para tratar de garantizar la *seguridad multidimensional* de esa subregión y, como parte de ella, avanzar en el cumplimiento de todos los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, aprobada por la ONU.⁶

6 En la literatura sobre los temas de la seguridad, generalmente se define *la seguridad tradicional* como aquella atribuible a las interrelaciones que en ese campo se producen entre los Estados integrantes del sistema internacional. Después de culminada la Guerra Fría (y en especial después del 11 de septiembre) ganó legitimidad el empleo del concepto *seguridad no tradicional* para definir las amenazas que le plantan a esos Estados la acción de grupos y organizaciones no estatales, tales como las vinculadas al mal llamado “narcotráfico” y a otros delitos conexos, a diversas acciones “terroristas” y/o al tráfico ilegal de armas y personas, así como a la piratería aérea o marítima. Por presión de diferentes Gobiernos latinoamericanos y caribeños, en la Conferencia Especial sobre asuntos de la Seguridad Hemisférica, efectuada en México en 2003, la administración de George W. Bush aceptó la incorporación del concepto *seguridad multidimensional*, que incluye variables económicas y sociales (como la pobreza y las pandemias que afectan la salud de sus habitantes), y ecológico-ambientales que afectan *la seguridad nacional* de diferentes Estados latinoamericanos y caribeños, y en especial a los pequeños Estados insulares de esa última subregión. Por mi parte, acuñé el término *seguridad imperial* para definir aquellas prácticas de la proyección externa de los Estados Unidos y de otras potencias imperialistas que trascienden sus legítimos intereses de seguridad nacional, en tanto atentan contra la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y externos de otros

Militarización de “la seguridad y la prosperidad” de Centroamérica

La preeminencia de los diversos componentes de la que en este y otros escritos anteriores he denominado “seguridad imperial de los Estados Unidos” (ahora nutridos con la recuperación de diversos conceptos y prácticas de *la seguridad tradicional* facturados durante la Guerra Fría) también se mantendrá en sus asimétricas interrelaciones económicas, político-diplomáticas, militares y en el campo de *la seguridad no tradicional* que su actual administración desplegará con sus contrapartes centroamericanas.

En las páginas anteriores mencioné las estrategias dirigidas a provocar el “cambio de régimen” en Nicaragua; pero a ellas hay que agregar, al menos, las presiones “diplomáticas” que continuará ejerciendo la actual administración estadounidense sobre el Gobierno de Panamá, presidido por Juan Carlos Varela, y sobre cualquiera de los candidatos que resulte electo en los comicios presidenciales que se realizarán en mayo de 2019 para que no continúe desarrollando las que su actual subsecretario del Tesoro, David Malpass, denominó “relaciones no comerciales con China” (Malpass, 2018), y para que sigan respaldando las diversas acciones estadounidenses contra los Gobiernos constitucionales de Nicaragua y Venezuela.

Como se vio en la Tabla 2, a ello hay que agregar el apoyo que le extenderá la maquinaria de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos al corrupto y fraudulento Gobierno de Honduras, presidido por Luis Orlando Hernández,

Estados, al igual que otros principios del derecho internacional público contemporáneo, como la solución político-negociada y el no empleo de la fuerza, ni la amenaza de emplearla para dirimir los conflictos que se le presentan con otros Estados y Gobiernos del mundo.

así como a cualquiera de las tres candidatas (Thelma Aldana, Sandra Torres y Zury Ríos) que resulte electa en la primera o la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se realizarán en Guatemala en junio del presente año.⁷

Paralelamente, la actual administración estadounidense respaldará al gobierno de la llamada “centro derecha” salvadoreña presidido por Nayib Bukele, quien —inmediatamente después de su elección en febrero de este año y luego de reunirse con la embajadora estadounidense, Jean Manes, así como de comunicarse con el principal consejero para la Seguridad Nacional de ese país, John Bolton—⁸ indicó que “una de sus prioridades [...] será fortalecer las relaciones con Estados Unidos” y abandonar el respaldo que le había venido ofreciendo a los “régimenes de Nicaragua y Venezuela” el gobierno presidido por el líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez. También revisar la decisión de ese gobierno de restablecer sus relaciones diplomáticas con la República Popular China (Zuaznábar, 2019).

Por consiguiente, puede afirmarse que la apabullante derrota del candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, y el importante avance político-electoral que en los comicios presidenciales antes mencionados obtuvieron los dos principales candidatos de los partidos de la derecha salvadoreña (ARENA y GANA) le facilitarán a la actual administración republicana

7 Las afirmaciones anteriores surgen de los intercambios de mensajes que he sostenido acerca de esos comicios con el Lic. en Ciencias Políticas, investigador guatemalteco, Luis Guillermo Velásquez Pérez.

8 En uno de sus tuits, Bolton indicó: “Hoy hablé con Nayib Bukele para felicitarlo por su histórica victoria y expresar el apoyo de los Estados Unidos. Discutimos formas de fortalecer la amistad entre los Estados Unidos y El Salvador y de colaborar para restaurar la democracia en Venezuela y contrarrestar las prácticas depredadoras chinas en el hemisferio”.

el cumplimiento de sus diversos objetivos geoeconómicos y geopolíticos hemisféricos.

Y, en especial, de sus operaciones dirigidas a contener “las relaciones no comerciales” de la RPCh con diversos países centroamericanos, al igual que a tratar de derrotar a los que la actual Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos calificó como “anacrónicos y autoritarios gobiernos de izquierda” instalados en América Latina y el Caribe (ESN, 2017).

De todo lo antes dicho se desprende que, en correspondencia con sus xenofóbicas, racistas y militarizadas respuestas frente a las sucesivas caravanas de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que en los meses más recientes han logrado llegar a la frontera de México con los Estados Unidos, en los próximos 21 meses el Gobierno de ese país continuará privilegiando los componentes militares y de seguridad aprobados en la Conferencia para la Seguridad de Centroamérica que, auspiciada por el NORTHCOM y el SOUTHCOM, así como por las Fuerzas Armadas y la marina de guerra de México, se efectuó en esa última nación en abril de 2017.

Asimismo, en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica que, coauspiciada por el Gobierno mexicano presidido hasta el 30 de noviembre de 2018 por Enrique Peña Nieto y por el actual Gobierno de los Estados Unidos, se efectuó entre el 15 y el 16 de junio de 2017 en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida y en la sede del SOUTHCOM, ambas ubicadas en Miami.

Al impacto que pudieran tener en esos acuerdos político-militares y económico-comerciales e inversionistas la nueva política exterior, de defensa y seguridad de México anunciadas, emprendidas o que emprenderá el presidente de ese país y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se volverá después.

Pero antes creo necesario remarcar que, en correspondencia con los acuerdos de las dos conferencias mencionadas en el párrafo anterior, en los próximos meses la maquinaria de la política exterior, de seguridad y defensa de los Estados Unidos utilizará toda la influencia que ha venido adquiriendo en las fuerzas militares mexicanas, para lograr que estas continúen participando de manera sistemática en las diferentes maniobras y operaciones militares concertadas entre el NORTHCOM, el SOUTHCOM y las fuerzas militares y/o policiales de Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá orientadas a mejorar la “colaboración transfronteriza” contra las amenazas que —a decir del exjefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd— le plantearán a la seguridad nacional de los Estados Unidos “las organizaciones del crimen transnacional”, las “migraciones ilegales”, al igual que “las redes criminales y extremistas y sus fuentes financieras” que operan a lo largo y ancho del istmo centroamericano y de los territorios de Belice y de México (Tidd, 2018).

El papel del único Estado latinoamericano “socio extrarregional” de la OTAN

Sobre todo porque la futura participación de las represivas Fuerzas Militares colombianas en esa y otras operaciones comandadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses, tanto dentro como fuera del hemisferio occidental, quedó garantizada por la incorporación de Colombia como “socio extrarregional” de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y por la elección del candidato de la extrema derecha colombiana, Iván Duque, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales realizados en ese país el 17 de junio de 2018.

Siguiendo los pasos de su mentor, el reaccionario expresidente Álvaro Uribe, desde entonces y en contubernio con el de los Estados Unidos, el actual Gobierno colombiano ha venido entorpeciendo sistemáticamente los Acuerdos de Paz firmados por su antecesor, Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016 con el jefe de la comandancia de las otrora llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ahora denominadas Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común), Rodrigo Londoño (*Timochenko*).

En esa lógica, en febrero de 2019, Duque también abandonó las conversaciones para avanzar en una solución político-negociada del conflicto armado que, a solicitud de su antecesor, Juan Manuel Santos, y de la jefatura del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se venían desarrollando en La Habana. Esa organización político-militar, al igual que las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC), seguirán siendo catalogadas como “terrorista” o “narcoterroristas” por parte de las autoridades oficiales estadounidenses.

De ahí —y del lugar relevante que tiene Colombia en la producción y el tráfico de drogas que se comercializan y consumen en los Estados Unidos (incluidos los derivados del opio) y de otras causalidades que veremos después— los voluminosos fondos de AS y de AE destinados (como se vio en la Tabla 2) al Gobierno y a las Fuerzas Militares colombianas incluidos en los FY 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Esto a pesar de las denuncias que se han realizado acerca de la responsabilidad que, por acción u omisión, han tenido algunas unidades y altos mandos militares en los constantes asesinatos de cientos de dirigentes sociales, así como de familiares y excombatientes de las FARC, que sistemáticamente se han venido perpetrando en diversas regiones de ese país.

Ese respaldo de la administración Trump al gobierno de Duque será mayor porque, según quedó explícito en el ya referido “Plan Maestro para el derrocamiento de la dictadura venezolana” elaborado por el SOUTHCOM, a las actuales autoridades políticas y militares colombianas les corresponderá un importantísimo papel en las cada vez más agresivas acciones que continuará desarrollando la maquinaria burocrático-militar de los Estados Unidos contra Venezuela.

Esas acciones incluirán la organización y el empleo de fuerzas paramilitares colombo-venezolanas, la utilización de todas las facilidades que tiene el SOUTHCOM en diversas bases militares colombianas y la eventual participación de sus efectivos en una “intervención regional humanitaria” coordinada por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

A todo lo antes dicho hay que agregar el criterio del Pentágono acerca de que, sobre la base de los acuerdos firmados entre ambos Gobiernos desde 2012, las Fuerzas Militares colombianas tendrán que seguir “exportando sus exitosas experiencias en la lucha contrainsurgente y contra el narcoterrorismo” hacia diferentes países de América Latina; en particular hacia Centroamérica, Perú y Ecuador.

La desestructuración de la UNASUR y el entorpecimiento de la CELAC

Cabe recordar que el cada vez más impopular y proimperialista Gobierno de ese último país, presidido desde los primeros meses de 2017 por Lenín Moreno, luego de algunas vacilaciones, a mediados de 2018 decidió romper los estrechos vínculos con el ALBA-TCP establecidos por su antecesor, Rafael Correa, e incorporarse al Grupo de Lima. Como consecuencia, a comienzos de 2019 reconoció al espurio “presidente venezolano” Juan Guaidó y anunció el rompimiento de todos los compromisos

previamente adquiridos con la UNASUR, incluida la expropiación del edificio de esa organización internacional instalado en Ecuador.

Por consiguiente, la actual administración estadounidense continuará desplegando sus diversas estrategias dirigidas a fortalecer sus relaciones político-militares (entre ellas, los sobrevuelos de sus naves militares sobre el territorio y las aguas marítimas de Ecuador autorizados a mediados de 2018), monetario-financieras y económico-comerciales; incluidos los draconianos acuerdos ya alcanzados con el FMI y la posibilidad planteada por el actual Gobierno ecuatoriano de negociar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

A pesar de las medidas selectivamente proteccionistas y librecambistas que ha venido emprendiendo la administración de Trump en sus interrelaciones con diferentes países del mundo, la eventual suscripción de ese tratado bilateral sería coherente con las estrategias que de manera unilateral o concertada con algunos de sus “socios claves” del continente americano continuarán desplegando los departamentos del Comercio y del Tesoro de los Estados Unidos, con vistas a “contener” y en lo posible revertir las interacciones de la RPCh con diversos Estados latinoamericanos y caribeños.

Adicionalmente, el fortalecimiento de sus relaciones con el actual Gobierno ecuatoriano continuará tributando a las faenas que desarrollará el Departamento de Estado, de consuno con los gobiernos controlados por las diversas fuerzas de la derecha, orientadas a concluir la desestructuración de la UNASUR y, por carácter transitivo, a entorpecer el adecuado funcionamiento de la CELAC que, en su carácter de presidente *pro tempore*, seguirá impulsando el presidente boliviano Evo Morales hasta la próxima cumbre de esa organización prevista para enero de 2020.

Funcional a esos y otros propósitos, ya referidos o que se mencionarán después, de las estrategias de la actual administración estadounidense hacia el hemisferio occidental, será el mantenimiento de su apoyo directo (como lo hizo Trump durante su participación en la reunión del G-20 efectuada en Buenos Aires en los últimos días de noviembre de 2018) o a través del FMI al Gobierno argentino presidido desde finales de 2015 por Mauricio Macri.

Este, con vistas a tratar de garantizar su reelección y en contubernio con el cada vez más politizado poder judicial de ese país, continuará emprendiendo diversas estrategias orientadas a impedir que la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner pueda presentar su candidatura en las elecciones presidenciales que se realizarán el 27 de octubre de 2019.⁹

El cerco político-militar contra Bolivia y Uruguay

Paralelamente, la actual administración republicana mantendrá los estrechos vínculos político-militares, económicos

9 En una consulta que, antes de la terminación de este escrito, le realicé al destacado politólogo argentino Leandro Morgenfeld, me indicó: “El panorama político acá es tan incierto como el [desastre] económico, así que es difícil realizar previsiones. El 22 de junio deben inscribirse las candidaturas presidenciales. Hasta ahora Macri va por la reelección, aunque si sigue cayendo en las encuestas, el plan B es que lo reemplace la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es la que mejor imagen tiene de Cambiemos. Por el lado de la oposición, todo sigue siendo incierto. Si se junta todo el peronismo, seguro le ganan a Macri, pero eso es difícil. Está surgiendo la candidatura del exministro de Economía Lavagna, y todo parece indicar que Cristina esperará a junio para anunciar si es candidata o si apoyará a otro candidato del peronismo. En la manera cómo se resuelva esa ecuación estará la clave electoral”.

y en diferentes campos de la seguridad que ha venido desarrollando con el Gobierno brasileño presidido desde comienzos de 2019 por el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien, el 19 de marzo de ese año, emprendió su primera visita oficial a los Estados Unidos.

En esta, además de reunirse con su homólogo Donald Trump (encuentro en el que uno de los principales temas abordados fueron las acciones conjuntas que desplegarán contra Venezuela), visitó la sede de la Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA) y se entrevistó con el exjefe del Gabinete de la Casa Blanca y principal asesor estadounidense de su campaña presidencial, Steve Bannon, vinculado de manera personal e ideológica con Trump, así como impulsor del llamado Movimiento Internacional de “la derecha alternativa” (*Alt-right*), conformado por diversas fuerzas políticas latinoamericanas y europeas (Arkonada, 2019).

Auspiciado por uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo (quien acompañó a su padre en esa visita a los Estados Unidos), a comienzos de diciembre de 2018 se efectuó en Fox de Iguazú, Brasil, la denominada “Primera Conferencia Conservadora de las Américas” (Barrocal, 2018).

A pesar de las resistencias que se han expresado en los altos mandos castrenses de ese país a instalar una base militar estadounidense en su territorio, así como a sumarse a una eventual “intervención regional humanitaria” contra Venezuela, Bolsonaro y el nutrido grupo de militares que integran su gabinete continuarán favoreciendo los vínculos entre las fuerzas militares y los complejos militares-industriales de Brasil y los Estados Unidos que fueron acordados durante el espurio y corrupto gobierno de su antecesor Michel Temer. También continuarán propiciando la entrega a las principales empresas transnacionales estadounidenses de las grandes reservas

energéticas, minerales y acuíferas existentes en esa nación suramericana.

Asimismo, el gobierno de Bolsonaro seguirá apoyando los principales objetivos de las estrategias de defensa y seguridad de los Estados Unidos, tanto a nivel hemisférico como global. Entre ellos, los propósitos estadounidenses de lograr que el Gobierno de Brasil mantenga su participación activa en las políticas agresivas contra Nicaragua y Venezuela, su distanciamiento con el Gobierno de Cuba y que discontinúe o minimice su participación en el llamado Grupo BRICS. Este último, impulsado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, de consuno con sus contrapartes de Rusia, la India, China y Sudáfrica.

Adicionalmente, en la perspectiva de la actual administración republicana, el fortalecimiento de sus interrelaciones político-militares y económico-financieras con los actuales Gobiernos de Argentina, Chile, Brasil y Paraguay (presidido desde mediados de 2018 por Mario Abdo Benítez, vinculado a una de las tendencias más reaccionarias del Partido Colorado) le creará un contexto subregional muy complicado a las aspiraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia y del Frente Amplio de Uruguay (FA) de lograr la reelección de sus correspondientes candidatos presidenciales en los comicios que se realizarán en ambos países en octubre de 2019.

Con independencia de los ambivalentes resultados de las “pragmáticas” políticas internas y externas desplegadas por los sucesivos gobiernos del FA y, en particular por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (Elías, 2018), la actual administración republicana y sus agencias estatales o paraestatales continuarán desplegando diferentes acciones discretas o encubiertas orientadas a apoyar a los candidatos que, en junio de 2019, finalmente seleccionen los partidos Blanco y Colorado.

Y, en el caso que sea necesaria una segunda vuelta, respaldarán la unificación de los votantes de ambos partidos políticos contra el candidato o la candidata que seleccionen las heterogéneas fuerzas políticas integrantes de la mencionada coalición de fuerzas de izquierda y progresistas que, desde 2005, han venido gobernando ese país suramericano.

Para cumplir los propósitos de este artículo, creo pertinente resaltar que, según algunas de las entrevistas que sostuve en Uruguay entre el 24 y el 28 de noviembre de 2018, el escenario más probable es que se tenga que realizar una segunda vuelta electoral ya que las encuestas que hasta entonces se habían realizado indicaban que solo 37 % de los electores tiene la intención de votar por la candidata o el candidato que finalmente seleccionen los militantes de las diversas organizaciones integrantes del FA.

Ese guarismo es inferior en varios puntos porcentuales a las intenciones de los votantes que se registraron un año antes en los comicios realizados en los tres quinquenios previos. Entre otras razones, porque en la fecha arriba indicada, se habían incrementado en 9 % las intenciones de voto a favor del candidato que finalmente seleccione el Partido Colorado.

Otras informaciones destacaron los estrechos vínculos que en todos esos años han mantenido las fuerzas militares uruguayas con el SOUTHCOM, así como con los actuales mandos de las Fuerzas Armadas brasileñas; incluidos algunos de los ministros militares incorporados al gabinete de Jair Bolsonaro. Según las mismas fuentes, estas se fortalecieron durante la participación de algunas unidades militares uruguayas en la MINUSTAH y en la Misión de la ONU para el mantenimiento de la Paz en la República Democrática del Congo.

En lo que atañe a Bolivia, la actual administración estadounidense continuará las diferentes acciones públicas, discretas o

secretas que —con la participación activa de la NED— han venido desplegando para tratar de unificar las candidaturas presidenciales hasta ahora presentadas por las diversas fuerzas políticas y sociales bolivianas (algunas de ellas de raigambre popular) que han expresado su oposición a la reelección del actual presidente de ese país, Evo Morales, y de su vicepresidente Álvaro García Linera (Tellería, 2018).

Según algunos analistas, en contubernio con el actual Gobierno de los Estados Unidos, algunas de esas fuerzas opositoras están tratando de unificarse alrededor de la candidatura de Carlos Mesa, exvicepresidente del represivo y depuesto gobierno encabezado entre agosto de 2002 y octubre de 2003 por Gonzalo Sánchez de Lozada; quien, desde entonces, está exiliado en los Estados Unidos (Arkonada, 2018).

De manera sibilina así quedó planteado en la Estrategia Integrada de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia aprobada en agosto de 2018, pero que fue difundida públicamente con evidentes fines político-electorales a comienzos de 2019. En esta, entre otros temas que no tengo espacio para detallar aquí, se realizó un análisis tendencioso de las causas del deterioro de las relaciones oficiales entre ambos países y se desacreditaron los avances económico-sociales logrados durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales.

A él lo acusan, sin ningún tapujo, de resquebrajar la independencia de los diferentes poderes del Estado, de “cerrar espacios democráticos”, de “suprimir la oposición política y a los críticos del gobierno”, así como de hostilizar a “los medios de prensa independientes” (Dausá, 2019).

Acto seguido, se sintetizan las metas y los objetivos que tratará de cumplir el jefe de Misión estadounidense en Bolivia, tanto antes como después de las ya referidas elecciones de octubre de 2019. Estas son calificadas como “un

punto de inflexión en la historia boliviana” (Misión de Estados Unidos en La Paz, 2019, traducción al español del autor). Y, partiendo de ese criterio, en su habitual lenguaje edulcorado, se indica:

Sin importar lo que ocurra en las elecciones de 2019, nuestra misión diplomática se concentrará en tenderle la mano al pueblo de Bolivia para apoyar sus esfuerzos dirigidos a fortalecer la libertad de prensa, la inclusión social, la prosperidad, la democracia, la defensa y la protección de los derechos humanos, así como en cooperar con los gobiernos locales y subnacionales en otras áreas de mutuo interés. Mientras el presidente Morales y su gobierno se precian de ser una voz crítica de los Estados Unidos y durante décadas han alimentado al país con propaganda antiestadounidense [...], utilizaremos cualquier oportunidad para mostrarles a los bolivianos que la cooperación con los Estados Unidos le ofrece beneficios a Bolivia, e impulsaremos intercambios educacionales, profesionales y comerciales para que el pueblo boliviano pueda conocer de primera mano a nuestro país y sus valores, con vistas a reducir la fuerza de la retórica antiestadounidense (Misión de Estados Unidos en La Paz, 2019).

Esto indica que, en caso que el dúo Evo Morales-García Linera logre su reelección en la primera o en la segunda vuelta de los comicios que se realizarán a finales de 2019, la maquinaria burocrático-militar de los Estados Unidos y sus agencias paraestatales de inmediato fortalecerán las acciones que han venido desplegando para tratar de desestabilizar y, eventualmente, producir un “cambio de régimen” en ese país suramericano. A ese empeño tratarán de sumar al Gobierno argentino que resulte electo en octubre o noviembre de este año, al igual que a los antes mencionados Gobiernos

de Brasil y Paraguay, así como de Perú y Chile, presididos por Martín Vizcarra y por el acaudalado empresario y líder de las fuerzas conservadoras chilenas, Sebastián Piñera.

La obsecuencia de los mandatarios de Chile, Paraguay y Perú

A pesar de las importantes relaciones económicas y comerciales que Chile y Perú mantienen con la RPCh, de su común pertenencia junto a Colombia y México a la “tercerista” Alianza para el Pacífico (ALPA),¹⁰ así como de la suscripción, en marzo de 2018, junto a México y Perú, del ahora llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (en el cual no participa el Gobierno de los Estados Unidos), tanto Vizcarra como Piñera han demostrado su obsecuencia hacia algunos de los principales componentes de la política hemisférica de la actual administración estadounidense. Tanto en su activa participación en el Grupo de Lima como en sus labores dirigidas a la desestructuración de la UNASUR y a entorpecer el cumplimiento de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada por la segunda Cumbre de la CELAC efectuada en Cuba a finales de enero de 2014.

En el caso de Piñera esa subordinación se hizo aún más patente durante su participación, junto a los presidentes de Colombia y Paraguay, Iván Duque y Mario Abdo Benítez, respectivamente, en la provocación organizada el 23 de febrero de 2019 en Cúcuta —capital del Departamento del Norte de

10 Ese fue el calificativo que le dio a esa alianza el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos. En su criterio, la ALPA debía colocarse en “una tercera posición” frente a los gobiernos de izquierda integrantes del ALBA y los gobiernos neodesarrollistas que entonces participaban en el MERCOSUR.

Santander, Colombia— por los Gobiernos de ese país y de los Estados Unidos con el propósito de desestabilizar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de respaldar al presunto y reiteradamente mencionado “presidente encargado” de ese país mediante la introducción de manera violenta de “ayuda humanitaria” a través de sus fronteras con Colombia y con Brasil.

Como ya se indicó, con la presencia del vicepresidente Mike Pence, esos mandatarios participaron en la reunión que efectuó el Grupo de Lima en Colombia dos días después, en las que se reiteró su respaldo a Juan Guaidó y se acordaron las nuevas acciones que se emprenderán para tratar de derrocar por “vías pacíficas” al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Entre ellas, su respaldo a “la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que investigue la comisión de posibles *crímenes de lesa humanidad* en Venezuela” (Grupo de Lima, 2019).

Potenciales conflictos entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos

Merece consignar que, a diferencia de otros pronunciamientos previos del Grupo de Lima, los acuerdos adoptados en el antes mencionado cónclave fueron expresamente rechazados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, acorde con los postulados constitucionales de su país (irrespetados por su antecesor Enrique Peña Nieto), desde su toma de posesión el 1.º de diciembre de 2018, reconoció la legitimidad del Gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro. En ese contexto, cobrarán una redoblada importancia las estrategias que en los próximos 21 meses desplegará

la maquinaria burocrático-militar y económico-comercial de los Estados Unidos hacia el actual Gobierno mexicano.

A partir de la información que entonces tenía disponible, en el artículo referenciado en la primera página de este escrito señalé que, si la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, de consuno con sus “socios”, “aliados” y “amigos” gubernamentales y no gubernamentales mexicanos, no lograban impedir la victoria político-electoral de Andrés Manuel López Obrador, en los meses posteriores utilizarían todos sus instrumentos de poder (incluidas sus cada vez más fortalecidas relaciones con las Fuerzas Armadas mexicanas) para tratar de mediatizar o descarrilar la gestión del gobierno de la coalición “Juntos haremos Historia”, liderada por el MORENA (Suárez, 2018: 119).

Las informaciones hasta ahora recibidas no me permiten sustentar esa última afirmación. Mucho menos por la manera “respetuosa” en la que —a decir de López Obrador— se han desenvuelto sus relaciones con Donald Trump y con todos los altos funcionarios de su administración que han visitado México después de conocerse los resultados de los comicios efectuados en mayo de 2018, incluidos el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, y el vicepresidente Mike Pence. Este, en compañía de la hija de Trump, Ivanka, asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario mexicano.

Sin embargo, considero que si los propósitos enunciados de su política interna y externa (incluidos en la denominada Cuarta Transformación de su país) se llevan a la práctica, incluso de manera parcial, en el lapso temporal que abarca este escrito, se presentarán conflictos de mayor o menor intensidad, según el caso, entre los Gobiernos de ambos países.

Según diversos analistas, además de las posturas adoptados por la Cancillería mexicana explícitamente contrarias a

los más recientes acuerdos del Grupo de Lima, uno de los detonantes de esos conflictos pudiera ser el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a las militarizadas concepciones de la seguridad hemisférica y mexicana que, como hemos visto en las páginas anteriores, en el futuro previsible seguirá impulsando la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos.

Asimismo, sus reiteradas pretensiones de que México asuma mayores costos y responsabilidades en la “seguridad no tradicional” de Belice y del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), al igual que, vinculado a ella, en la interrupción los constantes flujos migratorios que, provenientes de esos países, que se dirigen hacia los Estados Unidos.

A esos potenciales conflictos bilaterales también pudiera agregarse la posición que finalmente asuma el Senado mexicano (en su mayoría controlado por los representantes del MORENA y de otros de los partidos integrantes de la coalición “Juntos haremos Historia”) frente al asimétrico Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC, por sus siglas en español) signado en las postrimerías de su mandato, y bajo la presión de la administración de Donald Trump, por el ahora expresidente Enrique Peña Nieto.

En consideración del intelectual latinoamericano (radicado en México) John Saxe-Fernández, Peña Nieto aceptó diversas cláusulas que limitan “la independencia y la soberanía de México” y, por tanto, violan los fundamentos constitucionales de la política interna y externa mexicana, al igual que la defensa de estas constantemente proclamada por López Obrador (Saxe-Fernández, 2018).

A modo de conclusión: ocho párrafos y una exhortación

Cualesquiera que sean las decisiones del Senado mexicano con relación al T-MEC, estas no generarán cambios significativos en las estrategias y en algunas de las tácticas que en el futuro previsible desplegarán los gobiernos “permanente” y “temporales” de los Estados Unidos con vistas a tratar de mantener (como han hecho desde finales del siglo xx) la total subordinación de todos los gobiernos mexicanos precedentes a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de la que José Martí denominó “república imperial”, instalada “en el norte revuelto y brutal que nos desprecia”.

Mucho más, por el triunfalismo que se ha apoderado de los más altos funcionarios de la administración Trump a partir de las derrotas o de las grandes dificultades económicas, sociales y políticas que, como fruto de sus acciones cada vez más agresivas o de sus errores propios, están afectando a la mayor parte de los llamados “gobiernos de izquierda o progresistas” instalados en América Latina y el Caribe.

Ese triunfalismo se acrecentó luego de la holgada victoria político-electoral de Jair Bolsonaro en Brasil; con quien Trump y los integrantes de su círculo más cercano, tanto dentro como fuera de la Casa Blanca (cuales son los casos de Mike Pompeo, John Bolton o Steve Bannon), tienen muchas afinidades políticas e ideológico-culturales. Entre ellas, pero no solo, su acérrimo anticomunismo, su racismo, su misoginia, su militarismo, su chovinismo y su total desprecio a los fundamentos científicos del ecoambientalismo.

A lo antes dicho hay que agregar el análisis también triunfalista divulgado por Trump inmediatamente después de conocer los resultados de las elecciones intermedias realizadas

en los Estados Unidos el 6 de noviembre de 2018. En su percepción, la victoria de la mayor parte de los candidatos del Partido Republicano al Senado (y, en especial, de los que él apoyó de manera personal) compensará la mayoría obtenida por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes; ya que, aunque esos representantes podrán dificultar algunas de las políticas internas y externas de su administración, no tendrán suficientes fuerzas para revertirlas.

Mucho menos, para emprender acciones que le dificulten su aspiración de terminar “exitosamente” su primer mandato y su “sueño” de ser reelecto en los comicios presidenciales de noviembre de 2020. Aunque aún faltan 20 meses para esas reñidas elecciones, no descarto totalmente ese escenario, ya que no será la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se reelige un presidente, cuyo partido haya registrado pérdidas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en algunas gobernaciones estatales en las elecciones intermedias realizadas dos años después de iniciar su primer mandato.

No obstante, reconozco que esa y otras anticipaciones indicadas aquí acerca de las estrategias hacia América Latina y el Caribe que desplegará la actual administración estadounidense pudieran estar equivocadas. Entre otras razones porque, como he señalado en varios de mis escritos previos, el futuro no está predeterminado. Es un campo de batalla entre los sujetos sociales y políticos que constantemente pugnarán entre sí (muchas veces, de manera violenta) para defender sus intereses y preservar sus correspondientes cuotas de poder económico, político, social e ideológico-cultural.

Y, sin dudas, esas pugnas se agudizarán en los próximos meses, tanto en la sociedad y el sistema político estadounidense, como en sus interrelaciones con los diferentes

Gobiernos y las diferentes sociedades civiles y políticas de América Latina y el Caribe, así como de otras “potencias globales” o emergentes que están interesadas en edificar un sistema-mundo y un sistema internacional de Estados que no estén subordinados a los intereses geoeconómicos, geopolíticos, así como a las chovinistas y racistas nociones culturales y civilizatorias propugnadas por los sectores reaccionarios que han fortalecido su hegemonía en la administración de Donald Trump y en diversos sectores de la sociedad y del sistema político estadounidense.

Frente a esas realidades, a los pueblos latinoamericanos y caribeños, a sus movimientos sociales, a sus partidos políticos y a sus gobiernos de raigambre popular, así como a sus intelectuales orgánicos, no nos cabe otra alternativa que seguir luchando con “las armas del juicio, que vencen a las otras”, contra esas pretensiones imperiales y de sus aliados latinoamericanos y caribeños. Y, con tanta o más razones que antes, hacerlo guiados por lo que nos dejó indicado José Martí en su célebre ensayo Nuestra América:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbado, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.

La Habana, 20 de marzo de 2019

LAS POLÍTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESPUÉS DE LOS COMICIOS DE 2020: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESCENARIO MÁS PROBABLE

Introducción

Como su título indica, este artículo tiene como único propósito realizar una primera y seguramente incompleta y, en algunos casos, imprecisa aproximación al que considero el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desplegará el presidente estadounidense que resulte electo en los comicios del 3 de noviembre de 2020.

Pero antes de hacerlo, me parece necesario recordar que, como he tratado de demostrar en mis diversos escritos sobre las asimétricas relaciones interamericanas (Suárez, 2006 y 2017), las doctrinas y estrategias desplegadas por esa potencia imperialista hacia el que denominan “hemisferio occidental” han estado guiadas, desde la proclamación de la Doctrina Monroe, por sus seculares propósitos de garantizar su sistema de dominación (hegemonía, acorazada con la fuerza) sobre el ahora llamado “sur político del continente americano”.

Lo antes dicho no niega que, en uno u otro momento de esa bicentenaria historia, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos, así como sus aparatos económicos-financieros e ideológico-culturales no hayan introducido cambios en las diferentes estrategias o tácticas, más o menos inteligentes, que han empleado para

cumplir los objetivos geopolíticos y geoeconómicos indicados en el párrafo anterior.

En algunas ocasiones, esas mutaciones han provocado ciertas modificaciones positivas en el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas o en las políticas específicas que los gobiernos demócratas y republicanos de los Estados Unidos previamente habían venido desplegando en sus interrelaciones con algunos de los gobiernos de los 33 Estados nacionales independientes o semindependientes actualmente ubicados al sur del Río Bravo y de la península de Florida, al igual que con su mal llamado Estado Libre Asociado instalado desde 1952 en Puerto Rico.¹¹

En mi apreciación, esas son las fuentes de las esperanzas que tienen algunos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, de esa última región (y de otras regiones del mundo) con relación a que en los comicios presidenciales que se realizarán a finales de este año [2020] en los Estados Unidos resulte electo el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden.

Esas expectativas se han incrementado a causa de algunas de las encuestas generales que se han divulgado en las semanas más recientes, de las brutalidades del actual presidente estadounidense Donald Trump en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus que está diezmando a su población, así como de la profunda recesión que al menos en los próximos meses seguirá afectando a la economía de ese país con su

11 El concepto “Estados semindependientes” fue acuñado por Vladimir Ilich Lenin en su célebre obra *El imperialismo: fase superior del capitalismo*. Con ese término se refería a los Estados nacionales o plurinacionales que, luego de haber obtenido su independencia política y, en algunos casos, económica, en las condiciones del “capitalismo monopolista” volvieron a caer bajo la férula de la oligarquía financiera: sujeto socioeconómico dominante en las principales potencias imperialistas.

consiguiente impacto en el galopante incremento de cifras de desempleo; incluso en aquellos estados tradicionalmente “demócratas” o “pendulares” que tuvieron una significativa importancia en la elección de Trump en los comicios de 2016.

Comoquiera que, por las razones que veremos al final de este artículo, casi nunca me he animado a realizar pronósticos con relación a los resultados de esos comicios y mucho menos del impacto que estos tendrán en la correlación de fuerzas en el poder legislativo, ahora únicamente quiero indicar que, de los que se efectuarán dentro de casi seis meses, solo pueden surgir los siguientes futuros posibles (o escenarios) excluyentes entre sí:

1. Triunfa Trump y el Partido Republicano mantiene el control del Senado, pero no logra reconquistar la mayoría que tuvo entre 2017 y 2018 en la Cámara de Representantes o, en otro escenario, vuelve a tener la que disfrutó durante ese bienio en esas dos instancias del poder legislativo.
2. Triunfa Biden y el Partido Demócrata recupera su mayoría senatorial (por lo general precaria) y, mantiene (o no), la que desde enero de 2019 tiene en la Cámara de Representantes.

Los análisis prospectivos se deben hacer con la memoria y no con la amnesia

Aunque, como se sabe, salvo excepciones que confirman la regla, ninguna de esas dos cámaras del Congreso son las que deciden la política externa de los Estados Unidos, lo cierto ha sido que en los asuntos vinculados con América Latina y el Caribe la mayoría de las veces se han creado en ellas los

consensos bipartidistas necesarios para respaldar las estrategias, más o menos inteligentes, según el caso, que haya estado desplegando el llamado “inquilino de la Casa Blanca”, ya sea demócrata o republicano.

No tengo espacio en este artículo para demostrar esas afirmaciones, pero creo conveniente recordar que, cuando a comienzos de este año Trump le presentó al Congreso su disparatado y megalómano informe sobre el Estado de la Unión, la actual presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió públicamente el texto de ese discurso.

Sin embargo, cuando antes había entrado al recinto el presunto “presidente encargado” de la República Boliviana de Venezuela, Juan Guaidó, casi todos los senadores y representantes de ese partido lo aplaudieron de manera tan entusiasta como sus colegas republicanos.

En mi opinión eso no podía ser de otra forma porque todos ellos o sus antecesores habían cohonestado las sucesivas directivas presidenciales declarando a Venezuela “como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, anualmente firmadas por Barack Obama y Donald Trump, desde comienzos de 2015 hasta los primeros meses de este año. Y, que conozca, casi ninguno de los actuales senadores y representantes del Partido Demócrata se han opuesto a las multifacéticas y cada vez más draconianas sanciones contra ese país latinoamericano desplegadas desde 2017 hasta la actualidad.

Más aún, las informaciones disponibles indican que la mayor parte de los representantes y senadores demócratas han respaldado las multimillonarias partidas presupuestarias que les ha solicitado la actual administración para fortalecer al que sus principales personeros (con el apoyo del Grupo de Lima) han venido calificando como “el actual presidente legal

de Venezuela, Juan Guaidó”, en su lucha contra “la dictadura narco-terrorista de Nicolás Maduro” (Pompeo, 2020).

Igualmente, para emprender, en estrecha coordinación con el represivo gobierno del presidente colombiano Iván Duque, las acciones que, desde ese país y asesoradas por el SOUTHCOM, han tratado de ejecutar algunos grupos paramilitares colombo-venezolanos (vinculados con el narcotráfico) contra el pueblo y el Gobierno de ese último país; incluidos los frustrados intentos más recientes contra la vida de sus principales autoridades políticas y/o para capturar y trasladar a Maduro con vistas a que fuera juzgado por los tribunales estadounidenses.

Algo parecido pudiera decirse del silencio cómplice que ha guardado el poder legislativo estadounidense frente al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, organizado a lo largo del año pasado por la Casa Blanca, la CIA, la NED y la USAID (Misión Verdad, 2019).

Al respecto cabe recordar que uno de los primeros intentos para derrocar al gobierno de Evo Morales fue emprendido durante el primer año de la administración de Barack Obama, de la cual era vicepresidente el actual candidato presidencial demócrata, Joe Biden; quien —como he documentado en otros escritos (Suárez, 2017b)— fue el que condujo las políticas hacia América Latina y el Caribe (con excepción de Cuba) desplegadas entre 2012 y 2016.

Por consiguiente, Biden tuvo una alta cuota de responsabilidad en el inmediato apoyo que esa administración estadounidense le ofreció al gobierno neoliberal y plutocrático argentino presidido desde 2015 hasta finales del año pasado por Mauricio Macri. Asimismo, en el golpe de Estado mediático, jurídico y parlamentario contra la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, y en el respaldo de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Pentágono a su corrupto sustituto Michel Temer.

Por otra parte, el actual candidato presidencial demócrata también respaldó el escandaloso fraude electoral que se produjo en Honduras en noviembre de 2013, así como todas las acciones emprendidas por la segunda administración de Barack Obama con vistas a desarticular Petrocaribe y el fondo ALBA-Caribe, al igual que a tratar de dividir a la Caricom mediante el impulso de las llamadas iniciativas Energética y para la Seguridad de la Cuenca del Caribe que —como he documentado en un escrito reciente (Suárez, 2019)— han sido continuadas por el gobierno temporal de Donald Trump.

En especial, en los diversos contactos que, antes y después desde la VIII Cumbre de la Américas (efectuada en Perú a mediados de 2018), han realizado los secretarios de Estado, Rex Tillerson y Mike Pompeo, con algunos Gobiernos de los Estados integrantes de la Caricom intencionadamente seleccionados por la administración de Donald Trump. Esas prácticas fueron rechazadas hace poco por la secretaria general *pro tempore* de esa organización: la actual primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.

Escenario más probable de la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe

Por consiguiente, es muy probable que esos propósitos y esas iniciativas —que siempre han contado con el apoyo del Senado y la Cámara de Representantes—, junto a otras que se verán después, seguirán formando parte de la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y de la nueva correlación de fuerzas que, a partir de enero de 2021, se creará entre demócratas y republicanos en el poder legislativo.

A esos senadores y representantes les corresponderá tomar las decisiones con relación a la prórroga (o a la modificación) de la Ley de Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe hasta 2020, aprobada en 2010 por la administración de Barack Obama como sucedánea de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, impulsada, desde 1983, por la administración del republicano Ronald Reagan.

También es muy probable que la próxima administración estadounidense, sea cual sea su color político, continuará respaldando al corrupto y antipopular Gobierno de Haití actualmente encabezado por Jovenel Moïse o al presidente que resulte electo de los comicios del próximo año, bajo la amañada supervisión de la ahora denominada Misión para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH) y de la OEA.

Mucho más porque, cuando se suman las asignaciones de los FY 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, los sucesivos Gobiernos haitianos instalados desde el primero de esos años hasta la actualidad han sido los segundos receptores de la mal llamada Ayuda Económica y de Seguridad entregada a algunos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe durante el último año del mandato de Barack Obama y los primeros dos años de la actual administración estadounidense.

Sin embargo, ninguna de las dos les entregó un centavo a los Gobiernos del Caribe integrantes del ALBA-TCP, fundada a finales de 2004 por los entonces presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, así como San Vicente y las Granadinas, aún encabezados por los primeros ministros Gaston Brown, Roosevelt Skerrit, Keith Mitchell, Timothy Harris y Ralph Gonsalves, respectivamente.

Con la excepción de Dominica (que las efectuó a finales de 2019), en todos esos pequeños Estados insulares se

celebrarán elecciones en el presente año (Legra, 2018). Por consiguiente, es de esperar que, en caso que resulten triunfadores los partidos políticos liderados por esos mandatarios, la próxima administración estadounidense, sea demócrata o republicana, continuará desplegando diversas acciones para tratar de desestabilizarlos y, si le fuera posible, derrocarlos mediante las elecciones anticipadas, previstas en los sistemas electorales de esos países en el caso de que el poder legislativo apruebe un “voto de desconfianza” hacia su primer ministro.

Esto último me coloca en el escenario más probable de las estrategias que, a partir de 2020, desplegarán las autoridades oficiales estadounidenses contra otro de los gobiernos integrantes del ALBA-TCP: el presidido por el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (FSLN), Daniel Ortega. Estas continuarán orientadas a tratar de desestabilizar a ese gobierno y, si le fuera posible, producir el “cambio del régimen” instalado en ese país desde 2006.

Mucho más porque, como se sabe, en 2018 la actual administración estadounidense estimuló las acciones vandálicas emprendidas por las fuerzas integrantes de la ahora llamada Unidad Nacional Azul y Blanco dirigidas a tratar de lograr el colapso de ese gobierno nicaragüense o, cuando menos, que este se viera obligado a adelantar, bajo la supervisión de la OEA, las elecciones presidenciales que, según su calendario constitucional, se tendrán que realizar en 2021.

De manera simultánea, las autoridades oficiales estadounidenses continuaron boicoteando las negociaciones “sin condicionalidades políticas de ningún tipo” que impulsó el presidente Daniel Ortega (Copades, 2019), e implementando las sanciones económicas contra Nicaragua incluidas en la denominada Nicaraguan Investment Conditionality Act (*Nica Act*) aprobada por el Senado estadounidense en diciembre de 2018.

Por consiguiente, cualquiera que sea el candidato presidencial que obtenga la victoria en las elecciones estadounidenses de noviembre de este año, seguirá tratando de unificar a las fuerzas opositoras nicaragüenses para lograr la derrota del candidato presidencial del FSLN en las elecciones previstas para 2021.

Paralelamente, mantendrá (con el apoyo de ambas cámaras del Congreso) sus asimétricas interrelaciones económicas, político-diplomáticas, militares y en el campo de la denominada “seguridad no tradicional” con sus contrapartes centroamericanas. Por tanto, es de esperar que mantenga su apoyo bilateral a los actuales Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá; presididos por Carlos Alvarado, Nayib Bukele, Alejandro Giammattei, Luis Orlando Hernández y Laurentino Cortizo, respectivamente.

También es muy probable que el presidente estadounidense que resulte electo en noviembre de este año siga privilegiando los componentes militares y de seguridad aprobados en la Conferencia para la Seguridad de Centroamérica que, auspiciada por primera vez en su historia por el NORTHCOM y por el SOUTHCOM, así como por las Fuerzas Armadas y la Marina de México, se efectuó en ese último país en abril de 2017. Sobre todo, porque los acuerdos adoptados en esa ocasión fueron ratificados en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica efectuada tres meses después en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida y en la sede del SOUTHCOM, ambas ubicadas en Miami.

En ambas se adoptaron diversos acuerdos dirigidos a desarrollar de manera sistemática diferentes maniobras y operaciones militares concertadas entre el NORTHCOM (cuya área de responsabilidad incluye a México), el SOUTHCOM

y las fuerzas militares y/o policiales de Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá orientadas a mejorar la “colaboración transfronteriza” contra las amenazas que —a decir del entonces jefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd— le plantearán a “la seguridad nacional de los Estados Unidos las organizaciones del crimen transnacional”, las “migraciones ilegales”, al igual que “las redes criminales y extremistas y sus fuentes financieras” que operan a lo largo y ancho del istmo centroamericano y de los territorios de Belice y de México (Tidd, 2018).

Llamo la atención respecto a la participación de las represivas Fuerzas Militares colombianas en esas operaciones militares en los territorios y las costas centroamericanas. Además de que ese país fue incluido como un “socio extrarregional de la Organización del Atlántico Norte” (OTAN), capitaneada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, ello obedecerá a que, sobre la base de los acuerdos firmados en 2012 entre los gobiernos de Barack Obama y Juan Manuel Santos, las Fuerzas Militares colombianas continuarán “exportando” sus experiencias en “la lucha contrainsurgente y contra el narcoterrorismo” hacia diferentes países de América Latina; en particular, hacia Centroamérica, Perú y Ecuador.

De ahí y de su activa participación en los ya mencionados planes agresivos contra la República Bolivariana de Venezuela, que al igual que viene ocurriendo desde la implementación a finales del siglo pasado del llamado Plan Colombia por parte de la administración del demócrata William Clinton hasta la actualidad, los gobiernos de ese país hayan sido el primer receptor de la toda la ayuda económica y militar estadounidense en América Latina y el Caribe. Y, en mi opinión, eso no va a cambiar, cualquiera que sea el resultado de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos.

Por el contrario, el mandatario que resulte electo en esos comicios hará todo lo que esté a su alcance para tratar de garantizar la reelección del actual presidente colombiano, Iván Duque, o de cualquier otro candidato de las fuerzas de derecha de ese país en los comicios presidenciales de mayo de 2022.

Lo mismo hará en las elecciones de igual carácter que a finales de ese año se realizarán en Brasil, con independencia de la suerte que desde ahora hasta allá corra su corrupto y cada vez más debilitado presidente Jair Bolsonaro, quien ha mantenido una “relación carnal” con Donald Trump.

Entre otras razones, porque los gobiernos de los dos países latinoamericanos antes mencionados seguirán siendo la punta de lanza de los Estados Unidos contra cualquier empeño que se emprenda en los próximos años para tratar de rescatar a la UNASUR y, por carácter transitivo, para revitalizar a la CELAC como un foro alternativo a la OEA.

Como he afirmado en otros escritos ya referenciados, desde su fundación en 1948, ese organismo internacional (que en los próximos cuatro años seguirá encabezado por su genuflexo secretario general, Luis Almagro) casi siempre ha sido y seguirá siendo un complemento de las políticas hacia el continente americano que, a partir de 2021, desplegará el mandatario estadounidense que resulte electo a finales de este año.

Este continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar que en el ciclo electoral que comienza en 2021 en diferentes Estados latinoamericanos y culmina en 2024 prevalezcan las fuerzas políticas de la derecha que en la actualidad están mal gobernando en Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, al igual que en Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Lo mismo hará el actual “inquilino de la Casa Blanca” para evitar un retorno al gobierno del Movimiento Al Socialismo de

Bolivia (MAS) en los comicios que, si no cambian las cosas, se realizarán en septiembre del presente año para tratar de legitimar el golpe de Estado que se produjo en ese país el 10 de noviembre de 2019.

Como los lectores seguramente se habrán percatado, he dejado para el final de este acápite las políticas que a partir de 2021 emprenderá Donald Trump (si fuera reelecto) o su contrincante demócrata Joe Biden hacia Argentina, México y Cuba.

Considero que cualquiera de los dos mantendrá una postura hostil frente al Gobierno argentino, presidido desde finales del año pasado por Alberto Fernández. Fundamento ese criterio en la displicencia que, en sus ocho años de gobierno, siempre demostraron Barack Obama y Joe Biden en el desarrollo de sus relaciones con la entonces presidenta y actual vicepresidenta de ese país suramericano, Cristina Fernández de Kirchner.

Cualesquiera que sean las críticas que se les puedan realizar a su gestión interna, ella desplegó una política exterior independiente de los dictados de los Estados Unidos, impulsó —junto a los entonces mandatarios de Brasil y Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva y José Mujica— la reforma y la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al ahora debilitado MERCOSUR, así como las correspondientes fundaciones en 2008 y 2011 de la UNASUR y la CELAC, respectivamente.

Asimismo, respaldó la participación, a partir de 2015, del Gobierno cubano, presidido por Raúl Castro, en la Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril de ese año y condenó de manera enérgica las agresiones contra Venezuela emprendidas por la administración de Barack Obama.

Con sus propias características y en un contexto interno, internacional y hemisférico sumamente complejo, algunas de

esas posturas han sido retomadas por el presidente argentino Alberto Fernández. Para el disgusto de la actual administración estadounidense, él ha permitido que Evo Morales continúe articulando desde Buenos Aires las luchas de diversos sectores populares bolivianos contra el gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, quien, en las próximas elecciones que se realizarán en ese país, pretende mantenerse en este cargo con el respaldo de las demás fuerzas de la derecha boliviana y del gobierno de Donald Trump.

En lo referido a México, cualquiera que sea el presidente que resulte electo en los Estados Unidos a finales de este año continuará presionando al gobierno presidido desde 2018 por Andrés Manuel López Obrador, para que cumpla todos los compromisos asumidos por su antecesor, Enrique Peña Nieto, así como por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la marina de guerra mexicana, en los marcos de las conferencias para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica.

También para que no irrespete todas las estipulaciones del ahora llamado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) signado, a mediados de 2018, por los mandatarios de esos tres países; incluidas aquellas cláusulas lesivas para la independencia y la soberanía de México y, por tanto, violatorias de los fundamentos constitucionales de la política externa mexicana. Entre ellos, los que establecen la no injerencia en los asuntos internos y externos de otros países, vindicados por López Obrador desde la inauguración de su mandato.

Por consiguiente, su mandato ha rechazado las agresiones de la actual administración estadounidense y de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños integrantes del Grupo de Lima contra el Gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro.

Asimismo, les ofreció asilo político a varios de los dirigentes del Movimiento Alianza País perseguidos por el Gobierno ecuatoriano presidido desde 2017 por Lenín Moreno; al igual que a los más conspicuos líderes del MAS de Bolivia, incluidos sus derrocados presidente y vicepresidente, Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes salvaron sus vidas gracias a un intrépido rescate ejecutado por un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Paralelamente, López Obrador emprendió diversas acciones de alto nivel para tratar de revitalizar la CELAC, así como para fortalecer y ampliar sus vínculos políticos, económicos y culturales con el Gobierno cubano, presidido desde comienzos de 2019 por Miguel Díaz-Canel. A su vez, en diversos foros internacionales (incluida la Asamblea General de la ONU), el canciller mexicano condenó las arremetidas agresiones contra ese país emprendidas por la administración de Donald Trump.

En mi concepto, si Trump es reelegido en noviembre de este año, seguirá fortaleciendo el genocida y ya sexagenario bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, y acusando a las autoridades oficiales de ese país de ser las presuntas responsables de la prolongación de la que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, así como otros altos funcionarios de la actual administración estadounidense, de manera sistemática han venido denominando “ilegítima, corrupta y criminal dictadura venezolana” (Pence, 2018; Pompeo, 2019).

Sin embargo, por contradictorio que parezca con todo lo que he venido indicando en las páginas anteriores, soy del criterio de que en caso de que Joe Biden resulte electo, más tarde o temprano, irá derogando buena parte de las directivas presidenciales de Donald Trump contra Cuba y reactivando,

al menos, algunos de los principales acuerdos firmados entre los Gobiernos de ambos países durante los dos últimos años de la segunda administración de Barack Obama.

Entre otras razones, porque dentro de los partidos demócrata y republicano, así como al interior de la propia maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad de los Estados Unidos, al igual que en diversos sectores de su sociedad (incluidos algunos importantes empresarios), perdura el criterio (expresado por Obama) de que la “normalización” de sus relaciones con Cuba es el mejor camino para proteger la “seguridad nacional de los Estados Unidos” y para producir cambios favorables a sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en la economía, en la sociedad, en la ideología y la cultura, al igual que en el sistema político cubano y en su proyección externa hacia diferentes regiones del mundo, incluida América Latina y el Caribe.

Lo antes dicho no implica que el eventual gobierno presidido por Biden vaya a abolir las llamadas “leyes del embargo” contra Cuba y muchos menos la célebre Ley Helms-Burton, firmada por William Clinton en marzo de 1996; ya que para hacerlo cualquier Gobierno estadounidense (demócrata o republicano) que decida revocar esas normas jurídicas (condenadas desde 1992 por sucesivas asambleas generales de la ONU) requeriría la aprobación conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Y, en mi apreciación, parece muy poco probable que, como resultado de las elecciones de noviembre de 2020 para elegir la totalidad de esa última cámara y a un tercio del Senado, se produzca un cambio en la correlación de fuerzas necesarias para derrotar en el poder legislativo a todos aquellos representantes y senadores que tradicionalmente se han opuesto a un cambio constructivo en las políticas de los Estados Unidos

contra Cuba e, incluso, a la restitución del derecho de los ciudadanos estadounidenses de viajar a ese país sin restricciones de ningún tipo.

Reflexiones finales

No obstante, reconozco que esa y otras anticipaciones indicadas en este escrito acerca de las estrategias y las acciones hacia los Gobiernos de los 33 Estados de América Latina y el Caribe que desplegará la administración estadounidense que surja de los cada vez más próximos comicios pudieran estar total o parcialmente equivocadas; ya que, como he indicado en varios de mis trabajos anteriores, el futuro no está predeeterminado. Es un campo de batalla entre los sujetos sociales y políticos que constantemente pugnarán entre sí (muchas veces de manera violenta) para defender sus intereses y preservar sus correspondientes cuotas de poder económico, político, social e ideológico-cultural.

Y la historia nos demuestra que los cambios positivos que ocasionalmente se han producido en las relaciones interamericanas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad siempre han sido frutos de las victorias obtenidas por los movimientos sociales, políticos e ideológico-culturales de los pueblos, así como por algunos Gobiernos latinoamericanos y caribeños en sus luchas, armadas o desarmadas, por obtener la que en 1890 José Martí denominó su “segunda independencia” frente a la República imperial todavía institucionalizada en los Estados Unidos.

El análisis de los escenarios más probables de esas luchas en el cuatrienio 2021-2024 requerirá un esfuerzo conjunto de los principales protagonistas gubernamentales y no gubernamentales de esas luchas, así como de los científicos sociales y de los intelectuales comprometidos con ellas.

Ese empeño inevitablemente deberá incluir el esclarecimiento del impacto que tendrá en ese continente y en sus correspondientes países los cada vez más acelerados cambios que se seguirán produciendo en la economía capitalista mundial y en el sistema internacional de Estados.

Mucho más porque —cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones estadounidenses, así como de las diversas contradicciones que se presentarán en su sociedad, entre y dentro de los principales actores de su sistema político, al igual que en sus interrelaciones con otras potencias integrantes de la llamada “pentarquía del poder mundial”— los grupos y las clases dominantes en los Estados Unidos y su todavía poderosa maquinaria burocrático militar, económico-financiera e ideológico-cultural no abandonarán su pretensión de mantener y, en lo posible, fortalecer su multifacético sistema de dominación sobre el sur político del continente americano.

La Habana, 14 de mayo de 2020

EL “GOBIERNO TEMPORAL” DE DONALD TRUMP: ¿CRISIS O FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL SUR DEL CONTINENTE AMERICANO?

Introducción

Como sugiere la interrogante del título, este artículo está dirigido a analizar si, durante los cuatros años de la administración de Donald Trump (finales de enero de 2017 y de 2021), se cumplieron o no y en qué magnitud los propósitos de los sectores de las clases dominantes y de los poderes fácticos estadounidenses que lo respaldaron (o que se opusieron a algunas dimensiones de sus políticas internas o externas) de restablecer y/o profundizar el multifacético sistema de dominación establecido por los Estados Unidos sobre el que impropriadamente denominan “hemisferio occidental”.¹²

Como he indicado en otros escritos, una de las condiciones necesarias para cumplir esos propósitos siempre ha sido el sistemático fortalecimiento de las alianzas asimétricas establecidas por la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos, así como sus aparatos económico-financieros e ideológico-culturales con sus correspondientes contrapartes de los demás Estados

12 Como se sabe, desde el punto de vista geográfico, el hemisferio occidental abarca las costas occidentales de África y de Europa, así como las costas orientales de Asia y Oceanía.

nacionales o plurinacionales del continente americano, incluido Canadá (Suárez, 2003).

Esas alianzas favorecieron y, en no pocos casos, aún favorecen el control por parte de las empresas (ahora llamadas transnacionales) estadounidenses de los principales recursos naturales y de los sectores más dinámicos de la economía de esos Estados; lo que fortaleció la dependencia estructural (económica, financiera y tecnológica) y funcional de estos a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de la que sigue siendo la principal potencia imperialista del mundo.

Una mirada retrospectiva al sistema interamericano

Por consiguiente, de manera complementaria, los Estados Unidos lograron que la absoluta mayoría de los gobiernos temporales (civiles o militares) de esos Estados aceptaran la hegemonía y el poder de veto que, desde su fundación en 1948, han tenido las diversas administraciones estadounidenses (tanto demócratas como republicanas) en los principales órganos político-militares del sistema interamericano. En particular, en la OEA y en las sistemáticas conferencias de jefes de Ejército, Marina y Aviación que, con escaso conocimiento de la opinión pública, se han venido desarrollando desde la segunda mitad del siglo xx hasta la actualidad.

Estas al inicio habían sido impulsadas por la Junta Interamericana de Defensa (JID) institucionalizada en 1942, pero después comenzaron a ser coordinadas directamente por el SOUTHCOM, con excepción de Canadá y México, que, desde los primeros años del presente siglo, fueron colocados en “el área de responsabilidad” del NORTHCOM. Sin embargo, ambos países participan en las reuniones bianuales de las

denominadas Conferencias de Ministros de Defensa, institucionalizadas en 1995, como parte de la dinámica de las Cumbres de las Américas, iniciadas en Miami un año antes.

Como se conoce, a partir de 1947 ese andamiaje político-militar estuvo sustentado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado por los Estados Unidos y por los Gobiernos de todos los Estados latinoamericanos y de los tres Estados caribeños formalmente independientes (Cuba, Haití y República Dominicana) que entonces existían en esa subregión.

Aunque este tratado tuvo como intención darle un carácter multilateral a la Doctrina Monroe (proclamada de forma unilateral por los Estados Unidos en 1823) y a la Doctrina Truman (proclamada en 1946), su objetivo declarado fue lograr la cooperación de todos los Gobiernos y de las fuerzas armadas de todos esos países latinoamericanos para enfrentar las reales o presuntas “agresiones de potencias extrahemisféricas” contra cualquiera de sus Estados signatarios.

Sin embargo, en los marcos de la Guerra Fría, el TIAR fue utilizado por sucesivos gobiernos demócratas o republicanos de los Estados Unidos para “contener el comunismo” y, con ese pretexto, derrocar (como fue el caso de Guatemala en 1954) o para agredir a cualquier Estado del sur del continente americano que desafiara su sistema de dominación; como sucedió con Cuba a lo largo de la década de 1960 y los primeros años de la de 1970.

Así, sobre la base del TIAR, los Estados Unidos lograron, en 1962, la ilegal expulsión de la OEA del Gobierno revolucionario cubano (instalado en La Habana desde el 5 de enero de 1959) y, poco más de dos años después, compulsó a todos los Gobiernos latinoamericanos y caribeños que no lo habían hecho a romper sus relaciones diplomáticas, económico-comerciales, consulares y culturales con Cuba.

Por diversas razones que no es necesario explicar aquí, pero entre las cuales hay que incluir la anuencia de la administración de Lyndon B. Johnson (finales de noviembre de 1963-últimos días de enero de 1969), el único Gobierno de la región que no acató esa resolución de la OEA fue el mexicano, entonces presidido por Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Y, los que inicialmente se opusieron a ese ucase interamericano, fueron derrocados por diversos golpes de Estado impulsados o apoyados por los Estados Unidos.

Lo antes dicho y su apoyo a la brutal intervención militar estadounidense de finales de abril de 1965 en República Dominicana aumentó el desprestigio a la OEA y de la JID, así como debilitó al TIAR. A ello se unió el progresivo incremento de los Estados miembros de la OEA que se produjo, a partir de 1962, como consecuencia de la descolonización del “Caribe anglófono” (de los cuales el único que suscribió el TIAR fue Trinidad y Tobago), al igual que de la decisión de los Gobiernos de Chile (entre 1970 y 1973), de Perú, Barbados, Jamaica, Guyana y de Trinidad y Tobago (todos en 1972), así como de los de Argentina, Venezuela y Colombia de restablecer entre 1973 y 1975 sus relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y culturales con Cuba. Esto erosionó (aunque no eliminó) la vigencia del TIAR.

Sin embargo, este entró en una profunda crisis a partir de las victorias de las revoluciones granadina y nicaragüense en marzo y julio de 1979, respectivamente. Pero, sobre todo, después del apoyo de los Estados Unidos, entonces presidido por el republicano Ronald Reagan, y de la dictadura militar chilena encabezada, desde septiembre de 1973 hasta finales de 1989, por el general Augusto Pinochet, a la agresión militar británica contra Argentina en 1982.

La inoperancia del TIAR y su inadecuación al llamado “mundo de la posguerra fría”, así como a las amenazas “no

tradicionales” a la seguridad interamericana, era de tal magnitud que el derechista presidente mexicano, Vicente Fox, se atrevió a denunciar ese tratado en 2002. Esa conducta, por una razón u otra, no fue seguida por los gobiernos de “izquierda o progresistas” que se instalaron en América Latina y el Caribe en los dos primeros lustros del siglo XXI.

Ello propició que la administración de Donald Trump, junto a vindicar la vigencia de la Doctrina Monroe y retomar el leguaje anticomunista de la Guerra Fría, utilizara ese vetusto tratado con vistas a tratar de legitimar, con el apoyo de los Gobiernos entonces integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía), sus multifacéticas agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela.

Esto lo hicieron en el momento en que sus desembozadas presiones no lograron reunir en la OEA los dos tercios de los votos necesarios para aplicarle, al Gobierno constitucional de ese país, los postulados de la Carta Democrática Interamericana que había sido aprobada, con algunas pocas reservas, por todos los Gobiernos de los Estados integrantes de esa organización (incluido el de Canadá) en su Asamblea General, efectuada en Lima, el 11 de septiembre de 2001.

No obstante, la administración Trump logró que, por mayoría simple de votos, los Gobiernos integrantes de la OEA reconocieran “la legitimidad” del presunto “presidente encargado de Venezuela”, Juan Guaidó, y que el Gobierno peruano, entonces presidido por Martín Vizcarra, no invitara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de las Américas que se efectuó en Lima a mediados de abril de 2018.

Esto confirmó lo que había señalado en un artículo publicado antes de ese cónclave; en el que, entre otras cosas que

se verán después, había indicado que, en el tiempo que entonces le quedaba al que denominé “primer (y tal vez) único gobierno temporal de Donald Trump”, este continuaría bregando, de manera unilateral o de consuno con sus principales “socios”, “amigos” o “aliados” gubernamentales o no gubernamentales de dentro y fuera del continente americano, con vistas a cumplir los objetivos que se habían proclamado en la remilitarizada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos difundida a mediados de diciembre de 2017 (Suárez, 2018).

Entre ellos, derrocar a los “anacrónicos y autoritarios gobiernos de izquierda” que entonces existían en América Latina y el Caribe y “disminuir la maligna influencia de fuerzas no hemisféricas”; en particular, de la República Islámica de Irán, de la República Popular y Democrática de Corea, de la RPCh y de la Federación Rusa. Como he indicado en los artículos precedentes, estas dos últimas fueron calificadas como “potencias revisionistas” que “usan la tecnología, la propaganda y la coerción para conformar un mundo antitético con nuestros intereses y valores” (ESN, 2017).

Una mirada a los fracasos de la política hemisférica de la “era de Trump”

Una mirada a algunos de esos enunciados permite afirmar que, a pesar de todos los esfuerzos realizados y de sus confrontaciones políticas y económico-comerciales bilaterales o en diversos foros multilaterales con el liderazgo político-estatal de la RPCh (como fueron los casos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, y de la Organización Mundial de Comercio), la administración Trump no logró reducir, al menos significativamente, la influencia del Gobierno y de las

empresas estatales o privadas de esa “potencia emergente” en América Latina y el Caribe (Merino y Naradowski, 2019).

Entre otras razones, porque incluso buena parte de los principales “aliados”, “socios” o “amigos” de los Estados Unidos en esa región mantuvieron y en algunos casos ensancharon sus interrelaciones económico-comerciales y/o político-diplomáticas con la RPCh. Por consiguiente, el único éxito que obtuvo el gobierno de Trump fue evitar la realización de la Conferencia anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se iba a realizar en Beijing en 2019 y, por tanto, de manera coincidente con el sesenta aniversario de la fundación de esa institución financiera.

Asimismo, que, por primera vez en su historia, ocupara la presidencia del BID un representante de los Estados Unidos: el reaccionario asistente especial y director de Asuntos del hemisferio occidental de su Consejo de Seguridad Nacional, el cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone, quien, antes de ser electo, había prometido “poner fin a las políticas del BID centradas en China” (Infobae, 2020).

Como indiqué en uno de los artículos precedentes, tal posición había sido previamente anunciada por el subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, David Malpass (Malpass, 2018), y por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en los marcos de la VIII Cumbre de las Américas, efectuada en Lima.

En lo tocante a Rusia —calificada, junto con la RPCh, como “potencias competidoras globales” en la Estrategia Nacional de Defensa (END) de los Estados Unidos difundida a finales de 2017—, la administración Trump no pudo impedir que el Gobierno de ese país mantuviera sus relaciones diplomáticas con buena parte de sus contrapartes de América Latina y del Caribe.

Tampoco evitar, como se había propuesto el actual jefe del SOUTHCOM, vicealmirante Craig S. Faller, que Rusia empleara “el conjunto de sus herramientas diplomáticas, de inteligencia y de información para tratar de influir en las actitudes del público y en los tomadores de decisiones de la región” (Faller, 2018). Mucho menos, fracturar las interrelaciones políticas, económicas, comerciales, financieras y, en algunos casos, militares de la Federación Rusa con los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, esos Gobiernos también mantuvieron y, en algunas esferas, estrecharon sus interrelaciones con las autoridades oficiales de la República Islámica de Irán y, en diferentes foros internacionales (en especial, en la ONU y en el Movimiento de Países No Alineados) y/o de manera bilateral, expresaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo iraní frente a las sistemáticas y multiformes agresiones de los Estados Unidos y de sus aliados sionistas y sauditas.

El modo en que se desarrollaron las relaciones oficiales e intersolidarias entre esos Gobiernos y el pueblo iraní, así como con la Federación Rusa y con la RPCh, estuvo determinado por la derrota de otro de los objetivos de la administración de Trump: lograr “el cambio del régimen” en los países integrantes del que el recalcitrante asesor para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, había calificado despectivamente como la “troika de la tiranía” y el “triángulo del terror” (cit. en *El Nuevo Herald*, 2018).

Por consiguiente, a pesar de que la debilitó, la administración de Donald Trump tampoco pudo desarticular el ALBA-TCP, a pesar de que ese fue uno de los tantos objetivos del golpe de Estado que se produjo en Bolivia el 10 de noviembre de 2019. Como han documentado diferentes autores, este fue “legitimado” por la OEA y orquestado por la maquinaria de la

política exterior, de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos.

Por tanto, esta respaldó en todo lo que estuvo a su alcance al espurio, corrupto y represivo gobierno de facto encabezado, hasta casi un año después, por Jeanine Áñez. En estos momentos ella está siendo juzgada en Bolivia, ya que, a diferencia de otros altos funcionarios de su administración, así como de los mandos de las fuerzas militares y policiales responsables de la brutal represión que se produjo inmediatamente después del golpe de Estado, no se pudo refugiar en los Estados Unidos o en otros países luego de la victoria obtenida por los candidatos del MAS (incluidos su actual presidente y vicepresidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca) en las elecciones presidenciales y parlamentarias efectuadas en el Estado Plurinacional de Bolivia en octubre del pasado año.

Como parte de su política exterior soberana e independiente, y honrando el legado del líder histórico de la Revolución Democrática y Cultural de ese país, Evo Morales, una de sus primeras decisiones fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, así como reincorporarse al ALBA-TCP; lo que constituyó otro malogro de los objetivos hemisféricos de la administración de Donald Trump.

Previamente, a estos se había agregado el fracaso de todas las acciones desestabilizadoras (algunas de ellas, francamente criminales) emprendidas desde 2018 por las anárquicas fuerzas opositoras al Gobierno nicaragüense, encabezado por el líder del FSLN, Daniel Ortega. Estas habían sido apoyadas, de manera más o menos subrepticias, según el caso, por el Gobierno y el Congreso, así como por diversas agencias oficiales u oficiosas estadounidenses. Entre ellas, la USAID y la bipartidista Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).

Esas agencias, al igual que el secretario general de la OEA, Luis Almagro (cuya reelección en marzo de 2020 fue uno de los logros del ahora exsecretario de Estado, Mike Pompeo), también habrían brindado su sibilino apoyo a las fuerzas políticas opositoras a la reelección de los primeros ministros (Gaston Brown, Roosevelt Skerrit, Keith Mitchell, Timothy Harris y Ralph Gonsalves) de los pequeños Estados insulares del Caribe oriental que, desde la segunda década del presente siglo, se habían incorporado al ALBA-TCP: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, así como San Vicente y las Granadinas, respectivamente.

Por consiguiente, sus correspondientes victorias electorales también hay que incorporarlas a la lista de los fracasos del gobierno temporal de Donald Trump. Mucho más porque estas pueden contribuir a neutralizar las acciones que en el futuro inmediato puedan realizar los Gobiernos de otros Estados nacionales caribeños (entre ellos, los nuevos Gobiernos de Guyana y Surinam que, como veremos después, a finales de 2020 fortalecieron sus correspondientes acuerdos político-militares con los Estados Unidos), con vistas a modificar a su favor el frágil, pero todavía favorable, equilibrio existente en la Caricom con relación a la no injerencia de los Gobiernos de sus 14 Estados miembros en los asuntos internos venezolanos.

A esto debe agregarse las victorias electorales de Andrés Manuel López Obrador y del dúo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en los comicios presidenciales realizados en México, en julio de 2018, y en Argentina, en noviembre de 2019. Sobre todo, porque, antes de los primeros, se publicitaron “las preocupaciones” de diversos congresistas republicanos y de altos funcionarios del gobierno temporal de Donald Trump (entre ellos, su entonces secretario de

Seguridad Interna, John Kelly) respecto a la posibilidad de que el fundador y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) finalmente lograra su victoria en los comicios antes mencionados.

A su vez, en los meses previos a las elecciones argentinas, se hizo evidente el apoyo personal de Trump a la frustrada reelección de su entonces presidente, Mauricio Macri. Para tratar de lograrla, con el imprescindible apoyo de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, el FMI le concedió a ese Gobierno argentino un crédito por un monto de 56 000 millones de dólares.

Además, en mayo de 2019, se divulgó una conversación telefónica entre Macri y Trump en la que, entre otros asuntos vinculados a las coincidencias existentes entre ambos gobiernos con relación a “los desafíos regionales”, este último “expresó su rotundo apoyo a la agenda económica de Macri en pro del crecimiento y a los avances que ha logrado en la modernización de la economía argentina” (Lajtman, 2019).

En ese contexto y ya contando con el apoyo del Gobierno argentino presidido por Alberto Fernández, López Obrador emprendió diversas acciones diplomáticas dirigidas a reactivar las Cumbres de la CELAC, como un foro de concertación política y cooperación diferente a la OEA.

A pesar de las ya mencionadas presiones de la administración Trump para deteriorar las relaciones de los Gobiernos de América Latina y el Caribe con la RPCh, así como para desarticular a la CELAC, en enero de 2018 se efectuó, por primera vez en un país de esa región (Chile), la II Reunión del Foro Ministerial CELAC-China, en la que se aprobó una Declaración Final antitética con los enunciados y la práctica de la política “global” y “hemisférica” que venía desplegando la administración Trump.

Mucho más porque en esa declaración se destacaron “los resultados preliminares del Plan de Cooperación 2015-2019”, se enfatizó “la importancia de avanzar en su ejecución” y se convino “la ampliación y actualización del Plan de Acción Conjunta de Cooperación en Áreas Prioritarias entre los Estados miembros de la CELAC y China hasta 2021” (SINJUA, 2018).

También se acordó celebrar en este año, en ese país asiático o en algún otro latinoamericano y caribeño, la III Reunión del Foro Ministerial CELAC-China; en la que, probablemente, se volverá a analizar la inserción de algunas naciones del sur político del continente americano en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, ya que todos los Gobiernos de esa región que participaron en el Foro realizado en Chile reconocieron que ese proyecto “constituye una importante oportunidad para el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo entre los países involucrados, de conformidad con lo señalado en la Declaración Especial que aprobamos en esta oportunidad” (SINJUA, 2018).

Una aproximación a los éxitos de la política hemisférica del único gobierno de Donald Trump

Nada de lo antes dicho debe interpretarse como que sobrestimo los fracasos de las estrategias y tácticas desplegadas, entre los primeros meses de 2017 y los primeros días de enero de 2021, por los poderes fácticos y el gobierno temporal de Donald Trump contra los gobiernos de “izquierda y progresistas” instalados en América Latina y el Caribe.

Mucho menos porque —como han reconocido las autoridades político-estatales de Cuba, Nicaragua y Venezuela— las agresiones de los Estados Unidos contra esos países y, en

particular, los bloqueos económico-comerciales y financieros, así como otras sanciones aprobadas por la administración de Donald Trump (con o sin apoyo del Congreso estadounidense), han causado serias afectaciones a sus economías y el deterioro, más o menos agudo, según el caso, de las condiciones de vida de amplios sectores de su población, agravadas por la pandemia de la covid-19 que ha venido afectando al mundo desde los primeros meses de 2020.

A su vez, como ya se indicó, uno de los logros de la administración Trump y de sus más cercanos aliados latinoamericanos y caribeños fue la elección de Mauricio Claver-Carone como presidente del BID y la reelección de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA.

Entre otras razones que se verán después, ambas fueron posibles gracias al apoyo a las políticas hemisféricas emprendidas por esa administración estadounidense por parte de los Gobiernos integrantes del Grupo de Lima; incluido el Gobierno de Canadá encabezado, desde 2015, por el líder del Partido Liberal y actual primer ministro, Justin Trudeau. Este, en 2017, “reajustó” su gabinete con vistas a tratar de garantizar la que su entonces recién nombrada ministra de Relaciones exteriores, Chrystia Freeland, definió como sus “relaciones estratégicas” y sus “increíblemente buenas relaciones” con los Estados Unidos (Freeland, 2017).

A lo antes dicho se unieron los éxitos electorales obtenidos entre ese año y 2020 por los representantes políticos de los sectores más conservadores y proestadounidenses de las clases dominantes de diversos países latinoamericanos y caribeños, como fueron, en orden alfabético, los casos de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador (gracias a la traición del presidente Lenín Moreno al legado de la Revolución Ciudadana), El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,

Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Uruguay.

En el espacio destinado a este artículo resulta imposible explicar los pormenores de los comicios presidenciales que se realizaron en esos países. Sin embargo, es imprescindible referir que —dándole continuidad a los objetivos de las “estrategias inteligentes” desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama (Suárez, 2017a)— los resultados de esas elecciones tributaron al cumplimiento de algunos de los más importantes propósitos políticos, geopolíticos y geoeconómicos de la mayor parte de los sectores de las clases y grupos dominantes en los Estados Unidos, así como de las estructuras de la defensa y la seguridad (tradicional y no tradicional) de esa decadente, pero todavía poderosa, potencia imperialista (Rodríguez Gelfenstein, 2014).

Entre otros afanes que veremos después, el control —junto a sus cada vez más estrechos aliados británicos y, en especial, con el gobierno conservador encabezado por el primer ministro, Boris Johnson— del geoestratégico Atlántico sur y de los ingentes recursos naturales existentes en Suramérica, incluidas sus grandes reservas hídricas, minerales estratégicos y de combustibles fósiles (Bruckmann, 2012).

Sin dudas, esas ambiciones se vieron favorecidas por la victoria electoral del candidato de la ultraderecha y de los sectores más reaccionarios del alto mando de las Fuerzas Armadas brasileñas, Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales realizadas a finales de 2018. Este, en razón de sus grandes identificaciones políticas e ideológicas con Donald Trump, de inmediato estrechó sus multifacéticas relaciones oficiales con los Estados Unidos.

En ese contexto y al igual que venía ocurriendo desde el espurio y corrupto gobierno de su antecesor, Michel Temer

(quien había contado con el apoyo del gobierno temporal de Barack Obama), la maquinaria de la política exterior de defensa y seguridad imperial de los Estados Unidos continuó fortaleciendo sus interrelaciones con las Fuerzas Armadas brasileñas y dando diversos pasos (como la virtual subasta de la principal empresa aérea de ese país, Embraer) para subsu-
mir su competitivo complejo-militar industrial.

A ellos se agregó la privatización de las actividades más lucrativas de Petrobras y, consiguientemente, la permisividad de que las principales empresas transnacionales estadounidenses puedan realizar ingentes inversiones en la que los brasileños denominan “la Amazonía Azul”, para referirse a las inmensas reservas petroleras existentes en sus extensas costas en el Atlántico sur.

El control de ese océano, de los ríos afluyentes y de las rive-
ras orientales de la cuenca del Río de la Plata por parte de la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos se vio favorecida por las sucesivas victorias electorales de los candidatos presidenciales de los partidos de “la derecha” paraguaya y uruguaya, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou, en los comicios realizados en esos países a mediados de 2018 y en octubre de 2019, respectivamente.

Como se ha documentado, Lacalle Pou contó con el respaldo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas uruguayas y en particular de aquellos oficiales que habían estrechado sus relaciones con los generales brasileños que habían comandado la mal llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití.

Estos conforman “el núcleo duro” de la gran cantidad de mili-
tares que ocupan importantes responsabilidades en las empresas estatales y en el gabinete de Bolsonaro, incluido su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão (Zibechi, 2019).

Como ya está dicho, de manera convergente las fuerzas políticas más conservadoras y proestadounidenses de clases y grupos dominantes fueron controlando a los Gobiernos de todos los Estados nacionales latinoamericanos con costas en el suroriente del océano Pacífico: Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

El Gobierno de este último país, presidido, desde agosto de 2018, por Iván Duque, vigorizó los acuerdos militares que, durante las dos administraciones de su antecesor, Juan Manuel Santos, y de Barack Obama, habían firmado el Pentágono con las represivas y criminales Fuerzas Militares de Colombia; incluyendo aquellos que, desde 2012, las autorizaron a seguir “exportando” hacia diferentes países de América Latina (en particular hacia Centroamérica, Perú y Ecuador) sus presuntas “exitosas experiencias en la lucha contrainsurgente y contra el narco-terrorismo” (Suárez, 2018 y 2019).

Por eso, no fue extraño que, durante el gobierno de Donald Trump, se fortaleciera el papel de Colombia como “socio extrarregional” de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y como el principal receptor de la “ayuda” económica y militar estadounidense en todo el sur del continente americano.

Tampoco sorprendió que durante los dos años que hasta ahora tiene el gobierno de Iván Duque se hayan incrementado exponencialmente los asesinatos de dirigentes sociales y de combatientes que, como fruto de los Acuerdos de Paz, se desmovilizaron de las otrora llamadas FARC-EP y que su país se haya convertido en la principal base de operaciones de los diversos y hasta ahora frustrados planes estadounidenses dirigidos a derrocar por medios terroristas la que diversos altos funcionarios de la única administración de Trump (entre ellos, su vicepresidente Mike Pence y su secretario de Estado, Mike Pompeo) habían venido denominando de forma sistemática

“ilegítima, corrupta y criminal dictadura venezolana” (Pence, 2018; Pompeo, 2019).

A todo esto se debe agregar el papel desempeñado por ese mandatario colombiano, en conjunto con el cada vez más represivo y políticamente debilitado presidente chileno Sebastián Piñera, tanto en la desestructuración de la UNASUR como en el intento que, con el respaldo de la administración de Donald Trump, se realizó en la llamada Conferencia Democrática, efectuada en Santiago de Chile el 22 de marzo de 2019 con el propósito de fundar el llamado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Esa fallida tentativa solo fue respaldada por Jair Bolsonaro, por Mario Abdo Benítez y por los ahora expresidentes de Argentina y Ecuador, Mauricio Macri y Lenín Moreno, respectivamente.

Sin embargo, ese fracaso no puede ocultar los éxitos que, en los meses previos a su salida de la Casa Blanca, tuvo la administración de Donald Trump en lograr el estrechamiento de las relaciones oficiales de los Estados Unidos con el nuevo Gobierno de Surinam, conformado, desde mayo de 2020, por una coalición de los partidos opositores al Gobierno encabezados por el fundador y líder del Partido Democrático Nacional (NDP, por sus siglas en inglés), Dési Bouterse, quien, durante sus sucesivos mandatos, apoyó la fundación y pervivencia de la UNASUR y se incorporó como observador en el ALBA-TCP.

Por consiguiente, apoyó las acciones emprendidas por varios Gobiernos de América Latina y el Caribe con vistas a impedir la reelección de Luis Almagro y también contribuyó a sostener el ya mencionado “frágil equilibrio” de la Caricom con relación a la no injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de ninguno de los Estados de América Latina y el Caribe.

Como ya se adelantó, los consensos al respecto también se pusieron en peligro a causa del resultado de las disputadas elecciones que se realizaron en Guyana en marzo de 2020. Tras 153 días de indefiniciones, el 3 de agosto fue reconocida la derrota de la coalición de partidos Alianza para el Cambio, liderada por el presidente David Gangrer, que en el decenio previo había gobernado ese extenso país. En consecuencia, asumió su presidencia el actual líder del Partido Cívico Progresista de los Pueblos (PPP/C), Irfaan Ali.

Este, traicionando el legado de los fundadores del PPP (Cheddi y Janet Hagan) y de los líderes anteriores de ese partido, así como tomando como pretexto el histórico diferendo territorial existente entre su país y Venezuela (agudizado por el descubrimiento y la explotación por parte de la poderosa empresa transnacional estadounidense Exxon-Mobile Oil de las grandes reservas de petróleo y gas acompañante en las zonas marítimas en disputa entre ambas naciones), inmediatamente comenzó a estrechar sus relaciones político-militares con los Estados Unidos.

El primer paso al respecto fue su aceptación de la visita que, por primera vez en la historia de las interrelaciones entre los Gobiernos de ambos países, el 17 de septiembre de 2020 realizó el entonces secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, como parte de un rápido recorrido que se inició en Surinam y terminó en Colombia, luego de visitar la región amazónica de Brasil y de reunirse con su proimperialista ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo (Infobae, 2020a).

Uno de los propósitos de esas visitas fue fortalecer el cerco político-militar contra Venezuela incluido en el *Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship—Masterstroke* (Plan Maestro para derrocar a la dictadura venezolana), elaborado por el SOUTHCOM durante 2018 (SOUTHCOM, 2018). Asimismo,

fortalecer las interrelaciones económicas, militares y de seguridad con los nuevos Gobiernos de Guyana y Surinam.

En este último país, se reunió con su nuevo presidente, Chan Santokhi, y con su ministro de Relaciones Exteriores, Albert Ramdin, quien, en sus declaraciones a la prensa, además de resaltar que la visita de Pompeo era un respaldo a la nueva administración, indicó que sus conversaciones se habían centrado “en cuestiones bilaterales y de seguridad, así como en los campos de la energía, la democracia y los asuntos regionales (Infobae, 2020a). A ello Pompeo agregó sus ataques a las inversiones de diversas empresas de la RPCh en esa nación (Infobae, 2020b).

Días después, en los marcos de la visita de Pompeo, el Gobierno guyanés decidió firmar los llamados *Shipriders Agreements* que, desde 1987, habían venido suscribiendo los diferentes gobiernos demócratas y republicanos estadounidenses con los de algunos países del Caribe con el pretexto de “la lucha contra las drogas” (Suárez, 2006: 415).

Y, antecedido por un asimétrico ejercicio combinado entre los guardacostas de ambos países, el 11 de enero de 2021, el jefe del SOUTHCOM, almirante Craig S. Faller, firmó un acuerdo con el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa guyanesa, brigadier Godfrey Bess, “para respaldar una cooperación en materia de defensa efectiva y mutuamente beneficiosa” (Hernández, 2021).

En ese contexto, cabe destacar que, a pesar de la abrupta disminución de los fondos de Asistencia Económica (AE), Militar y de Seguridad (AS) que en los años previos les había entregado la administración Obama a los 14 Estados independientes integrantes de la Caricom (Suárez, 2019), lo dicho en el párrafo anterior también se relaciona con la continuidad de las acciones previamente desplegadas durante esa

administración del Partido Demócrata: la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe.

Desde su divulgación por el entonces vicepresidente y actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esta surgió con el propósito de lo que altos funcionarios de la administración Trump han denominado “eliminar la dependencia energética y financiera” que los Estados de esa subregión presuntamente tienen del Gobierno de Venezuela (Tillerson, 2017; Malpass, 2018). Y, con ese bulo, desestructurar Petrocaribe y los proyectos Alba-Caribe impulsados, desde 2006, por el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y preservados, en medio de grandes dificultades, durante sus dos mandatos constitucionales por el actual presidente de ese país, Nicolás Maduro.

A esto se agregaron las acciones proactivas desplegadas por el SOUTHCOM con vistas a lograr que “sus socios caribeños”, como Jamaica y Trinidad y Tobago, y las organizaciones multilaterales de esa región” (entre ellas el Sistema Regional de Seguridad y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencia y Desastres), al igual que las fuerzas militares de República Dominicana, continúen emprendiendo acciones conjuntas con las fuerzas militares y aeronavales, así como con otros departamentos y agencias del HSD, con el pretexto de “interrumpir el tráfico de drogas y armas”, prevenir la extensión de “redes extremistas” y cooperar en la respuesta a los mal denominados “desastres naturales” que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, afectan a los Estados y territorios de la que ellos denominan cuenca del Caribe (Tidd, 2018).

En ese contexto, hay que resaltar el decidido apoyo que le brindó la administración de Donald Trump al corrupto y cada

vez más antipopular y represivo Gobierno haitiano presidido, desde 2017, por Jovenel Moïse. Este ha sido el segundo receptor de las AE y AS que les ofreció esa administración a todos los Gobiernos de los Estados del sur político del continente americano (Suárez, 2019).

Entre otras razones, por la aceptación del referido mandatario haitiano que sean las fuerzas militares estadounidenses (entre ellas, las que operan desde su ilegal Base Naval de Guantánamo, Cuba) las que controlen el geoestratégico Paso de los Vientos que es la vía más directa para las comunicaciones marítimas entre Europa y África occidental y el canal de Panamá. También las que enfrenten el tráfico ilegal de drogas y los desordenados flujos migratorios dirigidos hacia los Estados Unidos que se realizan a través del mar Caribe y del golfo de México.

Lo antes dicho contribuye a explicar el irrestricto apoyo que le ofreció la Secretaría General de la OEA al autoritario gobierno de Moïse. Sobre todo, después de las cada vez más potentes y organizadas protestas populares que se vienen realizando desde finales de 2018 exigiendo su renuncia a más tardar cuando se cumplan en febrero de 2021 los cuatro años de su elección en los escasamente legítimos comicios presidenciales que se realizaron en febrero de 2017.

En la perspectiva de las diversas fuerzas opositoras, su salida de la presidencia es condición necesaria, pero no suficiente para tratar de encontrar soluciones duraderas a las cada vez más profundas crisis económico, social, sanitaria, de seguridad ciudadana y político-institucional que, desde entonces, ha venido sufriendo ese empobrecido país caribeño (Thomas, 2020).

A pesar de las diferencias existentes respecto a la conculsa situación haitiana, a lo antes dicho también pudieran

agregarse las políticas desplegadas desde su inauguración por la administración de Donald Trump hacia América Central y, en particular, hacia su denominado “Triángulo Norte” conformado, por Honduras, El Salvador y Guatemala.

No es una exageración decir que, en sus primeros cien días, esa subregión y sus interrelaciones con México se colocaron como uno de los primeros puntos de la agenda de los entonces recién nombrados (y posteriormente sustituidos) secretarios del Departamento de Estado, del DHS y del Departamento de Defensa, Rex Tillerson, John Kelly y el belicoso general retirado James Mattis, respectivamente.

Este último desempeñó un importante papel en la celebración, en Cozumel, Quintana Roo, México, entre el 23 y el 25 de abril de 2017 de la Quinta Conferencia para la Seguridad de Centroamérica; ya que, como indiqué en uno de los artículos precedentes, por primera vez en su historia, esta fue organizada por el NORTHCOM y el SOUTHCOM, de consuno con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de México.

Por consiguiente, participaron en algunas de sus deliberaciones los entonces jefes de esos comandos, Lori Robinson y Kurt Tidd, al igual que los ahora exsecretarios de Defensa Nacional y de la Marina de México, el general Salvador Cisneros Fuentes y el Almirante Francisco Soberón Sanz, respectivamente. Asimismo, altas autoridades de seguridad y defensa de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. También, observadores de Canadá, Chile, Colombia, Reino Unido, República Dominicana, al igual que de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y de la Junta Interamericana de Defensa.

Todos ellos abordaron a puertas cerradas temas de tanta trascendencia como la “cooperación regional para combatir

las amenazas transnacionales”, el papel de las “Fuerzas Armadas y de Seguridad en apoyo al orden público y para casos de asistencia humanitaria”, y diferentes “iniciativas de cooperación para fortalecer la seguridad regional”, así como para “explotar [las] oportunidades [existentes] para mejorar la coordinación y cooperación entre las naciones participantes” (*CancunMio*, 2017).

Como complemento a esto acuerdos, el 15 y 16 de junio de 2017 se efectuó en Miami la Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica. En esta participaron de manera secuencial el entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence (quien pronunció las palabras inaugurales) y los ahora exsecretarios de los Departamento del Tesoro, del SD y del HSD, Steven Mnuchin, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente. Asimismo, los secretarios de Hacienda, del Interior y de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, Osorio Chong y Videragay; junto a los presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, y al entonces vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz. Igualmente, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y altos funcionarios gubernamentales de Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y España, así como representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea.

Según el comunicado difundido por el DHS, en esta todos los participantes reafirmaron su apoyo a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica que, impulsada por la administración de Barack Obama, había sido elaborada, a finales de 2014, con la asesoría del BID, por los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. También discutieron políticas para “promover inversiones” de compañías privadas estadounidenses y de otros países en la región y

“facilitar su crecimiento sostenible”, así como “vías tangibles para combatir el crimen organizado y promover la cooperación de seguridad regional, mejorar la seguridad ciudadana y realzar el papel de la ley” (DHS, 2017).

Casi sobra decir que la aplicación de los acuerdos de las dos conferencias antes mencionadas contribuyó a fortalecer el sistema de dominación estadounidense sobre el istmo centroamericano, solo cuestionado, en la medida de sus posibilidades, por el gobierno sandinista nicaragüense.

Sobre todo, después de la fraudulenta reelección en los comicios de noviembre de 2017 del corrupto presidente hondureño, Juan Orlando Hernández Unidos (Arkonada, 2017); de la derrota del candidato presidencial del hasta entonces gobernante del FMLN, Hugo Martínez, en los comicios realizados a comienzos de febrero de 2019, en los que resultó electo el actual presidente de ese país Nayib Bukele (*El Mundo*, 2019). Y, pocos meses después, fue electo como presidente de Guatemala, el político conservador Alejandro Giammattei, quien, años atrás, había sido acusado de ser parte de una estructura dedicada a realizar ejecuciones extrajudiciales (Toro, 2019).

Esos tres mandatarios, al igual que el actual presidente de Costa Rica, electo en 2018, Carlos Alvarado, de inmediato subordinaron sus correspondientes políticas interna y externa a la mayor parte de los dictados de la administración de Donald Trump. Esto le creó un desfavorable entorno geopolítico y geoeconómico al Gobierno mexicano, presidido, desde finales de 2018, por Andrés Manuel López Obrador.

Mucho más porque su antecesor, Enrique Peña Nieto, en las postrimerías de su mandato y como sucedáneo del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, había firmado con los Estados Unidos y Canadá el asimétrico T-MEC que fortaleció la dependencia estructural y funcional de la socioeconomía

mexicana a las necesidades de los Estados Unidos y que, adicionalmente, incluyó diversas cláusulas que limitan “la independencia y la soberanía de México” y, por tanto, violan los fundamentos constitucionales de su política interna y externa.

Por otra parte, como vimos en las páginas anteriores, Peña Nieto, su ministro de Relaciones Exteriores, al igual que sus secretarios del Interior, de Defensa Nacional y de la Marina se habían comprometido con la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos a “bajar” sus fronteras de seguridad imperial hasta el sur de México, así como a impedir que, a través de su territorio y de sus mares adyacentes continuaran llegando al territorio estadounidense los flujos de drogas y de migrantes “ilegales” de diferentes países del mundo, pero en particular de Centroamérica.

Como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso cumplir ese papel sin violar los derechos humanos de los migrantes y sus familias, la administración de Donald Trump decidió deportarlos para el territorio mexicano hasta que las autoridades judiciales estadounidenses los autorizaran a ingresar legalmente a ese país.

Esa decisión le creó al actual Gobierno mexicano y a la recién fundada Guardia Nacional diversos desafíos vinculados a sus legítimos intereses de seguridad nacional. Entre ellos, el impacto negativo que tuvo en la seguridad ciudadana, la cruenta “guerra contra las drogas” emprendida, a partir de 2006, por el entonces presidente mexicano Felipe Calderón, con el apoyo de su homólogo estadounidense, George W. Bush. Esa política fue continuada por su sucesor, Enrique Peña Nieto, durante los dos mandatos presidenciales de Barack Obama.

Este se regocijó por la victoria electoral de Mauricio Macri en las elecciones de finales de 2015, quien, como consecuencia

de la aplicación de políticas neoliberales, provocó el monumental endeudamiento con el FMI y con la banca privada transnacional que volvió a fortalecer la dependencia estructural y funcional de la socioeconomía argentina heredada del gobierno presidido por Alberto Fernández.

Lo dicho y la desidia de los mencionados gobiernos de “derecha” instalados en Brasil, Paraguay y, más recientemente, en Uruguay han desestructurado el Mercosur y postergado la incorporación de Bolivia; cuyo actual Gobierno, presidido por Luis Arce, ha tenido que enfrentar los abruptos retrocesos en su promisorio desarrollo económico y social independiente causados por el corrupto gobierno de facto que se instaló luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

A modo de conclusión: cuatro párrafos, incluidas dos metáforas

En mi concepto, todo lo anterior y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis permiten afirmar que —a pesar de la profunda crisis que está sufriendo la socioeconomía estadounidense y de la creciente polarización política e ideológico-cultural de su sociedad, de su decreciente poder relativo respecto a la RPCh en la economía mundial, del declive de su poderío tecnológico-militar con relación al de Rusia, del debilitamiento del “liderazgo” de los Estados Unidos en el sistema internacional de Estados y de no haber podido cumplir todos los objetivos que se planteó su ESN— durante los cuatro años del gobierno temporal de Donald Trump la maquinaria burocrático-militar de esa potencia imperialista logró fortalecer su sistema de dominación en el continente americano.

Aunque seguramente empleando estrategias y tácticas más inteligentes que las de su antecesor, la recién estrenada

administración de Joe Biden hará todo lo que esté a su alcance para preservar y, si le fuera posible, enriquecer esas “ganancias” en los próximos años. Por tanto, les corresponderá a los gobiernos de “izquierda y progresistas” actualmente existentes o que se instalen en los próximos años, así como a los movimientos sociales, políticos e ideológico-culturales de los pueblos de Nuestra América continuar sus multifacéticas luchas para obtener la que, en 1889, José Martí denominó su “segunda independencia” frente a la República imperial todavía institucionalizada en los Estados Unidos (Martí [1889] 1992: 379).

Mucho más porque la historia ha demostrado que los cambios positivos que ocasionalmente se han producido en las siempre asimétricas relaciones interamericanas, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, han sido frutos de las derrotas que se les han propinado a las clases y los grupos dominantes en nuestros correspondientes países y a las respuestas contrarrevolucionarias emprendidas, de manera más o menos brutales o furtivas, por el que José Martí denominó “gigante de las siete leguas” (Martí [1891] 1992a: 480).

Y en todo esto deberá tomarse en cuenta, ahora más que antes, lo que, de manera premonitoria y metafórica, también él dejó dicho: “El tigre espantado por el foganazo vuelve de noche al lugar de la presa [...] No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta tiene el tigre encima” (Martí [1891] 1992: 484).

La Habana, 27 de febrero de 2021

LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO TEMPORAL DE JOE BIDEN HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN ANÁLISIS INCOMPLETO DE SUS PRIMEROS CIEN DÍAS

Introducción

En un artículo que publiqué en octubre de 2020, adelanté mi criterio de que los “actores sociales, políticos, estatales y no estatales de América Latina y del Caribe” y, en particular, sus Gobiernos de izquierda y progresistas no debían albergar “infundadas esperanzas” respecto a que, en caso de que resultara electo, el actual presidente estadounidense Joseph (Joe) Biden iba a modificar los seculares propósitos de esa potencia imperialista de garantizar y, en la medida de sus posibilidades, fortalecer su sistema de dominación (hegemonía, acorazada con la fuerza) sobre los 33 Estados del ahora llamado “sur político del continente americano” (Suárez, 2020).

Aunque considero que cien días no son suficientes para realizar un análisis adecuadamente documentado de ninguna de las dimensiones de la política internacional que en el futuro previsible desplegará esa administración, en las páginas que siguen referiré, de manera incompleta, los principales cambios y continuidades en las políticas hacia algunos de los Gobiernos de los Estados ubicados al sur del Río Grande y de la península de Florida que se han venido anunciando, tanto por Biden como por su secretario de Estado, Antony Blinken.

Algunas de las acciones contra América Latina y el Caribe del gobierno de Biden

Según todas las informaciones que hasta ahora he recibido, Antony Blinken será el encargado de coordinar la implementación de la “Guía provisional de la estrategia de seguridad nacional” (GPESN), en la que “se describe la visión del presidente Joe Biden sobre cómo Estados Unidos se involucrará con el mundo” (Ritter, 2021). En consecuencia, servirá “como una directriz para que las agencias federales alineen sus prioridades mientras el equipo de Biden elabora una estrategia más concreta a largo plazo” (Espinoza, 2021). La versión final de esas estrategias deberá estar concluida a más tardar a comienzos del próximo año [2022].

Sin embargo, llama la atención que ni en esta, ni en el discurso pronunciado por Blinken el 3 de marzo del presente año, no se haya hecho ninguna mención a la fecha en que se efectuará en los Estados Unidos la IX Cumbre de las Américas, inicialmente pautada para abril de 2021. Ello y la ausencia de referencias hacia esa región en la alocución que pronunció Biden ante ambas cámaras del Congreso en vísperas de cumplir sus primeros cien días en la Casa Blanca, me inducen a pensar que la administración Biden orientará sus esfuerzos a tratar de preservar y, si es posible, ampliar los innegables avances que obtuvo el gobierno temporal de Donald Trump en el fortalecimiento de su sistema de dominación en Suramérica, en Centroamérica y, en menor medida, en la que denominan cuenca del Caribe, incluida Cuba.

De ahí las políticas emprendidas por la administración de Joe Biden con relación a ese país, al igual que contra los actuales Gobiernos de Nicaragua y Venezuela. En la que pudiera ser una referencia a la política de la administración Trump

vinculada a este último país, el único cambio que hasta ahora ha anunciado el Gobierno [demócrata] fue la aseveración de Blinken de que, en los próximos cuatro años, los Estados Unidos no promoverán “la democracia mediante costosas intervenciones militares o intentando derrocar regímenes autoritarios por la fuerza” (Blinken, 2021).

No obstante, el actual presidente estadounidense nuevamente calificó al Gobierno venezolano como una “amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional” de esa potencia imperialista. Asimismo, mantuvo su reconocimiento al espurio presidente Juan Guaidó y anunció que, junto a sus aliados latinoamericanos y de otras regiones del mundo, mantendrá sus sanciones contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro “hasta que existan condiciones mínimas para algún tipo de negociaciones” con las fuerzas opositoras venezolanas reconocidas por Estados Unidos” (Espinoza, 2021).

En lo tocante a Nicaragua, todo parece indicar que el gobierno temporal de Joe Biden continuará desplegando diversas acciones con el objetivo de tratar de unificar a las diferentes fuerzas opositoras al gobierno de Daniel Ortega, con vistas a tratar de lograr su derrota político-electoral en los comicios previstos para finales de este año y, en caso de no lograrlo, comenzará a propagar el bulo de que en estas se cometieron diversos fraudes, para así endurecer las sanciones económicas que desde 2019 le impuso el gobierno temporal de Donald Trump, con el apoyo bipartidista del Congreso de ese país.

Por su parte, el Gobierno cubano, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha denunciado que la actual administración estadounidense ha mantenido incólumes las 243 medidas aplicadas por la antes mencionada administración republicana dirigidas a fortalecer el carácter extraterritorial

del “genocida bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba”, incluidas las 56 sanciones aplicadas en medio de la pandemia de la covid-19 que está afectando a todo el mundo (Díaz-Canel, 2021: 2-7).

Mucho más porque la administración de Joe Biden ha mantenido esas draconianas sanciones con la coartada de que la situación cubana “no es una prioridad” de su política externa (Alzugaray, 2021). Asimismo, ha mantenido a Cuba en las espurias listas “de Gobiernos violadores de los derechos humanos” y de los “Estados patrocinadores del terrorismo”. Esta última dictaminada por Donald Trump en los últimos días de su mandato.

Todo esto se articula con la manera indolente con la que, a pesar de la crisis económica y sanitaria que está afectando a esa subregión, el actual Gobierno estadounidense ha venido conduciendo sus interrelaciones con los “gobiernos de izquierda o progresistas” instalados en algunos de los pequeños Estados insulares de Caribe oriental integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) y, en particular, con los que forman parte del ALBA-TCP.

Como he documentado, la desarticulación de esa alianza fue uno de los objetivos fallidos del gobierno temporal de Donald Trump. Sin embargo, según las informaciones que hasta ahora he podido obtener, en la conferencia virtual que sostuvo Blinken con los 14 ministros de Relaciones Exteriores de la Caricom no se produjo ningún anuncio trascendente con relación a las políticas hacia Latinoamérica y el Caribe que en los próximos años desplegará la actual administración demócrata.

Esto me hace suponer que esta mantendrá los principales pilares de las políticas hacia esa subregión que desplegó la administración de Donald Trump: las iniciativas para la Seguridad y para la Seguridad Energética de la Cuenca del

Caribe. La primera fue impulsada desde 2009 por el gobierno de Barack Obama y la segunda desde 2014 con el objetivo expreso de descarrilar los acuerdos de Petrocaribe y del fondo ALBA-Caribe promovidos por los gobiernos venezolanos presididos por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro.

El “relanzamiento” de esos acuerdos fue aprobado en el encuentro virtual del XX Consejo Político y del X Consejo de Complementación Económica del ALBA-TCP, efectuado a comienzos de julio del pasado año (Camejo, 2020: 42). Esto fue favorecido por la reelección de los primeros ministros (Gaston Brown, Roosevelt Skerit, Keith Mitchell, Timothy Harris y Ralph Gonsalves) de los pequeños Estados insulares del Caribe oriental integrantes de esa alianza: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, así como San Vicente y las Granadinas.

Igualmente, por la victoria de los candidatos del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, en las elecciones presidenciales efectuadas en ese Estado Plurinacional en octubre de 2020. De ahí el apoyo sibilino que ha continuado ofreciéndole la actual administración estadounidense a las fuerzas de la derecha boliviana.

Con tal fin, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jalina Porter, expresó su preocupación por los procesos judiciales emprendidos por la Fiscalía boliviana contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y otros integrantes de su gabinete acusados de las matanzas y los latrocinios que se produjeron en ese país después del golpe de Estado de noviembre de 2019 (Pichardo, 2021).

Cabe recordar que los Gobiernos de los Estados integrantes del ALBA-TCP respaldaron las acciones emprendidas por los actuales presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, con vistas a reactivar

las cumbres de la CELAC; incluido el cumplimiento de los acuerdos de la II Reunión del Foro Ministerial CELAC-China efectuado en Santiago de Chile en enero de 2018.

Según estos, en 2021 deberá realizarse la III Reunión de ese Foro, en la que se volverá a analizar la inserción de algunos países del sur del continente americano en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda que ha venido impulsando el Gobierno de la República Popular China (XINJUA, 2018).

Esto contribuye a explicar las exitosas acciones emprendidas por diversas agencias oficiales o paraestatales estadounidenses, con vistas a garantizar la derrota del candidato presidencial de la Unión para la Esperanza, Andrés Arauz, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas en Ecuador a comienzos de abril del presente año (Arkonada, 2021).

Asimismo, las presiones que realizó sobre el actual Gobierno argentino el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Juan González, durante la visita que realizó a Buenos Aires a mediados de abril del presente año.

Según las informaciones disponibles, aprovechando las buenas comunicaciones establecidas entre Biden y Fernández, así como su interés de realizar una visita oficial a los Estados Unidos (Morgenfeld, 2021), González condicionó el apoyo del Gobierno de su país a las gestiones que está realizando el actual Gobierno argentino para renegociar su voluminosa deuda (cerca de 50 000 millones de dólares) contraída durante el mandato de Mauricio Macri con el FMI y a que “rectifique” el rumbo de algunos de los aspectos de su política exterior. Entre ellos sus actuales relaciones con China y Rusia (Armendáriz, 2021).

Cabe destacar que, previamente, el ahora saliente jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el

general Craig Faller, había visitado Uruguay y Argentina. En este viaje reiteró su preocupación sobre el proyecto de la Armada de la RPCh de emplazar una base en Ushuaia con el propósito de controlar el estratégico paso de Drake entre los océanos Atlántico y Pacífico, así como de habilitarlo como una puerta de acceso a la Antártida. Esta se complementaría con la edificación de un “polo logístico” en la Tierra del Fuego, cuyo gobernador provincial, desde 2019, viene negociando un acuerdo al respecto con empresas chinas (Aharonian, 2021).

De manera paralela, el gobierno de Biden ha anunciado su propósito de dedicar mil millones de dólares anuales para relanzar la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) impulsada desde 2014 por la administración de Barack Obama y continuada con mayores componentes militares y el campo de la “seguridad no tradicional” por la administración de Donald Trump, inmediatamente antes y después de la Conferencia para la Seguridad y la Prosperidad de Centroamérica realizada en Miami a mediados de junio de 2017 (Suárez, 2021).

Aunque esos componentes no han desaparecido, en un comunicado conjunto difundido por el Gobierno mexicano después de la reunión virtual sostenida entre Biden y López Obrador el 2 de marzo de este año, los dos mandatarios “reafirmaron la profunda asociación entre ambos países, basada en el respeto mutuo y en el extraordinario vínculo familiar y de amistad”. Al mismo tiempo, “se comprometieron a trabajar juntos para combatir la pandemia de la Covid-19, revitalizar la cooperación económica y a explorar áreas de colaboración frente al cambio climático” (HISPANTV, 2021).

Asimismo, acordaron desarrollar vías legales para la gestión de los flujos migratorios existentes entre ambos (incluidos los procedentes de Centroamérica) y ratificaron su compromiso

compartido con el T-MEC suscrito a mediados de 2018 por las administraciones de los ahora expresidentes de los dos países, Donald Trump y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio compelido a enviar una nota diplomática al actual Gobierno estadounidense en la que reclamó la suspensión de ayuda financiera por unos 2,5 millones de dólares que le ha venido ofreciendo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con vistas a financiar a las fuerzas políticas opositoras a ese Gobierno mexicano (SPUTNIK, 2021).

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis, confirman mi criterio de que en la larga historia de las asimétricas relaciones interamericanas, las escasas modificaciones positivas en su desenvolvimiento impulsadas por algunos gobiernos demócratas o republicanos estadounidenses, siempre han sido frutos de los victoriosos resultados de las multiformes luchas de los pueblos de Nuestra América dirigidas a obtener la que José Martí denominó su “segunda independencia” frente a la “república imperial” entronizada en los Estados Unidos.

La Habana, 10 de mayo de 2021

BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS, DAVID Y ACEVEDO, ENRIQUE (2017): “CIA veteran Juan Cruz, named to Key National Security Council post for Latin America”, UNIVISION, 11 de mayo.
- AHARONIAN, ARAM (2021): “El comandante Fallar en el faro del fin del mundo”, España: *Rebelión*, 12 de abril.
- ALZUGARAY, CARLOS (2021): “100 días de Biden: Las relaciones cubano-norteamericanas en tiempos de pandemia: un laberinto complejo e incierto”, en <https://toma-partido.fes.de/e/100diasbiden>, consultado el 4 de mayo de 2021.
- APORTES (2014): *La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, Washington: Aportes DPLF.
- ARKONADA, KATU (2017): “Honduras, la historia siempre se repite dos veces”, en <http://www.alainet.org>, consultado el 20 de febrero de 2018.
- _____ (2018): “Bolivia 2019: masismo vs. mesismo”, Buenos Aires: *Resumen Latinoamericano*, 21 de octubre.
- _____ (2019): “Steve Bannon, el mito detrás de los monstruos”, en <https://www.alainet.org/es/articulo/197661>, consultado el 23 de enero de 2019.
- _____ (2021): “Ecuador: Lenín Moreno y la CIA contra Andrés Arauz”, en <https://www.katuarkonada.info/post/ecuador-leninmorenylaciacontraandresarauz>, consultado el 15 de marzo de 2021.

- ARMENDÁRIZ, RUBÉN (2021): “EE.UU. advierte a la Argentina sobre sus relaciones con Rusia y China”, España: *Rebelión*, 20 de abril.
- BAKER, DEAN (2017): “Donald Trump and His Cabinet of Criminals”, *Truthout*, 9 de enero.
- BARROCAL, ANDRÉ (2018): “Quem é quem na cúpula direita das Américas”, en https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/08/politica/1544308707_584980.html, consultado el 15 de enero de 2019.
- BBC-Brasil (2017): “Do jeito que o golpe gosta: Exército dos EUA na Amazônia”, en <http://institutojoaogoulart.org.br/noticia.php?id=18641>, consultado el 5 de mayo de 2017.
- BBC (2017a): “La OEA no llega a un acuerdo sobre la crisis de Venezuela y suspende la sesión”, Washington, 1.º de junio.
- BBC Mundo (2017b): “Los cientos de millones de dólares que América Latina puede perder con el presupuesto presentado por Donald Trump para 2018”, 24 de mayo.
- Bohemia* [s.a.] (2018): “Más de lo mismo contra Cuba”, La Habana: *Bohemia*, Año 110, N.º 4, 15 de febrero.
- BORON, ATILIO (2012): *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, Buenos Aires: Editorial Luxemburg.
- _____ (2019): “El apagón en Venezuela: un crimen de lesa humanidad”, en www.alainet.org/es/articulo/198652, consultado el 17 de marzo de 2019.
- BRUCKMANN, MÓNICA (2012): *Recursos naturales y la geopolítica de la integración suramericana*. Lima, Perú: Instituto de Investigaciones Sociales Perú mundo-Fondo José Carlos Mariátegui.

- BYRON, JESSICA (2018): “Does the United States Trump Administration have a policy towards the CARICOM countries?”, ponencia presentada en la 43 Conferencia Annual de la Asociación de Estudios del Caribe, La Habana, Cuba, 4-8 de junio de 2018.
- CALLONI, ESTELA (2018): “Nicaragua en la mira estratégica del terror imperial”, <https://redh-cuba.org/2018/06/nicaragua-en-la-mira-estrategias-del-terror-imperial-por-estela-calloni>, consultado el 5 de enero de 2019.
- CAMEJO, MARYAM (2020): “El futuro poscovid-19”, La Habana: *Bohemia*, Año 122, n.º 14, 10 de julio.
- CancunMio (2017): “Cozumel sede de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica 2017”, *CancunMio-Noticias*, 25 de abril.
- CHARLES, JACQUELINE (2007): “DHS chief tells Haiti’s president. Start thinking about bringing Haitians on TPS home”, *Miami Herald*, 1.º de junio.
- CMC (2017): “Caricom Foreign ministers call for hands off on Venezuela situation”, en CMC, Bridgetown, Barbados, 22 de mayo.
- CONGRESS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013. *Organization of American States Revitalization an Reform*, Act of 2013.
- COPADES (2019): “Será una nueva ruta, anuncia presidente Daniel Ortega: Diálogo para la paz a partir del 27-F”, *Managua, Boletín especial*, 21 de febrero.
- CUBAMINREX (2017): “Instrumentos bilaterales adoptados entre Cuba y EE.UU. después del 17/12/2014”, <http://www.cubadiplomatica.cu/eeuu/ES/Inicio/tabid/12106/ctl/Details/mid/19842/ItemID/66929/Default.aspx>, consultado el 23 de junio de 2017.

- DAUSÁ, ALEJANDRO (2019): “Bolivia: injerencia en acción”, en <https://www.alainet.org/es/articulo/198658>, consultado el 12 de marzo de 2018.
- DHS (2017): “United States Key Deliverables for the June 15-16, 2017 Conference on Prosperity and Security in Central America”, en <https://www.dhs.gov/news/2017/06/16/united-states-key-deliverables-june-15-16-2017-conference-prosperity-and-security>, consultado el 22 de junio 2017.
- DÍAZ-CANEL, MIGUEL (2021): “Discurso pronunciado en la clausura del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba”, La Habana: *Granma*, 20 de abril.
- EFE (2017): “Centroamérica, EE.UU. y México se reunirán en Miami para hablar Plan Alianza”, Tegucigalpa, 30 de mayo.
- _____ (2017a): “Estados Unidos cree que la guerrilla del ELN es ‘estúpida’ si no firma la paz”, en *EFEUSA*, 15 de junio.
- _____ (2018): “Wilbur Ross: Latinoamérica no tiene que elegir entre China o EE.UU.”, Lima, 13 de abril.
- El Mundo* (2019): “Proyecciones Políticas y Económicas de El Salvador”, 13 de febrero.
- El Nuevo Herald* (2017): <http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/amerivca-latina/cuba-es/article152250937.html=storylinkcpy>, consultado el 24 de mayo de 2017.
- _____ (2018): “EE.UU. anuncia nuevas sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua”, <https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article220959175.html#storylink=cpy>, consultado el 3 de noviembre de 2018.
- El tiempo* [s.a.] (2017), <https://www.eltiempo.com/opinion/editorial>, consultado el 10 de abril de 2017.

- ELÍAS, ANTONIO (2018): “La inserción económica internacional es cada vez más favorable al capital transnacional”, en Antonio Elías, Gabriel Oyhantçabal y Rodrigo Alonso (coords.) (2018): *Uruguay y el continente en la cruz de los caminos: Enfoques de economía política*, Montevideo: Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez.
- ESN (2017): *National Security Strategy of the United States of America*, Washington, Estados Unidos: Seal of the President of the United States.
- ESPIÑOZA, MANUEL (2021): “Los objetivos del imperialismo yanqui, con el nuevo títere presidente”, en <http://www.portalalba.org/index.php/areas/internacional-geopolitica/imperialismo/27087-los-objetivos-del-imperialismo-yanqui-con-el-nuevo-titere-presidente>, consultado el 5 de mayo de 2021.
- FALLER, CRAIG (2018): Respuestas a las preguntas formuladas por los integrantes del Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos, en *Las estrategias hacia América Latina y el Caribe de la administración de Donald Trump*, <https://redh-cuba.org>, consultado el 25 de octubre de 2018.
- FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, JORGE (2017): “En México existe conciencia de que no sería sano que la renegociación se empalme con los procesos electorales”, en <http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-mendez/2017/05/18/1164183>, consultado el 30 de mayo de 2017.
- Financial Times* (2017): “Mexico calls on Trump to reuse TPP deals to reanimate NAFTA”, en <https://www.ft.com/content/ebb/605e-2c1a-11e7-9ec8-168383da43b7>, consultado el 1.º de mayo de 2017.

- FREELAND CHRYSTIA (2017): “Address by Minister Freeland on Canada’s foreign policy priorities”, Ottawa: *Global Affairs Canada*, 6 de junio.
- GARCÍA LORENZO, TANIA (2016): “El Caribe: ¿Una zona de paz?”, ponencia presentada en el Primer Seminario Internacional “Realidades y desafíos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, convocado por el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, La Habana, 21-23 de septiembre.
- GEHRKE, JOEL (2017): “Rex Tillerson and John Kelly. US responsible for Mexican drug violence”, en *The Washington Examiner*, 18 de mayo.
- GORTNEY, WILLIAM (2016): *Statement of Admiral William E. Gortney, United States Navy Commander, United States Northern Commander and North American Aerospace Defense Command before The Senate Armed Services Committee*, Washington, USNORTHCOM and NORAD, 10 de marzo.
- Gran Oriente Nacional de Puerto Rico* (2018): “Basta ya de atropellar al pueblo puertorriqueño con medidas de austeridad que solo aplican a la clase trabajadora”, San Juan, 25 de marzo.
- GRUPO DE LIMA (2019): Declaración oficial de la reunión efectuada en Colombia el 25 de febrero de 2019, en <https://www.canadainternational.gc.ca/venezuela/highlights-faits/2019/2019-02-25-lima-group-declaration.aspx?lang=spa>, consultada el 3 de marzo de 2019.
- HERNÁNDEZ, CARLOS E. (2021): “EE.UU. y Guyana realizan un ejercicio naval y fortalecen la cooperación militar bilateral”, en *Noticias Infodefensa América*, <https://www.infodefensa.com/latam/2021/01/14/noticia-guyana-realizan-ejercicio-naval-fortalecen-cooperacion-militar-bilateral.html>, consultado el 25 de febrero de 2021.

- HIRSCHFELD, JULIE (2017): [s.t.] https://www.nytimes.com/es/2017/05/18/renegociación-tlcn-carte-inicio/?em_pos=small&emc=edit_bn_20170518&nl=boletin_art=o&nid=6002559&ref=o&nid=60025459&ref=headline&te=1, consultado el 25 de mayo de 2017.
- HISPANTV (2022): “AMLO tilda de ‘ofensiva’ política de EE.UU. hacia otros países”, en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/538503/amlo-politica-injerencista-eeuu>, consultado el 3 de marzo de 2022.
- INFOBAE (2020): “Mauricio Claver-Carone, presidente electo del BID: ‘Esta victoria es para Latinoamérica y el Caribe’”, en <https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/09/12/mauricio-claver-carone-presidente-electo-del-bid-esta-victoria-es-para-latinoamerica-y-el-caribe/>, consultado el 12 de septiembre de 2020.
- _____ (2020a): “Pompeo visita Surinam: interpretado como un apoyo a la nueva Administración”, en <https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/17/pompeo-visita-surinam-interpretado-como-un-apoyo-a-la-nueva-administracion/>, consultado el 24 de febrero de 2021.
- _____ (2020b): “En Surinam, Pompeo elogia a las empresas estadounidenses ante la competencia china”, en <https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/17/en-surinam-pompeo-elogia-a-las-empresas-estadounidenses-ante-la-competencia-china/>, consultado el 24 de febrero de 2021.
- ISACSON, ADAM (2016): “Peace Colombia: What’s New About It?”, Washington Office on Latin America, 15 de febrero.

- ISACSON, ADAM *et al.* (2013): *Hora de escuchar. Tendencias en asistencia de seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe*, Washington: Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF), Center for International Policy (CIP) & Washington Office on Latin American, 13 de septiembre.
- _____ (2015): “Increase enforcement at Mexico’s southern border: an update on security, migration, and U.S. assistance”, Washington Office on Latin American, noviembre.
- JID (2014): *El Sistema Interamericano de Defensa*, Secretaría Junta Interamericana de Defensa, Washington.
- KINOSIAN, SARA *et al.* (2015): “Estados Unidos no debería exportar el ‘éxito’ de la guerra de Colombia contra las drogas”, en <http://es.insghtcrime.org/análisis/estados-unidos-no-debería-exportar-exito-guerra-colombia-contra-drogas>, consultado el 12 de julio de 2015.
- La Jornada* (2017): “Cozumel: soberanía vulnerada”, México, 26 de abril.
- LAJTMAN, TAMARA (2019): “*Macriland*, EE.UU. en la Argentina de Macri”, en <https://www.nodal.am/2019/05/argentina-mauricio-macri-recibio-el-apoyo-de-donald-trump-de-cara-a-la-campana/>, consultado el 19 de junio de 2020.
- LEGRA BROOKS, DIANA (2018): “Mapa político del Caribe (Caricom)”, ponencia presentada en la IV Conferencia de Estudios Estratégicos, Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), La Habana, octubre de 2018.
- LÓPEZ OBRADOR, MANUEL (2021): “México presentará queja a EE.UU. si financia a ONG ‘opositora y golpista’”, en https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-eeuu--actualizaci%C3%B3n-_m%C3%A9xico-presentar%C3%A1-queja-a-eeuu-si-financia-a-ong-opositora-y-golpista-/46596926, consultado 7 de mayo de 2021.

- MALPASS, DAVID R. (2018): *U.S. and Latin America: Partnering for Mutual Growth, Transparency, and the Rule of Law*, Washington: Center for Strategic & International Studies, 2 de febrero.
- MARTÍ, JOSÉ ([1889] 1992): “Congreso internacional de Washington: Su historia, sus elementos y sus tendencias”, en *José Martí. Obras escogidas en tres tomos*, t. II, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____ ([1889] 1974): “Congreso Internacional de Washington, New York, 2 de noviembre de 1889”, en *José Martí, Nuestra América*, La Habana: Casa de las Américas.
- _____ ([1891] 1992): “Nuestra América”, en *José Martí. Obras escogidas en tres tomos*, t. II, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1992.
- _____ ([1895] 1974a): “Carta a Manuel Mercado”, en *José Martí: Nuestra América*, La Habana: Casa de las Américas, 1974.
- MERINO, GABRIEL E. Y NARADOWSKI, PATRICIO (coords.) (2019): *Geopolítica y economía mundial: el ascenso de China, la Era Trump y América Latina*, La Plata, Argentina: Centro de Investigaciones Geográficas y IdIHCS, CONICED, Universidad de La Plata.
- MISIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN LA PAZ (2019): “Integrated Country Strategy: Bolivia” (for Public Release), aprobada el 21 de agosto de 2018.
- MISIÓN VERDAD (2019): “El golpe que vino desde afuera: geopolítica e intervención en Bolivia”, en Venezuela: *Boletín Entorno*, Año 17, N.º 83.
- MOJICA, FRANCISCO JOSÉ (2000): “Determinismo y construcción de futuro”, en Francisco López Segrera y Daniel Filmus (coords.): *América Latina 2020: Escenarios, alternativas, estrategias*, Buenos Aires: FLACSO-Temas Grupo Editorial.

- MORGENFELD, LEANDRO (2021): “100 días de Biden: Biden y la Argentina”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: *Toma Partido*, FES briefing, abril.
- NAUERT, HEATHER (2018): “Canciller interino de EE.UU. se reúne con líderes caribeños en Cumbre de Lima”, en <https://www.martinoticias.com/a/secretario-estado-reune-lideres-caribenos-cumbre-americas/172314.html>, consultado el 16 de abril de 2018.
- OBAMA, BARACK (2008): *Renewing U.S. Leadership in the Americas*, Washington: Obama for America.
- _____ (2016): *Directiva Presidencial De Políticas-Normalización Estados Unidos-Cuba, Directiva Presidencial De Política/Ppd-43*, Washington: The White House, 14 de octubre de 2016.
- PALMIERI, FRANCISCO (2017): Acting Assistant Secretary, Bureau of Western Hemisphere Affairs U.S. Department of State-Remarks for the Council of The Americas Conference: Americas Outlook, Washington D.C.: Department of State, 9 de mayo.
- PANETTA, LEON (2012): *La política de defensa para el hemisferio occidental*, Department of Defense United States of America, Washington.
- PENCE, MIKE (2018): “Discurso del Vicepresidente Pence en la Sesión Plenaria de la Cumbre de las Américas”, Washington, Estados Unidos: Oficina del Vicepresidente, en <https://cu.usembassy.gov/es/discurso-del-vicepresidente-pence-en-la-primera-sesion-plenaria-de-la-cumbre-de-las-americas/>, consultado el 20 de abril de 2018.
- _____ (2019): “Discurso pronunciado en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación de Venezuela, efectuada el 26 de enero”, Washington D.C.: Department of State.

- _____ (2019a): “Conferencia pronunciada en el Centro McConnell, Kentucky, el 2 de diciembre de 2019”, Washington, Departamento de Estado (traducido por Ismael Zuaznábar).
- PPR (2016): *Plataforma del Partido Republicano*, aprobada en la Convención de Cleveland, 19 de julio.
- PICHARDO, MILAGROS (2021): “Cancillería de Bolivia cita a representantes de EE.UU. y Brasil y les pide abstenerse de injerencia”, en <https://www.granma.cu/mundo/2021-03-20/cancilleria-de-bolivia-cita-a-representantes-de-ee-uu-y-brasil-y-les-pide-abstenerse-de-injerencia-20-03-2021-11-03-41>, consultado el 20 de marzo de 2021.
- QUINTANA TABORGA, JUAN RAMÓN (2016): *BoliviaLeaks: La injerencia política de Estados Unidos contra el proceso de cambios (2006-2010)*, La Paz, Ministerio de la Presidencia.
- RAMÍREZ CAÑEDO, ELIER (2016): “Donald Trump y Cuba: ¿Del Smart power al stupid power?”, La Habana: *Boletín Por Cuba*, 14 (96), 6 de diciembre.
- REUTERS (2017): Despacho cablegráfico, 6 de abril.
- _____ (2017a): “Trump advisor meets with key critics of Venezuela’s Maduro”, Washington, 8 de mayo.
- _____ (2018): “EE.UU. dice no dejará liderazgo comercial del hemisferio a países autoritarios”, Lima, 13 de abril.
- RITTER, SCOTT (2021): “El colapso pendiente del ‘Orden Internacional basado en reglas’ es una amenaza existencial para los Estados Unidos”, en <http://www.rt.com>.
- RIVAS PALACIO, RAYMUNDO (2017): “Manotazos a Peña Nieto”, <https://www.elmanana.com/opinion/editoriales/manotazo-a-pena-nieto-2776016.html>, consultado el 4 de mayo de 2017.

- ROBINSON, LORI J. (2018): *Statement before the Senate Armed Services Committee*, Washington, United States Northern Command And North American Aerospace Defense Command, Washington: NORTHCOM y NORAD, 15 de febrero.
- ROBINSON, W. (2016): “Trumpism, 21st Century Fascism, and the Dictatorship of the Transnational Capitalist Class”, en <https://www.facebook.com/WilliamIRobinsonSociologist/>, consultado el 15 de enero de 2017.
- RODRÍGUEZ GELFENSTEIN, SERGIO (2014): *La balanza de poder: las razones del equilibrio de Sistema Internacional*, Santiago de Chile: Editorial Biblos/ Politeia.
- RODRÍGUEZ PARRILLA, BRUNO (2108): “Réplica de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en la VIII Cumbre de las Américas”, en <https://es-la.facebook.com/cubadebate/posts/10155878216133515/>, consultado el 17 de abril de 2018.
- ROMERO, EDGAR (2018): “Funcionarios del Comando Sur de EE.UU. en Ecuador: ¿Cuál es el motivo de esta visita?”, Buenos Aires: *Resumen Latinoamericano*, 27 de marzo de 2018.
- SAM (2016): Security Assistance Monitor, Washington, en <https://securityassistance.org/>, consultado el 17 de septiembre de 2016.
- SÁNCHEZ, ALEJANDRO (2017): “US military instructors head to Paraguay for training”, United Kingdom: *IHS June’s Defense Weekly*, 25 de mayo.
- SANTOS, JUAN MANUEL (2017): “The Promise of Peace in Colombia”, Nueva York: *New York Times*, 18 de mayo.

- SAXE-FERNÁNDEZ, JOHN (2018): “Unilateralidad agresiva y crisis de transición hegemónica”, Ciudad Autónoma de México: Grupo de Trabajo CLACSO *Crisis y Economía Mundial*, N.º 25, noviembre.
- Security Assistance Monitor (2018), <https://securityassistance.org/>, consultado 15 de marzo de 2018.
- SOUTHCOM (2018): Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship–Masterstroke, Voltaire Network, consultada el 25 de febrero de 2018.
- _____ (2016): Venezuela Freedom-2 Operación, Red Voltaire, consultada el 25 de febrero de 2018.
- STARGARDTER, GABRIL (2017): “Trump proposes Deep U.S. spending cuts in Mexico, Central America”, Reuters, 24 de mayo.
- SUÁREZ SALAZAR, LUIS (2000): *América Latina y el Caribe: medio siglo de crimen e impunidad (1948-1998)*, La Habana y Nafarroa-Navarra: Zambon Iberoamericana y Editorial José Martí.
- _____ (2003): *Madre América: Un siglo de violencia y dolor 1898/1998*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____ (2006): *Un siglo de terror en América Latina: crónica de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad*, Australia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela: Ocean Sur.
- _____ (2010): *Obama: La máscara del “poder inteligente”*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____ (2015): “La anormalización de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba. Una mirada después de la VII Cumbre de las Américas”, Argentina: *Voces del Fénix*, Vol. 4, N.º 44.

- _____ ([2014] 2016): “La política hacia América Latina y el Caribe bajo la presidencia de Barack Obama: Una mirada desde la prospectiva crítica”, en Darío Salinas (coord.): *América Latina: Nuevas relaciones hemisféricas e integración*, México: Universidad Iberoamericana A.C./Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigación de América Latina y el Caribe.
- _____ (2016a): “La política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe: una mirada después del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Cuba”, ponencia presentada en el evento académico internacional “América Latina en disputa: Estado, gobierno y sociedades en el nuevo milenio”, auspiciado por la Maestría de Estudios Políticos Latinoamericanos y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, así como por la Sociedad Latinoamericana de Economía y Pensamiento Crítico (SEPLA).
- _____ ([2011] 2017): “Las estrategias inteligentes de Barack Obama: continuidades y cambios”, en Luis Suárez Salazar (2017): *Estados Unidos vs. Nuestra América: el Gobierno de Barack Obama*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____ (2017a): *Estados Unidos vs. Nuestra América durante las dos administraciones de Barack Obama (2009-2017)*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____ (2017b): “El gobierno temporal de Donald Trump: Una redoblada amenaza para Nuestra América”, La Habana: *Boletín Se dice cubano*, N.º 20, 16 de mayo.
- _____ (2018): “Las políticas del gobierno temporal de Donald Trump contra Nuestra América: una mirada prospectiva y retrospectiva”, en *Cuba Socialista*, 4.ª época, N.º 7, enero-abril de 2018.

- _____ (2018a): “Las políticas del gobierno temporal de Donald Trump contra Nuestra América: una mirada hasta la VIII Cumbre de las Américas”, en Casandra Castorena, Marco A. Gandasegui (hijo) y Leandro Morgenfeld (coords.) (2018): *Estados Unidos contra el mundo*, Ciudad de México: CLACSO-Siglo XXI Editores.
- _____ (2019): “Las estrategias hacia América Latina y el Caribe de la administración Trump hasta el 2020: algunas anticipaciones”, en Juan José Ramón Quintana (coord.): *América Latina en el proyecto de dominación de Estados Unidos: pautas y perspectivas en el Siglo XXI*, La Paz: Escuela de Gestión Pública Plurinacional y Observatorio de Geopolítica.
- _____ (2020): “Las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe después de los comicios del 2020: una primera aproximación al escenario más probable”, en *Estados Unidos: situación interna e internacional en el entorno de las elecciones y la pandemia*, México: Anthropos Editorial, Nariño S.L/ Siglo XXI.
- _____ (2021): “El ‘gobierno temporal’ de Donald Trump: ¿crisis o fortalecimiento del sistema de dominación de Estados Unidos sobre el sur del continente americano?”, en Leandro Morgenfeld y Mariana Aparicio Ramírez: *El legado de Trump en un mundo en crisis*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores y CLACSO.
- TELLERÍA, LORETA Y REINA GONZÁLEZ (2015): *Hegemonía territorial fallida: Estrategia de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012*, La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.
- TELLERÍA, LORETA (2018): “Bolivia en la mira: Los oscuros destinos de la ayuda externa de Estados Unidos”, enviado por correo electrónico al autor de este libro el 31 de julio de 2018.

- THOMAS, FRÉDÉRIC (2020): “Haití se ahoga bajo el peso de su oligarquía y de Estados Unidos”, en <https://www.google.com/search?q=Thomas+Frederik+Hait%C3%AD+se+ahoga&sxsrf=APq-WBtbO>, consultado el 22 de junio de 2020.
- TICKNER, ARLEN (2014): *Colombia, the United States, and Security Cooperation by Proxy*, Washington Office on Latin America.
- TIDD, KURT W. (2018): *Posture Statement Before the 115th Congress Senate, Armed Services Committee*, Miami, Estados Unidos: United States Southern Command, 15 de febrero.
- TILLERSON, REX (2017): “Secretary-of-State-designate Rex Tillerson’s confirmatio answers on Latin American Policy”, en <http://latinamericagoesglobal.org/2017/01/secretary-state-designate-rex-tillersons-cpmmments-lartin-america-policy-confirmation-hearing/>, consultado el 15 de enero de 2017.
- _____ (2017a): Secretary of State Rex Tillerson-remarks as released By State Department, Washington, 3 de mayo.
- _____ (2018): “US Engagement in the Western Hemisphere”, en <http://redint.isri.cu/el-compromiso-de-los-estados-unidos-en-el-hemisferio-occidental-us-engagement-western-hemisphere>, consultado el 2 de julio de 2018.
- TORO, DAVID (2019): “La cuarta es la vencida: nuevo presidente, viejos males”, en www.prensacomunitaria.org, consultado el 12 de agosto.
- TORRES RIVERA, ALEJANDRO (2016): “La Junta Fiscal”, power point enviado al autor de este libro el 11 de julio de 2016.
- TRUMP, DONALD (2017): National Security Presidential Memorandum on Strengthening the Policy of The United States Toward Cuba, Washington, 16 de junio.
- VASCÓS, FIDEL (2016): “La Cumbre de América del Norte en Ottawa”, ponencia presentada en la XIII Conferencia de

- Estudios Americanos “Realidades y perspectivas de los procesos progresistas y de izquierda de Nuestra América”, convocado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, La Habana, 19 al 21 de octubre.
- VERGARA MATTEI, CECILIA (2019): “Prosur, la estrategia divisionista de Washington para sepultar Unasur”, en <http://estrategia.la/2019/03/22/prosur-la-estrategia-divisionista-de-washington-para-sepultar-unasur/>, consultado el 26 de marzo de 2019.
- WALT, STEPHEN (2017): “Trump Doesn’t Know What He Doesn’t Know About Foreign Policy”, en <http://foreignpolicy.com/2017/0108/trump-doesnt-know-what-he-doesnt-know-about-foreign-policy/>, consultado el 3 de febrero de 2017.
- WEISBROT, MARK (2015): “Obama fase another disastrous Summit due to sanctions against Venezuela”, Washington: *The Hill*, 9 de abril.
- WOLA (2016): “A First glance at the 2017 Foreign Aid request for Latin America”, Washington, 9 de febrero.
- XINJUA (2018): “Declaración de Santiago II Reunión Ministerial del Foro Celac-China”, en <http://www.chinacelacforum.org/esp>, consultado el 22 de enero 2018.
- YEPE, ROBERTO (2017): “Senate Foreign Relations Committee Hearing”, en *Selección informativa sobre política exterior norteamericana*, La Habana: ISRI, N.º 13, 18 de enero.
- ZIBECHI, RAÚL (2019): “Brasil: de las ‘misiones de Paz’ a la ‘ayuda humanitaria’”, México: *La Jornada*, 15 de febrero.
- ZUAZNÁBAR, ISMAEL (2019): “Proyecciones Políticas y Económicas El Salvador”. Correspondencia mediante correo electrónico entre el autor e Ismael Zuaznábar, el 14 de febrero de 2019.



DEL AUTOR

Luis Suárez Salazar. (Guantánamo, Cuba, 14 de mayo de 1950). Graduado en Ciencias Políticas, posgrado en Filosofía, Dr. en Ciencias Sociológicas y Dr. en Ciencias. Escritor adscrito al Registro del Creador Literario del Instituto Cubano del Libro (ICL), así como Profesor Titular e integrante del Comité Académico de la Maestría en Relaciones Internacionales que imparte el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI), de La Habana, Cuba.

Es integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC), de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), del Claustro del Doctorado en Historia y de las Cátedras del Caribe “Norman Girvan” y “Ernesto Che Guevara” de la Universidad de La Habana. Igualmente, es Miembro de Mérito e integrante de la Junta de Gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), del Consejo Consultivo de expresidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y de los Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) “Estudios sobre Estados Unidos” y “Crisis, alternativas y respuestas de los pequeños Estados insulares del Caribe”.

Ha participado en más de 450 eventos académicos y científicos y ha publicado más de 140 artículos y ensayos en

diversas publicaciones periódicas, académicas o seriadas nacionales e internacionales. Algunos de ellos han sido incluidos en 54 libros compilados o coordinados por otros reconocidos autores cubanos o de otros países del mundo. Por otra parte, ha sido autor, coautor, coordinador y compilador de 28 libros. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, al inglés, al italiano, al portugués y al ruso.

Además, ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Por su trayectoria política y laborar se destacan tres reconocimientos otorgados por el Consejo de Estado de la República de Cuba. A su vez, por su obra científica, académica y literaria, ha recibido Mención de Honor del Jurado del Segundo Premio Internacional de Ensayo “Pensar a Contracorriente”; Premio de la Crítica Científico-Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba y del Instituto Cubano del Libro; Mención Honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado por el Ministerio de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela; Diploma de reconocimiento por “su contribución a la formación de los especialistas para las relaciones internacionales de la Revolución Cubana” conferido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en ocasión del 30 aniversario del ISRI; Diploma y sello conmemorativo del 15 aniversario de la Mesa Redonda transmitida por el canal Cubavisión; Diploma Emilio Roig de Leuchsenring otorgado por la UNHIC en reconocimiento a su “notable contribución a la investigación histórica, la formación de valores y la conciencia antiimperialista del pueblo cubano”; Premio del Lector otorgado en 2018 por el Instituto Cubano del Libro a su compilación *Fidel Castro: Las crisis de América Latina: diagnósticos y soluciones*, y Sello conmemorativo 60 Aniversario de la UNEAC.